

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
Convocatoria 2019 – 2021

Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Relaciones Internacionales con
mención en Seguridad y Derechos Humanos

Buenaventura: Una cuna de resistencia y construcción de paz en Colombia.
Caso: comunidad negra de Yurumanguí entre 1998 y 2020

Linda Yorlady Posso Gómez

Asesora: Cécile Mouly
Lectores: Fredy Rivera Vélez y Mónica Maher

Quito, marzo de 2022

Dedicatoria

Para quienes dedican su vida a construir paz en medio de la guerra. Su corazón noble y su lucha incansable por transformar el país, es esperanza de un mundo mejor. Son ejemplo vivo de que la paz no es una utopía, sino que se construye cada día. A ustedes, que me enseñaron que hay que cuidar lo que se ama, la vida, la familia, el territorio. Para Yurumanguí, Buenaventura y Colombia porque en medio de tantos males notorios son luz que brilla, sigan cultivando esperanzas y construyendo paz.

Epígrafe

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”

Mahatma Gandhi

Tabla de contenidos

Resumen	VIII
Agradecimientos.....	IX
Introducción	1
Presentación y justificación del tema	1
1. Objetivos y preguntas de investigación.....	4
2. Perspectiva teórica.....	6
3. Metodología de investigación	7
4. Estructura de la tesis.....	8
Capítulo 1	10
Marco teórico/conceptual.....	10
1. ¿Qué es la construcción de paz? Construcción de paz, perspectiva liberal y comunitaria	10
1.1. Definición de construcción de paz	11
1.2. El modelo liberal de construcción de paz.....	14
1.4. La paz híbrida.....	17
2. Resistencia no violenta	18
2.1 Definiciones y teorías generales sobre la resistencia civil	18
2.2. Resistencia civil en contextos de conflicto armado.....	20
2.3. Comunidades de paz.....	24
3. Entre la perspectiva comunitaria y el giro local: la paz territorial	26
Conclusiones	31
Capítulo 2	33
Estrategias de resistencia pacífica y su aporte a la construcción de paz en el territorio (1998-2015)	
33	
1. Dimensiones analíticas: Política organizativa y sociocultural	34
2. Un territorio en conflicto, un río de resistencia	47
2.2. Planes de contingencia	48
2.3. El diálogo	51
2.4. Hacia una soberanía alimentaria, desde la economía solidaria	53
2.5. Estrategias de divulgación: De lo individual a lo colectivo	54

3. Proyecto “comunidad escuela”.....	57
4. Estrategias de resistencia no violenta: “Soy yurumanguireño de respeto, no siembro ni cultivo coca”.....	60
4. Aportes a la paz en el territorio.....	64
Conclusiones	68
Capítulo 3	70
Las contribuciones de Yurumanguí al proceso de paz en Colombia (2015-2020)	70
1. Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET)	73
2. Transformación pacífica de conflictos	78
3. Sustitución de cultivos ilícitos.....	85
3.1. “No vamos a dejar sembrar coca”	85
3.2. Sanar y prevenir.....	90
4. Reconciliación.....	94
Conclusiones finales.....	103
Lista de referencias.....	109

Ilustraciones

Figuras

Figura 1. Niveles de liderazgo.....	13
Figura 2.1 Dimensiones analíticas de resistencia no violenta en Yurumanguí	36
Figura 2.2 Estrategias de resistencia no violenta desde la dimensión organizativa	42
Figura 2.3 Estrategias de resistencia no violenta desde la dimensión sociocultural en	¡Error! Marcador no definido.3
Yurumanguí.....	43
Figura 3.1 Proceso organizativo.....	79
Figura 3.2. Erradicación de cultivos ilícitos.....	88
Figura 3.3 Mural de la música.....	98
Figura 3.4. Bienvenida al espacio comunitario en San Antonio de Yurumanguí	100

Tablas

Tabla 1. Funciones de la Junta de Consejo y APOUNURY	41
Tabla 2. Acciones de resistencia no violenta	63

Declaración de cesión de derecho de publicación de la tesis

Yo, Linda Yorlady Posso Gómez, autora de la tesis titulada “Buenaventura: Una cuna de resistencia y construcción de paz en Colombia. Caso: comunidad negra de Yurumanguí entre 1998 y 2020” declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de Investigación en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos concedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-ND 3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, marzo de 2022

Linda Y. Posso Gómez

Linda Yorlady Posso Gómez

Resumen

Por más de medio siglo la historia de Colombia estuvo marcada por un conflicto armado interno que dejó alrededor de 9 millones de víctimas. El acuerdo de paz de 2016 fue un logro importante para el país y para quienes padecieron el horror de la guerra. En este escenario, las comunidades que actualmente son reconocidas víctimas del conflicto armado, construyeron formas autónomas no solo para sobrevivir a este flagelo sino para construir paz desde sus territorios, tal es el caso de la Comunidad de Yurumanguí ubicada en zona rural del distrito de Buenaventura – Valle del Cauca.

Esta investigación se orientó a partir de la pregunta: ¿De qué manera el proceso de resistencia noviolenta de la comunidad del río Yurumanguí que inició en 1998, aportó al proceso de construcción de paz en Colombia después de la firma del acuerdo de paz de 2016? El objetivo fue identificar y examinar las formas de resistencia noviolenta que desarrolló esta comunidad entre el 1998 y 2015 y su aporte a la construcción de paz en el territorio. Posteriormente, se analizó cómo a partir de su experiencia la comunidad aportó a la construcción de paz en Colombia. Su aporte se ubicó en cuatro ejes principales: (i) los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), (ii) la transformación pacífica de conflictos, (iii) la solución al problema de cultivos ilícitos (iv) y la reconciliación en clave de no repetición.

En términos metodológicos la investigación hizo un análisis cualitativo a partir de revisión documental, observación in situ, entrevistas semiestructuradas a líderes, lideresas, académicos, y un ex combatiente de las FARC. Se encontró que pese a las distintas formas de violencia directa, cultural y estructural que afrontó la comunidad de Yurumanguí, sus pobladores construyeron un proceso de resistencia noviolenta que fortaleció su proyecto de autonomía comunitaria, les permitió mantenerse en el territorio y construir paz.

Agradecimientos

A Yurumanguí, por abrirme las puertas de su territorio y hacerme sentir parte de él. Por dejarme explorar sus luchas, sus logros, sus temores. Por querer compartir con otros su experiencia, su resistencia y sobre todo por enseñarnos que un camino hacia la paz se construye con juntanza, con amor, con identidad y autonomía. Gracias por ser esperanza de un mundo mejor.

A mi mentora y amiga, Cecile Mouly. Por su entrega y dedicación, por su amor a las comunidades y su vocación por visibilizar a aquellos que construyen paz desde abajo. Gracias por confiar en mí, por recibir con afecto mi propuesta, por apoyarme y darme luces para entender que lo Internacional es ‘siempre’ comunitario y sobre todo, mil gracias por tu tiempo.

A mi mami y mi papi, Deyanira Gómez y Eliecer Posso, porque estuvieron en todo este camino, siendo guía e inspiración. Gracias por nunca dudar de mí y por todo lo que son, me enseñaron con ejemplo el valor de la constancia. Mami, a ti gracias por cada llamada y voz de aliento esas noches en las que sentía no poder más, este logro también es tuyo.

A mis hermanos Jennifer, Dubar, Steven, Eliecer, Iván y Edwin. Porque sus palabras, sus consejos, y todos los momentos que compartimos los guardo en mi corazón. Gracias por dedicarme su tiempo y ayudarme a avanzar. Jenny, a ti gracias especiales por apoyarme en cuerpo y alma, sin ti esto no sería posible.

A amigos y conocidos que con sus buenas energías han estado pendiente de este proceso, a mi familia Bonaverense porque el logro de uno es un logro de todas y todos.

Introducción

Presentación y justificación del tema

Colombia es considerado uno de los países con la democracia más antigua de América Latina. Pero también es el único país en la región con un conflicto armado interno que se extendió por más de medio siglo. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto armado dejó más de 9 millones de víctimas.¹

Las desigualdades sociales y económicas, la ausencia del Estado, la exclusión y negación de la participación política en la época bipartidista durante los siglos XIX y XX son algunas de las causas estructurales de este conflicto armado. Bajo estas circunstancias surgieron grupos armados como las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) a finales de la década de los 60 e inicios de los 70, quienes, al igual que grupos paramilitares, se configuraron actores relevantes del conflicto. Esta realidad significó el desarrollo sistemático de diferentes tipos de violencia, tanto directa como estructural y simbólica (cf. Galtung 2010).

El fin de las confrontaciones armadas entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC marcó durante mucho tiempo la agenda política del país. Sin embargo, solo cuatro presidentes a lo largo de la historia abrieron las puertas a una salida negociada del conflicto armado dando paso al diálogo formal. Pero solo uno de ellos logró llevar las negociaciones a un acuerdo de paz. Los tres primeros fueron Belisario Betancur entre 1982 y 1986, seguido por César Gaviria entre 1990 y 1994 y Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 (Tiempo 2016)² Estos intentos de negociación con las FARC, pese a que no llegaron a buen término, son un precedente importante.

Así, solo fue hasta el 2012 que bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se abrieron las puertas a un proceso de paz, que inicio con una fase exploratoria antes de desarrollarse formalmente y culminar en un acuerdo de paz en 2016. Pese a los múltiples obstáculos, el “Acuerdo para la

¹ Sitio web del Registro Único de Víctimas, consultado el 12 de septiembre del 2020
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

² Si bien, hubo varios intentos de otros expresidentes por entablar diálogos con la guerrilla de las FARC, no se llegó a consolidar una etapa formal del proceso. No obstante, cabe recordar que el primer presidente en crear una comisión de paz fue Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien nombró al expresidente Carlos Lleras Restrepo para buscar contactos con la guerrilla del M-19.

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016 dio paso a una nueva etapa para el país. Un elemento importante que lo diferencia de otros acuerdos de paz es que este acuerdo otorga especial importancia a las víctimas del conflicto que durante más de medio siglo no fueron reconocidas por el Estado, pero que, pese a todo, desarrollaron iniciativas de paz en medio de la guerra.

El reconocimiento de las víctimas ha sido un paso importante para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En efecto, este acuerdo de paz visto desde una concepción teórica busca la construcción de una paz positiva (Galtung 2010), en tanto busca superar no solo la violencia directa sino distintas formas de violencia estructural y cultural, y también da paso al reconocimiento de otros actores relevantes como lo son las comunidades de base en el proceso de construcción de paz.

Las iniciativas y estrategias que permitieron a las comunidades resistir y re-existir en medio de la guerra son clave para seguir avanzando en la construcción de paz desde una visión amplia e incluyente. En virtud de ello, esta investigación se enfoca desde un estudio de caso en las estrategias de resistencia no violenta que una comunidad rural del distrito de Buenaventura ha desarrollado en el marco del conflicto armado colombiano.

En general, la investigación académica ha girado en torno a procesos de resistencia no violenta en comunidades o territorios de paz. Mouly y Garrido (2018), Hernández (2012) y Masullo (2015) han investigado de manera particular experiencias de resistencia no violenta en el territorio colombiano, algunas basadas en identidades étnicas como es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca o del Consejo Comunitario Mayor de la ACIA (Hernández 2012), esta última, sin embargo, menos investigada en el escenario académico.

Algunos autores han señalado la importancia de las iniciativas de paz a nivel local con relación a la contribución que hacen en la construcción de paz en un escenario más amplio (Lederach 2007; Hancock y Mitchell 2012; Mouly y Garrido 2018). Su base en lo comunitario es una fuente de experiencias que retroalimentan los esfuerzos de paz a nivel nacional. Esto tiene relación con la

llamada “paz territorial”, término que busca tomar en cuenta los esfuerzos de las comunidades partiendo de una noción amplia y multidimensional de lo que constituye la construcción de paz, más allá de ser un asunto centralizado y focalizado en actividades específicas como el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de excombatientes o la justicia transicional, dando relevancia a la complejidad de relaciones sociales y dinámicas de apropiación que se consolidan en los territorios.

Desde esta lógica, resulta importante investigar territorios como Buenaventura, principal puerto de Colombia en la costa pacífica, caracterizado por estar históricamente en disputa territorial y ser foco de las guerrillas (especialmente de las FARC y el ELN), los paramilitares y los grupos armados organizados (GAO) también llamados grupos delincuenciales organizados (GDO)³, pero donde se han tejido estrategias de resistencia noviolenta que han permitido a los pobladores mantenerse en el territorio y construir paz territorial, misma que hoy se convierte en un elemento transversal en el marco de la construcción de paz en Colombia.

Este es el caso de Yurumanguí, un consejo comunitario de comunidades negras (CCCN) conformado por trece veredas, ubicado en la zona rural del distrito de Buenaventura, constituido en 1998, “liderado por 54 yurumanguireños que representan a los habitantes de las 13 veredas ubicadas a lo largo de cerca de 54 mil hectáreas” (Reyes 2019)⁴. Los habitantes de este lugar, durante tres décadas tuvieron que ‘convivir’ con el Frente 30 de las FARC. Desde 1999 y hasta 2004 tuvieron la presencia del Bloque Calima de las AUC y, por último, desde comienzos del 2003 las bandas criminales emergentes vinculadas con los cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 2015)

Pero Yurumanguí es un territorio con una gran riqueza tanto de biodiversidad, como de prácticas culturales y ancestrales. Este es posiblemente “una de las últimas cuencas conservadas del litoral

³ Estos grupos también son conocidos como bandas criminales (bacrim) de acuerdo con la directiva 14 de 2011 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su denominación cambió a partir de la directiva 15 de 2016 del ministerio de Defensa.

⁴ Publicación en semana rural “Yurumanguí, una comunidad que sabe de dónde viene y para donde va” publicado el 02 de abril de 2019. Disponible en: <https://semanarural.com/web/articulo/yurumanguí-una-comunidad-que-sabe-de-donde-viene-y-para-donde-va/904>

del Pacífico colombiano” (Morales 2018). Además, “un 98% de las 65 mil hectáreas de la cuenca están cubiertas de bosque y mangle” (Morales 2018). Y es que mantener a salvo “los casi 100 kilómetros de este río que nace en el Parque Nacional Farallones en el Valle del Cauca y muere en un gran delta en el océano” ha sido una labor “titánica y silenciosa” (Morales 2018).

Actualmente esta comunidad lleva en sus hombros la tarea de recuperar 55 mil hectáreas de bosque perteneciente a su territorio sobre el cual la empresa Pacific Mines reclama derechos. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras reestableció en 2017 sus derechos como territorio colectivo de comunidades negras. Este fue sin duda un gran logro. La sentencia se convirtió en la octava en términos de restitución étnica y la segunda en reparar a comunidades afrodescendientes.

No obstante, los cultivos ilícitos, el desplazamiento forzado, los asesinatos, las masacres, el reclutamiento, entre otras, son formas de violencia que permearon y continúan siendo parte del diario vivir de las comunidades asentadas a lo largo y ancho del río Yurumanguí. Pese a ello, esta comunidad ha demostrado estar convencida que la vida no es posible sin el territorio⁵ y en función de ello desarrolló múltiples estrategias de resistencia no violenta para mantenerse en él, para re-existir y transformar el escenario de guerra en uno de paz.

1. Objetivos y preguntas de investigación

Esta investigación busca no solo entender la forma en que se constituyen procesos de resistencia no violenta en medio de la guerra, sino de manera particular, la forma en que estos procesos de resistencia contribuyen a la construcción de paz en Colombia. En virtud de ello, el objetivo general de la investigación es examinar el proceso de resistencia pacífica de la comunidad del río Yurumanguí (Buenaventura) y sus aportes a la construcción de paz en Colombia, a partir del acuerdo de paz de 2016. De ese modo, la pregunta central es: ¿De qué manera el proceso de

⁵ La frase hace parte del sentipensar de la comunidad de Yurumanguí que ha sido plasmada en comunicados y mandatos de respaldo a la autoridad y autonomía. Textualmente es “el territorio es vida y la vida no es posible sin el territorio. el territorio es vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende”, disponible en: <https://renacientes.net/wp-content/uploads/2018/08/COMUNICADO-YURUMANGUI-2018.pdf>.

resistencia pacífica de la comunidad del río Yurumanguí (Buenaventura) que inicio en 1998, aportó al proceso de construcción de paz en Colombia después de la firma del acuerdo de paz de 2016?

En consecuencia, con el primer objetivo específico se identifican y se examinan las formas en que las estrategias de resistencia noviolenta contribuyeron a la construcción de paz territorial en la comunidad de Yurumanguí entre los años 1998 y 2015. Con el segundo objetivo específico, se analizan los aportes de esta comunidad en el marco de la paz territorial, al proceso de construcción de paz a nivel nacional a partir de la firma del acuerdo en el 2016. En ese sentido, se plantean las siguientes preguntas subsidiarias: ¿Cuáles fueron las estrategias de resistencia pacífica utilizadas por la comunidad de Yurumanguí entre el 1998 y el 2015, y cómo contribuyeron a la paz territorial? y ¿De qué manera la comunidad de Yurumanguí aportó a la paz nacional desde su proceso de paz territorial?

Las iniciativas impulsadas por comunidades locales en el marco de la resistencia noviolenta han llamado la atención de muchos académicos en la esfera nacional e internacional (Arviola 2008; Hernández 2009; Masullo 2015; Mouly y Garrido 2018). La intersección entre los procesos de resistencia pacífica y la construcción de paz ha sido un foco para los estudiosos del área que a menudo reflexionan y analizan el impacto de las iniciativas a escala local y sus repercusiones en un sentido más amplio. Dudouet (2017), por ejemplo, ha estudiado las estrategias integradas de resistencia civil y construcción de paz. Esta investigación hace un aporte al debate académico en relación con lo que algunos autores han llamado “el giro local”, desde el cual se analiza la participación de los sujetos o comunidades en procesos de construcción de paz (ej. Leonardsson y Rudd 2015; Mac Ginty y Richmond 2013). Además, dado que permite identificar y visibilizar la importancia del rol de las comunidades negras en el marco de la construcción de procesos de resistencia noviolenta y, sobre todo, visibilizar su aporte al proceso de paz nacional, la investigación aporta a fortalecer el proceso organizativo de la comunidad y apoyar su proceso de incidencia en la construcción de paz desde abajo.

A partir de la literatura revisada y la investigación en campo, se plantea los siguientes argumentos centrales. Las estrategias pacíficas que se configuraron en la comunidad de

Yurumanguí, como son la erradicación manual de la coca y la formación de líderes y lideresas, fortalecieron los procesos comunitarios y de autonomía, que a su vez fueron clave para que la población permaneciera en el territorio, cesara de ser objeto de reclutamiento forzado y evitara que su territorio se convirtiera en zona de cultivos ilícitos. Esto contribuyó a lo que se conoce como “paz territorial”. Y a su vez, generó aportes al proceso de construcción de paz a nivel nacional en el marco de la participación en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en relación con el punto uno del acuerdo de paz de 2016 y en la construcción de la verdad, en la reconciliación en clave de no repetición, y en estrategias para solucionar el problema de las drogas ilícitas.

2. Perspectiva teórica

El marco teórico propuesto para esta investigación parte de tres categorías principales: construcción de paz (*peacebuilding*), resistencia no violenta y paz territorial. En la construcción de paz se discuten conceptualizaciones de autores como Lisa Schirch y John Paul Lederach que plantean una noción más comunitaria de la construcción de paz, en contraposición con el modelo de paz liberal.

En segundo lugar, se examina insumos de los estudios sobre resistencia no violenta que nos permitirán analizar en los capítulos empíricos, el proceso de resistencia pacífica impulsado por la comunidad de Yurumanguí en Buenaventura. Luego se plantea una discusión en torno a la paz territorial, partiendo de un escenario amplio en relación con lo que se conoce como ‘el giro local’ y la ‘apropiación local’. Schirch y Lederach tienen una visión más constructivista de la paz, desde la cual los actores locales, en especial las comunidades que han estado inmersas en los conflictos, son agentes en el proceso de construcción de paz en relación con las múltiples estrategias de resistencia pacífica que han desarrollado.

La resistencia no violenta es una de las muchas estrategias que pueden usar los civiles en zonas de conflicto (Masullo 2015). Esta forma de resistencia implica una respuesta no convencional que además permite el empoderamiento de los civiles o las comunidades para hacer frente al poder de sus oponentes, quienes a menudo ejercen varias formas de violencia (Mouly, Idler y Garrido 2016). Como enfoques, la resistencia civil y la construcción de paz son complementarias “tanto

analíticamente (o sea, como marcos conceptuales para entender la transformación de conflicto) como prácticamente (es decir, como estrategias de intervención que apuntan hacia una paz más sostenible y justa)” (Dudouet 2017).

En relación con la paz territorial, si bien el concepto surgió en el marco del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en Colombia, está directamente vinculado a lo que autores como Leonardsson y Rudd (2015) y Mac Ginty y Richmond (2013) han llamado “el giro local”. La comprensión de lo local enfatiza aquí “que la construcción de la paz no es un proyecto unidireccional impuesto desde arriba, sino que cambia continuamente a través de encuentros con agencias locales” (Leonardsson y Rudd 2015). Esta triada conceptual es fundamental para examinar la manera en que se desarrollan procesos de resistencia civil en contexto de conflicto armado y más aún, analizar la forma en que estas estrategias contribuyen a la construcción de paz a nivel nacional, desde una visión más comunitaria.

Así, la noción de paz territorial es clave para acercarse a los procesos que se desarrollan en lo local, en estrecha sintonía con la noción de resistencia no violenta como una de las estrategias desde las cuales se contribuye a la paz territorial. La categoría referente a la construcción de paz permite comprender cómo el caso de estudio de la comunidad de Yurumanguí, a través de su proceso de resistencia no violenta construyó paz territorial y, en concordancia, la forma en que aportó a la paz en el escenario nacional.

3. Metodología de investigación

En relación con los objetivos que aquí se plantean y en aras de responder la pregunta de investigación se hizo uso del método estudio de caso, y se empleó una metodología cualitativa. La selección del caso de estudio se hizo con base en entrevistas previas con investigadores de la comisión de la verdad de Colombia y una revisión documental que permitió corroborar la importancia del caso en relación con el tema a estudiar, a saber: el aporte de la comunidad de Yurumanguí, una comunidad negra que ha desarrollado un proceso de resistencia pacífica, a la construcción de paz en Colombia. Este caso se destaca entonces por sus logros, pero comparte varias características con otras comunidades afrodescendientes afectadas por el conflicto armado

colombiano, que hacen que se pueda obtener insumos valiosos del presente estudio para otras comunidades.

Para el estudio de caso se utilizó varias herramientas de recolección de datos. Se empleó la observación participante in situ, las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. La observación participante se realizó durante una asamblea comunitaria, encuentros culturales, actividades de tipo académico y religioso y una misión humanitaria en el territorio. Durante el trabajo de campo y en la ciudad de Buenaventura se realizaron quince entrevistas semiestructuradas, catorce de ellas a líderes y lideresas de la comunidad, y una a un excombatiente de las FARC.

En relación con las fuentes documentales primarias, se hizo una revisión de actas de reuniones, declaraciones y pronunciamiento de la comunidad frente a hechos de violencia, sentencias de la corte en relación con el proceso de restitución de derechos de la comunidad, archivos audiovisuales que relatan parte del proceso de consolidación del consejo comunitario y algunas de las estrategias de resistencia no violenta. En las fuentes secundarias se hizo una revisión de las diferentes investigaciones que se han enfocado en la comunidad de Yurumanguí, incluyendo los documentos estatales que dan cuenta de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Todo esto permitió una triangulación de información.

Por otro lado, como investigadora me ubico como *insider/outsider*, en tanto que soy perteneciente al territorio de Buenaventura, pero no hago parte propiamente de la comunidad de Yurumanguí. Esta posición me permitió tener un buen conocimiento del contexto y a su vez mantener cierta imparcialidad respecto a la investigación. También permitió generar confianza entre los entrevistados por la cercanía.

4. Estructura de la tesis

La presente tesis está dividida en tres capítulos, además de una introducción al principio y conclusiones generales al final. La introducción incluye la presentación y justificación del tema, el objetivo general y específicos, las preguntas central y subsidiarias de investigación, la presentación del marco teórico y finalmente la metodología.

El primer capítulo presenta el marco teórico y conceptual. En él se aborda la discusión académica en relación con lo que se entiende por construcción de paz desde la perspectiva liberal vs una perspectiva más constructivista, haciendo énfasis en los postulados de algunos autores de los estudios de paz y conflicto que plantean un enfoque comunitario de construcción de paz. Además, se desarrollan las nociones de resistencia no violenta y/o resistencia civil. Y finalmente se aborda la noción de paz territorial y su relación con aquello que se conoce como “el giro local”, en el cual se reconoce la participación activa de la comunidad en la construcción de paz.

El segundo capítulo da respuesta a la primera pregunta subsidiaria de investigación que busca identificar y examinar cuáles fueron las estrategias de resistencia pacífica utilizadas por la comunidad de Yurumanguí entre los años 1998 y 2015 y cómo contribuyeron a la paz territorial. El tercer capítulo analiza la forma en que la comunidad de Yurumanguí aportó a la construcción de paz en Colombia después de la firma del acuerdo de paz de 2016, a partir de su proceso de paz territorial. Finalmente, se presentan los principales hallazgos de la investigación. Se señala la importancia de la teoría y la práctica para el desarrollo de la misma. Se plantean las conclusiones fruto del ejercicio de análisis y, por último, se proponen algunas recomendaciones que abren posibles agendas de investigación.

Capítulo 1

Marco teórico/conceptual

En aras de dar respuesta a la pregunta que guía esta investigación, se desarrolla un marco teórico-conceptual cuyos principales postulados devienen fundamentalmente de los aportes de los estudios de paz y conflicto. Este marco será útil para el análisis del caso empírico que se desarrollará en los capítulos 2 y 3 de esta tesis. Así las cosas, este marco teórico-conceptual presenta tres secciones que se corresponden con tres categorías de análisis desde las cuales se abordará la investigación. En primer lugar, se desarrolla el concepto de construcción de paz (*peacebuilding*), haciendo hincapié en los aportes de autores como Lisa Schirch y John Paul Lederach. También se debate sobre el modelo de la paz liberal, plasmado en particular en el informe del secretario general de la ONU “Un programa de paz” del año 1992, y otras formas de paz, en especial las que provienen desde las poblaciones locales afectadas por un conflicto armado.

En segundo lugar, se presenta un diálogo entre autores estudiosos de la resistencia civil (ej. Hernández 2012; Masullo 2015; Mouly, Idler y Garrido 2015; Dudouet 2017) que aportan insumos para el análisis sobre el proceso de resistencia pacífica en la comunidad de Yurumanguí en tanto han investigado procesos de resistencia no violenta en otras zonas del país. En la tercera y última sección, se desarrolla una discusión sobre paz territorial. En ella, se presenta el concepto de “paz territorial” que nació a partir del proceso de paz en Colombia. Se ubican algunas de las principales críticas que han girado en torno a este concepto. En función de ello se plantea la discusión más amplia en el marco del “giro local” que evocan autores como Mac Ginty y Richmond (2013) y Leonardsson y Rudd (2015) y la “apropiación local” (ej. Donais 2011).

1. ¿Qué es la construcción de paz? Construcción de paz, perspectiva liberal y comunitaria

La construcción de paz es un tema polémico, no solo en términos de conceptualización sino más aun en las diferentes formas en que se aborda y se expresa. Este enfoque, que de manera frecuente se usa en el discurso académico y de cooperación internacional para referirse a un escenario posterior al cese de confrontación armada, es relativamente reciente en relación con

otros conceptos como el mantenimiento de la paz (Arreaza y Mason 2012). En esta primera sección se discute las diferentes definiciones del término antes de pasar a debatir sobre las perspectivas liberales y comunitarias de la construcción de paz y finalmente sobre la paz híbrida.

1.1. Definición de construcción de paz

En principio la construcción de paz fue conceptualizada por Johan Galtung en los años 70 (cf. Galtung 1976). Esta conceptualización inicial radica en la distinción entre diferentes formas de violencia (violencia directa, estructural y cultural) y paz (negativa y positiva), una distinción introducida por el propio Galtung. Según el mismo, la violencia directa refiere a las agresiones o afectaciones físicas o visibles. La violencia estructural tiene relación con la negación de derechos o la no satisfacción de necesidades, y la violencia cultural refiere a aquellos discursos que legitiman las otras dos formas de violencia (Galtung 1990).

Anteriormente, la paz era vista y entendida desde una perspectiva negativa, es decir como la ausencia de la guerra (Arreaza y Mason 2012). Sin embargo, a partir de estos aportes, se distinguió la paz positiva como una paz que permite poner fin a las tres formas de violencia. Inicialmente, cuando Galtung introdujo el término de construcción de paz, se refirió a una forma de abordar las raíces estructurales de los conflictos violentos, es decir la violencia estructural (ej. Galtung 1976). Posteriormente, se incorporó también la necesidad de abordar la violencia cultural.

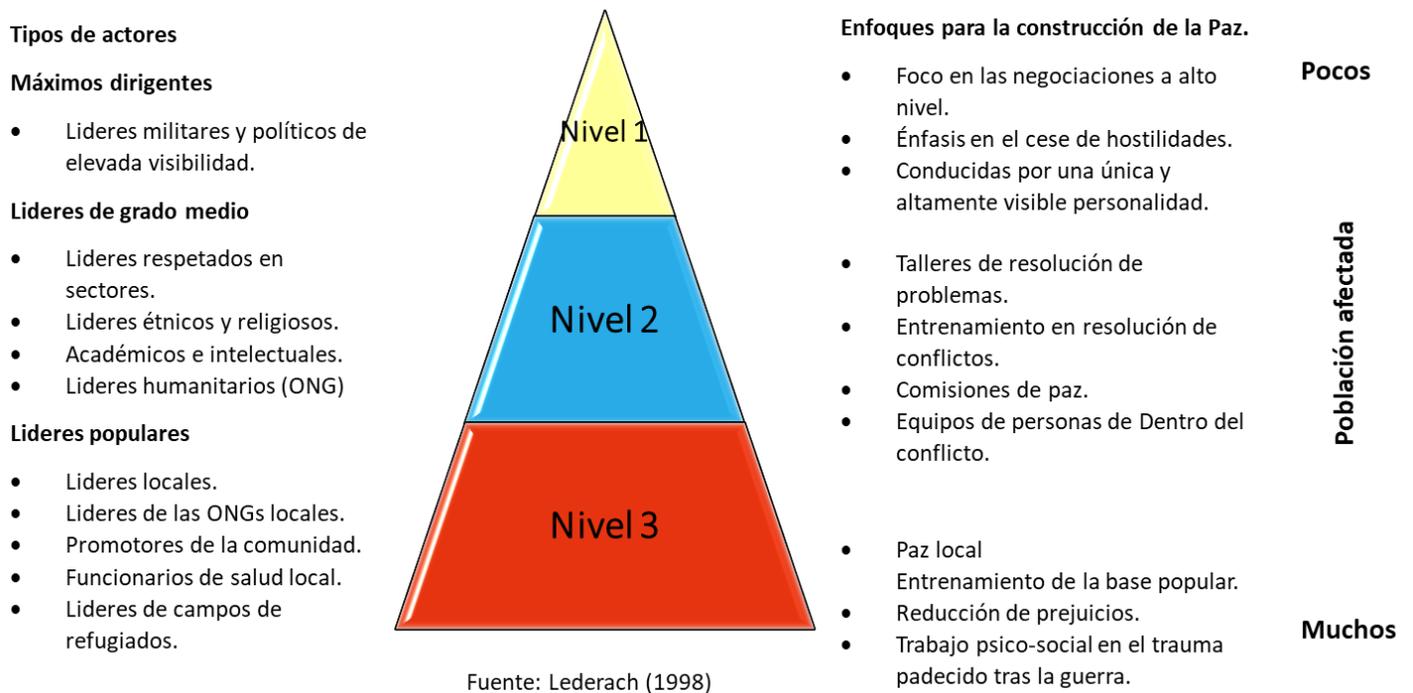
Dicho esto, no fue sino hasta finales de los años ochenta y principios de noventa que la noción de construcción de paz fue institucionalizada, en el marco del informe del secretario General de la ONU “Un programa de paz” en 1992. Desde la perspectiva del entonces Secretario General de la ONU, esta noción hacía énfasis en el posconflicto como el escenario de construcción de paz e incluía, entre otros aspectos, procesos de desarme, reintegración, restablecimiento del orden, etc. (Naciones Unidas 1992). No obstante, apenas tres años después, en el “Suplemento al Programa de Paz”, se amplió la aplicación del término a situaciones anteriores a un conflicto armado (Naciones Unidas 1995).

De acuerdo con Lisa Schirch (2008), se han presentado algunas diferencias en términos de lo que se entiende por construcción de paz. Las principales diferencias se enmarcan en que, por un lado, algunos autores y profesionales hacen énfasis en el escenario de postconflicto, centrándose en terminar la violencia directa, mientras que, por otro lado, un número creciente de personas consideran que la construcción de paz se puede dar en distintas etapas del conflicto armado y se enfoca en abordar la violencia estructural y cultural que subyacen a la violencia directa. Asimismo, algunos usan el concepto como un “meta término” o un “paraguas” en tanto cobija el mantenimiento, el establecimiento y la construcción de paz en un mismo concepto, mientras otros plantean una definición más específica del término, centrada en el tratamiento de las raíces del conflicto (Schirch 2008).

Lederach, en particular, considera que la construcción de paz no es simplemente la reconstrucción que tiene lugar en un escenario posterior a la firma de un acuerdo de paz. Por el contrario, entiende el concepto como una amplia gama de elementos; es decir, ve la construcción de paz como un conjunto de “etapas necesarias para la transformación de los conflictos en relaciones pacíficas y sostenibles” (Lederach 2007, 48). Por lo tanto, no se reduce al momento inmediatamente posterior a la firma de los acuerdos de paz, sino que abarca un antes, durante y después de la firma de acuerdos.

Desde esa dimensión, Lederach identifica tres enfoques de construcción de paz: de arriba hacia abajo, del medio hacia fuera, de abajo hacia arriba. El primero de ellos, el enfoque de arriba hacia abajo, se ajusta a la noción más ortodoxa, es decir, a aquella que viene dada desde las élites. Tiende a seguir la lógica de la construcción de Estado (*statebuilding*), desde la cual el Estado es el centro del proceso de construcción de paz. Hace hincapié en el nivel 1 del modelo piramidal de Lederach (2007) (ver figura 1), es decir en los altos dirigentes tanto gubernamentales como del o los grupos que luchan contra el Gobierno. Por otra parte, el enfoque de abajo hacia arriba hace especial énfasis en las comunidades como agentes de transformación y cambio. Focaliza el rol de los líderes de base, y el arraigo de la población local y su cultura son vistos como el mayor recurso para la construcción y el sostenimiento de la paz a largo plazo (Lederach 2015).

Figura 1. Niveles de liderazgo



Bajo el mismo tenor, Schirch (2005, 4) plantea que la construcción de paz busca “prevenir, reducir, transformar y ayudar a las personas a recuperarse de la violencia en todas sus formas, incluida la violencia estructural” al tiempo que es un mecanismo de empoderamiento. Por esta razón, se considera que una concepción ortodoxa de la misma deja vacíos y construye procesos de corta duración. De acuerdo con Bautista (2017, 107), la construcción de paz “pasa por reconocer las territorialidades edificadas en el marco del conflicto”; no es por tanto un proceso que puede ser desarrollado desde afuera, sino que amerita la participación de sujetos activos y de cambio, como lo son las comunidades que han vivido en medio del conflicto armado y que en ese contexto han desarrollado estrategias de resistencia.

Autores como Schirch y Lederach plantean una visión más constructivista de la paz, desde la cual los actores locales, las comunidades que han estado inmersas en los conflictos armados, son agentes en el proceso de construcción de paz y pueden incidir en las estructuras que los rodean, al mismo tiempo que éstas influyen en el accionar de los actores locales. Además, se considera que lo que se entiende por “construcción de paz” está estrechamente ligado a aquello que se entiende

como “paz”. Si bien la noción en principio fue entendida como la ausencia de la guerra, hoy por hoy los debates académicos centran su atención en una noción más positiva, es decir, la paz ya no es solo vista como la ausencia del conflicto armado, sino que incorpora elementos maximalistas de superación de todas las formas de violencia (ej. Lederach 2007; Mouly 2021).

En esta tesis se hará uso de la construcción de paz en este sentido, es decir como un enfoque que permite abordar las raíces estructurales de la violencia y se pondrá énfasis en la perspectiva comunitaria en tanto permite entender las experiencias de construcción de paz mediante la resistencia no violenta que ha tenido lugar en escenarios donde la violencia armada fue un pan de cada día. Especialmente, permite analizar a partir del diálogo con ‘lo local’ la forma en que esta resistencia no violenta aporta a la construcción de paz en escenarios amplios, más allá de lo comunitario. Abre así la posibilidad de pensar la paz de manera integral, desde la voz de múltiples actores, haciendo énfasis en el rol activo de los actores locales en el proceso de transformación de escenarios de guerra y construcción de paz.

1.2. El modelo liberal de construcción de paz

La noción de paz liberal tiene sus bases en la teoría de la paz perpetua formulada por Immanuel Kant entre mediados y finales del siglo XVIII cuyos argumentos principales eran que, para mitigar la guerra entre países, era necesario que se compartieran normas y principios comunes, o, dicho de otro modo, los países democráticos serían menos propensos a agredirse mutuamente. Hoy por hoy, el modelo liberal de construcción de paz se considera un enfoque usado a menudo en la práctica, como acción e intervención en países que han experimentado guerras. Dicho enfoque se instauró en el escenario de post segunda guerra mundial, y autores como Bautista (2017) ubican el ‘plan Marshall’ como primer referente⁶. De acuerdo con Zirion (2017), esta visión de paz encontró campo fértil a finales de los ochenta, cuando la victoria del modelo capitalista se imponía.

Se califica de modelo liberal por cuanto “confía en la institucionalización de los principios liberales para la estabilización y la construcción de la paz” (Zirion 2017, 2). Estos principios incluyen la democracia, la apertura de mercado, los derechos humanos, etc. Desde esta

⁶ El Plan Marshall fue implementado por el Gobierno de Estados Unidos desde 1947 en Europa (Bautista 2017).

perspectiva, que es una visión ortodoxa, la construcción de paz es principalmente una responsabilidad de los Estados con participación de organismos internacionales. Además, se hace hincapié en métodos de recuperación y reconstrucción en la postguerra, en relación con el fortalecimiento de la paz y la reducción de probabilidades de nuevos conflictos violentos (Dudouet 2017). Se refiere al tipo de paz que resulta de la aplicación de este modelo como “paz liberal”.

De acuerdo con Cruz y Fontan (2014), en los recientes estudios de paz, se entiende la paz liberal a partir de las dinámicas hegemónicas que han sido desarrolladas o vienen dadas ‘de arriba’. Esto tiene relación con el enfoque de “arriba hacia abajo” que explica Lederach. Así, el modelo liberal de construcción de paz, en términos generales, pone como actor central y responsable a los Estados con el apoyo y la promoción de organismos internacionales, sin tomar debidamente en cuenta los esfuerzos de la población local (Mac Ginty y Richmond 2013; Mac Ginty 2011). Este modelo se centra en cuatro grandes tipos de actividades “apoyar la democracia y el fortalecimiento del Estado; poner en marcha reformas económicas liberales; garantizar un contexto de seguridad y estabilidad; y, en menor medida, la rehabilitación social” (Zirion 2016, 25).

Desde esta perspectiva liberal de construcción de paz, autores como Arreaza y Mason (2012) han investigado el rol que juegan los actores internacionales en la construcción de paz en Colombia. Sus aportes, aunque valiosos para comprender la importancia de los organismos estatales y actores no gubernamentales internacionales en los procesos de construcción de paz, dejan vacíos analíticos en relación con el papel de las comunidades de base en estos procesos. En relación con eso, algunas críticas que han surgido en contraposición a esta noción de paz liberal versan sobre el hecho de que pensar la construcción de paz desde esta perspectiva “se convierte en fuente de perversa y dañina ilusión que crea el espejismo que la paz obedece a fórmulas o réplicas de modelos internacionales, desconociendo el contexto de las comunidades locales” (Cruz y Fontan 2014, 150). Por ello, ahora vamos a centrar nuestra atención sobre otra perspectiva: la perspectiva comunitaria, que se enfoca en el papel de estas comunidades.

1.3. El modelo comunitario de construcción de paz

A diferencia del modelo liberal, la perspectiva comunitaria da mucha más relevancia a las dinámicas culturales, la tradición y en general al contexto social propio como un elemento clave para la construcción de paz. Esta perspectiva ubica a las comunidades como agentes de cambio y transformación, más que como sujetos pasivos. Sostiene que para pensar la reconstrucción de las sociedades que han sido azotadas por la guerra, es menester abrir espacios sociopolíticos y económicos en los que las comunidades “pueden identificar, desarrollar y emplear los recursos necesarios para construir una sociedad pacífica, justa y próspera” (Donais 2012, 5). Es así que las dinámicas propias juegan un rol importante para pensar la construcción de paz como un todo integral, la cual no sería posible si se piensa aislada de las realidades de quienes han sido los directos afectados.

Al respecto, es importante mencionar que autores como Cruz y Fontan (2014) plantean también la noción de ‘paz subalterna’ para referirse al tipo de paz construido por las comunidades que tejen su propio camino. Para estos autores, este modelo se corresponde con los ‘modelos desde abajo’, es decir comunitarios, que parten de las necesidades propias de la gente, de sus “tradiciones, descontentos, complejidades y fracturas internas” (Cruz y Fontan 2014, 137). En tal sentido, es claro que existe una dicotomía entre lo que se conoce como paz liberal y aquello que se entiende como paz comunitaria (o subalterna en términos de Cruz y Fontan) y resulta de un proceso de construcción de paz desde abajo por parte de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Esta noción comunitaria de paz es clave para entender cómo los procesos que se tejen en contextos locales contribuyen a la construcción de paz, como en el caso de la comunidad de Yurumanguí en la zona rural de Buenaventura en Colombia. De ese modo, esta perspectiva es clave para el desarrollo de la presente tesis por cuanto permite analizar las dinámicas propias de comunidades que han sobrevivido al conflicto armado y que en medio de ello han construido escenarios de paz, de reflexión y de cambio. En tal sentido, para efectos de este marco teórico, se desarrolla la perspectiva comunitaria con mayor precisión junto al apartado que corresponde a la ‘paz territorial’, dado que en él se plantea la discusión académica sobre ‘el giro local’ que permite

articular nociones de paz territorial en relación con la perspectiva comunitaria.

1.4. La paz híbrida

El modelo de paz híbrida propuesto por autores como Roger Mac Ginty busca comprender las complejas interacciones que existen entre actores locales y actores externos en el marco de intervenciones internacionales en tanto construcción de paz (Mac Ginty 2011). Para Mac Ginty, la hibridación no es simplemente una fusión o choque entre los modelos de construcción de paz impulsados por cada tipo de actores; hay que entenderla como una forma de articulación entre ellos. Así la paz híbrida cambia como producto de un proceso “gradual, cotidiano y variable” con una constante negociación entre actores externos y comunidades locales en términos de como concebir los procesos a desarrollar.

Mac Ginty distingue cuatro ejes fundamentales en el modelo de paz híbrida. El primero es la “habilidad de los actores, estructuras y redes de paz liberales de imponer su visión de pacificación”; el segundo es la “habilidad de las estructuras, actores y redes de paz liberal de incentivar a los actores locales para cooperar con la paz liberal”; el tercero es la “habilidad de los actores, estructuras y redes locales de negociar, subvertir y resistir la paz liberal” y el cuarto “la habilidad de los actores locales de crear y mantener alternativas a la paz liberal” (Mac Ginty 2011, 211). Al respecto, es importante tener en cuenta que no necesariamente existe una práctica lineal. El proceso de hibridación atraviesa una suerte de porosidad en tanto pueden existir etapas de convergencia, subversión y resistencia, y con frecuencia fluctúa en la negociación y la renegociación de los actores involucrados.

Esta perspectiva, pese a ser importante para entender las interacciones entre las comunidades locales y distintos actores externos en los procesos de construcción de paz y ser pertinente en el escenario de posacuerdo donde han intervenido más actores internacionales para apoyar la implementación del acuerdo de paz de 2016, no es tan útil para esta investigación que da especial relevancia a las prácticas locales, las dinámicas propias y culturales de resistencia noviolenta de una comunidad, la de Yurumanguí, a través de las cuales ha sido posible construir escenarios de paz. Si bien esta comunidad no ha sido totalmente exenta de las acciones de construcción de paz

desarrolladas por actores externos, se caracteriza por su autonomía y el desarrollo de iniciativas propias con poca injerencia de actores de afuera, inclusive del propio Estado colombiano.

2. Resistencia noviolenta

La discusión sobre la “noviolencia” “la resistencia civil” y lo “pacífico” ha atravesado el debate académico en distintos momentos y perspectivas. Diversos autores han afirmado que la falta de una clara conceptualización de estos términos ha restringido mayores avances en el campo de la resistencia civil. Así, según Hallward, Masullo y Mouly (2017) “Uno de los desafíos preeminentes en el estudio de la resistencia civil es nombrar y definir el término. De hecho, la elección de "noviolencia" versus "resistencia civil" o "lucha sin armas" refleja debates ideológicos, teóricos y culturales sobre el significado del término” (Hallward, Masullo y Mouly 2017, 2). Es por ello que en este apartado se presentan elementos generales para la comprensión de aquello que es y no es la resistencia noviolenta, se resalta su importancia para esta investigación y se discute sus particularidades en el contexto de un conflicto armado.

2.1 Definiciones y teorías generales sobre la resistencia civil

Chenoweth y Cunningham (2013) sostienen que el estudio de la resistencia noviolenta ha sido ignorado principalmente por tres razones. La primera es que la violencia generalmente ha sido vista como un problema global y desenfoca las luchas emprendidas por civiles desarmados que han estado presentes en el mundo. La segunda es que la noviolencia ha sido considerada empíricamente difícil de medir. La tercera es que ha existido una tendencia en los estudios de conflicto por equiparar lo ‘noviolento’ con ‘pacífico o débil’ (Chenoweth y Cunningham 2013). Autores como Schock (2013) enfatizan que la resistencia noviolenta es activa, no pasiva, y la relacionan con el activismo. A pesar de tener un amplio desarrollo relativamente reciente en comparación con la teoría de los movimientos sociales, este fenómeno no es nuevo ni reciente, y una de las figuras modernas más prominentes en el desarrollo de la noviolencia es Mahatma Gandhi, quien, después de experimentar la injusticia racial en Sudáfrica, comenzó a explorar la resistencia civil en su nativa India. Gandhi se dio cuenta de que “la resistencia noviolenta podría llevarse a cabo en campañas colectivas para hacer frente a las injusticias sociales, desde lo local hasta el nivel nacional” (Schock 2013, 278).

Las nociones de “resistencia civil, lucha noviolenta, estrategia noviolenta” se entienden en relación con la ‘resistencia noviolenta’, que puede ser definida como “la aplicación del poder civil desarmado utilizando métodos noviolentos como protestas, huelgas, boicots y manifestaciones, sin usar amenaza del daño físico contra el oponente” (Chenoweth y Cunningham 2013, 271). Sin embargo, es posible identificar algunos matices en términos especialmente de lo moral y lo instrumental. La resistencia civil hace uso de métodos no violentos, pero no toda acción noviolenta es necesariamente resistencia civil. Para hablar de resistencia civil, esta acción tiene que producirse fuera de los canales institucionales, como el sistema judicial, los procesos electorales, etc (Chenoweth y Cunningham 2013; Shock 2013; Chenoweth 2021). En esta tesis se usará tanto los términos “resistencia civil” como “resistencia noviolenta” y también “resistencia pacífica”, que es el término usado por la comunidad de Yurumanguí, con el mismo significado. En efecto, todos hacen alusión a procesos o estrategias desarrollados de forma noviolenta frente a alguna forma de injusticia (percibida o real). En especial, se referirá a las luchas noviolentas de las comunidades afectadas por un conflicto armado en contra de la violencia, como en el caso de la comunidad de Yurumanguí.

Desde la mirada de Gregg, la resistencia noviolenta puede ser útil contra la violencia del opresor, y para explicarlo desarrolla la noción de “jiujitsu moral” desde la cual plantea que “los activistas comprometidos con la noviolencia tienen una ventaja moral que arroja a los violentos oponentes fuera de balance” (Schock 2013, 279). Los civiles “desarmados”⁷, que son quienes normalmente no tienen poder frente a los actores armados, “son capaces de organizar intervenciones creativas noviolentas que desactivan la violencia y la amenaza de violencia contra los miembros de la comunidad” (Kaplan 2020).

En general, la asunción de que las acciones emprendidas en el marco de la lucha noviolenta llegarán a convertirse de manera cuasi natural en acciones violentas ha sido rechazada por los estudiosos de la resistencia civil y, por el contrario, una idea fuerte al respecto ha sido que:

⁷ En comillas porque también existe literatura que plantea que ‘las palabras’ como forma de disuasión son las ‘armas’ de los civiles, entendida esta como el instrumento.

El poder de la resistencia civil no proviene del martilleo a un oponente mediante asaltos armados directos o guerras asimétricas de desgaste; más bien, es inherente a su capacidad de socavar el poder del oponente mediante acciones colectivas que drenan directamente el poder y legitimidad del oponente o catalizar la retirada de apoyo de actores clave de los que el oponente depende. La violencia funciona como un martillo, mientras que la no violencia funciona más como una palanca. A través del apalancamiento, los actores oprimidos y marginados son capaces de derrotar opositores represivos y ostensiblemente más poderosos (Schock 2013, 283).

Esta conceptualización da relevancia al poder de la resistencia civil como estrategia catalizadora de cambios estructurales, que permite obtener resultados positivos frente a escenarios de represión y violencia estructural. Es decir, desde la resistencia no violenta, los ciudadanos pueden socavar o mitigar el poder de sus oponentes a través de la relación de dependencia que existe entre ambos. Esto significa que un actor como el Gobierno puede ser más poderoso en el sentido tradicional del poder, pero depende de la obediencia y colaboración de los ciudadanos para funcionar. Si estos retiran su apoyo masivamente, el Gobierno puede colapsar (Sharp 2005; Chenoweth y Stephan 2011; Schock 2013). La resistencia civil se caracteriza por poseer un grado de organización, coordinación y principios claros. Estos se reconocen a partir de los métodos usados y si están encaminado al logro de objetivos políticos, sociales y económicos. Barter (2015) señala que “la intención” con que se desarrollan las acciones es un factor clave para distinguir los actos de resistencia civil. Además, se identifican “una cualidad cívica”, la cual significa que “los agravios expresados a menudo se comparten ampliamente entre la población en general” (Roberts 2010 citado en Chenoweth y Cunningham 2013, 273).

2.2. Resistencia civil en contextos de conflicto armado

Mucha de la literatura sobre resistencia civil hasta ahora ha hecho énfasis en escenarios de confrontación con el Estado o con un poder colonial. En algunos casos también se ha abordado luchas por la reivindicación de derechos colectivos. No obstante, aún se ha escrito poco sobre esta modalidad en escenarios de conflicto armado, que se configuran un espacio de confrontación en el que los civiles se encuentran frente a múltiples actores armados no estatales y no necesariamente en un lado de la disputa. Al respecto, los reclamos que hacen los civiles en ese tipo de escenarios están comúnmente dirigidos a “autoridades de facto distintas del Estado”, lo que es de esperarse en el sentido en que “una característica definitoria del conflicto armado

interno es la fragmentación del espacio y la autoridad, que conduce a actores que se convierten en agentes de represión e incluso de gobernabilidad” (Hallward, Masullo y Mouly 2017, 5).

Resulta importante mencionar que la mayor parte de estudios empíricos sobre resistencia civil en contextos de conflictos armados provienen especialmente de países como Colombia y Filipinas, y más recientemente Siria (Hallward, Masullo y Mouly 2017). Un elemento importante en relación con los conflictos armados es que, en este tipo de escenarios, de manera no intencional puede parecer que existe una cooperación con los actores armados por parte de los civiles que se encuentran atrapados en “una compleja gama de relaciones de poder”, es decir, en medio de distintos grupos en disputa (Hallward, Masullo y Mouly 2017, 4). No obstante, estos mismos civiles pueden ejercer formas de resistencia menos visibles – lo que Masullo, Mouly y Garrido (2019) describen como “nocooperación oblicua” – en el sentido de que no confrontan directamente a los actores armados, pero ejercen formas indirectas de resistencia no violenta. La resistencia no violenta es parte de una de las distintas respuestas de los civiles que viven en zonas de guerras frente al accionar de los actores armados estatales y no estatales. Por ejemplo, los métodos violentos, semilegales o prohibidos, también se usan para generar cambio social (Masullo 2015; Masullo, Mouly y Garrido 2019; Kaplan 2020). Para efectos de esta investigación se hace hincapié en la resistencia no violenta como categoría de análisis puesto que la lucha de la comunidad de Yurumanguí se ha llevado a cabo principalmente por medios no violentos.

Masullo (2015) plantea que las comunidades pueden responder de dos formas frente a la violencia armada. La primera se refiere a la resistencia, que puede ser violenta o no violenta; la segunda a la no resistencia, que tiene que ver con cooperar con los grupos armados o desplazarse. Dicho esto, el desplazamiento o la amenaza de desplazamiento puede ser una forma de resistencia civil si está en función de no participar o no cooperar con los actores armados (ver 70ª táctica de la lista de 198 elaborada por Gene Sharp (ej. 2003; Garrido, Mouly y Idler 2016; Jabassini 2017) Aquí es clave la ‘intención’, como plantea Barter (2015). Pero, permanecer en el territorio bajo ciertas normas y condiciones que se establecen y apoyados en una suerte de cohesión comunitaria es también una forma de resistencia no violenta (Masullo 2015). Esto quiere decir que no en todos los casos el desplazamiento prefigura la resistencia civil, ni la permanencia es un acto de resistencia en sí mismo si existe una suerte de cooperación con los grupos armados. Como lo

plantean Hallward, Masullo y Mouly,

Si los civiles huyen simplemente para evitar la violencia, esto no es resistencia. Sin embargo, si lo hacen como protesta (un método conocido como hijrat en la literatura de resistencia civil), podemos hablar de resistencia civil. En la misma línea, si la decisión de los civiles de permanecer en su posición está vinculada a su intención de colaborar con un actor armado, esto no es resistencia civil. Pero si así lo deciden porque se niegan a ceder frente a los actores armados y posteriormente se dedican a la no cooperación, esto es resistencia civil (Hallward, Masullo y Mouly 2017, 4).

En ese sentido, la resistencia civil se entiende como “las acciones no violentas por parte de ciudadanos que utilizan métodos no convencionales para empoderarse frente al poder de sus oponentes que ejercen varias formas de violencia” (Garrido, Mouly y Idler 2016, 157). De acuerdo con Hernández (2012), se denomina ‘resistencia civil’ por no admitir métodos violentos. Existen una amplia gama de acciones no violentas que asumen las comunidades y que están directamente relacionadas con el escenario en que tiene lugar el conflicto armado (Masullo 2015; Kaplan 2020; Mouly 2021). Estas acciones pueden ser una forma de construir la paz. Así, según Mac Ginty y Richmond (2013, 770), en un escenario local, la resistencia no violenta “provee un punto de partida para imaginar una nueva paz en términos contextualizados y cotidianos, reconstituyendo los fundamentos del Estado liberal”.

La resistencia civil, desde la cual se tejen procesos de base, ha sido un instrumento importante que permite la prevención/mitigación de la violencia y la transformación de conflictos (Dudouet 2017). Es así como lo ‘civil’ y lo ‘no violento’ hacen referencia, en palabras de Dudouet, “al poder de la gente”, especialmente en relación con su oposición tanto a actores armados cuanto a actores estatales. Un elemento importante para tener en cuenta es que la resistencia civil tiene lugar en situaciones donde existe una asimetría de poder en el sentido tradicional del poder, es decir, en escenarios en que los grupos dominantes, que tienen mayor poder coercitivo, ejercen control y presión sobre la gente (Dudouet 2017; Schock 2013). Es justamente esta asimetría de poder la que evoca la necesidad de empoderarse a través de estrategias de resistencias de tipo civil. Como enfoques, la resistencia civil y la construcción de paz son complementarias “tanto analíticamente (o sea, como marcos conceptuales para entender la transformación de conflicto)

como prácticamente (es decir, como estrategias de intervención que apuntan hacia una paz más sostenible y justa)” (Dudouet 2017, 4).

La resistencia no violenta hace también énfasis en el rol activo de los civiles organizados, en lugar de verlos como víctimas del conflicto o simples espectadores pasivos del escenario de violencia. Los considera “agentes activos del cambio político y social a pesar de las condiciones adversas” (Chenoweth y Cunningham 2013, 275). En relación con ello, los civiles han desarrollado estrategias de resistencia no violenta en escenarios de conflictos a través de las cuales logran bien sea disuadir a los grupos armados o generar procesos de cambio dentro de los territorios. De ese modo, la resistencia civil es relevante no solo durante la guerra, sino que puede dejar legados duraderos y contribuir a procesos de construcción de paz. Por ejemplo, puede generar mayores facilidades en los procesos de reintegración de excombatientes y fortalecer procesos de comunidades de paz, al reforzar la autonomía comunitaria, contribuir a reconstruir el tejido social y avanzar en la protección de derechos para la población victimizada (Hernández 2000; Hallward, Masullo; Mouly 2017; Mouly 2021). Oliver Kaplan (2020) desarrolla una teoría de la autonomía civil, a través de la cual argumenta que “las comunidades cohesionadas y organizadas pueden tomar decisiones sobre la mejor manera de lidiar con los diversos riesgos de una guerra civil” (Kaplan 2020, 26). La cohesión social es estratégica. Las comunidades la usan para protegerse a sí mismas en escenarios de conflicto armado (Kaplan 2020). En el caso de Yurumanguí, estas estrategias se entrelazan con la dinámica cultural y ancestral de esta población étnica cuya vida comunitaria se rige bajo principios de solidaridad, unidad y amor por lo propio.

Así, resistir de manera pacífica implica desarrollar acciones no violentas que permiten a las comunidades protegerse a sí mismas, fortalecer su autonomía y mantener el proceso organizativo. Juan Masullo (2015) identifica varios métodos de resistencia civil usados por la comunidad de paz de San José de Apartado. Señala que las comunidades en escenarios de conflicto armado pueden desarrollar tres tipos de acciones no violentas, a saber: disruptivas, contenidas y rutinarias (Masullo 2015, 39). En primer lugar, las manifestaciones o declaraciones públicas (ej. declaraciones, protestas, reuniones públicas etc.) son acciones de tipo disruptivas. Por otro lado, “la firma de peticiones y el envío de cartas a los representantes del Gobierno, las denuncias de violencia, la recolección de testimonios, el reporte de abusos y las declaraciones (...) en materia

de derechos humanos y crímenes” son acciones no violentas contenidas (Masullo 2015, 42). Y las actividades de trabajo grupales, “talleres de capacitación, reuniones del consejo interno y días comunitarios” son consideradas acciones cotidianas o rutinarias (Masullo 2015, 43). Todas estas contribuyen al desarrollo de la campaña de resistencia no violenta y posibilitan a la comunidad mantenerse en su territorio.

Finalmente, en la academia hay distintas formas de entender la no violencia, la construcción de paz y la transformación pacífica de conflictos. Esta última puede entenderse a partir de dos enfoques principalmente: los que abogan por la transformación de los conflictos, los “revolucionarios”, y aquellos que buscan la resolución de los mismo, los “resolucionarios”. En 1971, Adam Curle diseñó un diagrama con el fin de visibilizar la importancia que tiene tanto la organización comunitaria cuanto la acción no violenta en el marco de lograr desplazar los focos de poder, construir escenarios de negociación y finalmente transformar los conflictos (Curle 1971). A menudo los procesos de paz pueden ser entendidos como la transformación de conflictos que tienen lugar en distintas formas e intensidades. También pueden ser entendidos como una combinación de enfoques, bien sea transformación pacífica de conflictos, resistencia no violenta y construcción de paz (ej. Dudouet 2017; Schirch 2008). Esta discusión es importante porque Yurumanguí, a través de la articulación de estrategias de resistencia no violenta y el diálogo, ha hecho un aporte a la transformación de conflictos y la construcción de paz.

2.3. Comunidades de paz

Las comunidades de paz son iniciativas de resistencia civil que surgen desde la base de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, y cada una posee características propias. Esta no ha sido una categoría ampliamente abordada en la literatura, sobre todo en el caso colombiano, aunque también se usan otros términos cercanos, como “territorio de paz” o “zona de paz”. Una forma de entender las comunidades de paz es en el sentido de iniciativas de base que,

(...) encuentran su origen en regiones de alta violencia y en comunidades que en medio del fuego cruzado se organizan como expresión de resistencia civil no violenta al conflicto interno armado, dentro de un territorio delimitado que declaran al margen de las hostilidades, para autoprotgerse reivindicando la autonomía e inmunidad de la población civil frente al conflicto armado,

reconstruir el tejido social, desarrollar un proyecto de vida soportado en la solidaridad y el bien común, y materializar su derecho a la paz (Hernández 2000, 2).

De ese modo, las comunidades de paz se configuran experiencias de resistencia no violenta a través de las cuales los civiles enfrentan las agresiones que tienen lugar en el marco del conflicto armado. En Colombia, algunos casos empíricos de comunidades de paz que han sido estudiadas desde el ámbito académico se ubican en territorios como el Chocó (la comunidad de paz de San Francisco de Asís) en Antioquia (la comunidad de paz de San José de Apartadó y la asamblea constituyente de Tarso) en Santander (la asamblea constituyente de mogotes) (Hernández 2000; Mouly 2021). Otras reconocidas como territorios de paz han sido el municipio de Samaniego en Nariño, el corregimiento de Las Mercedes en norte de Santander (Mouly y Garrido 2018) o la comunidad indígena nasa de Toribío en el Cauca (Acosta y otros 2019). Estas comunidades se caracterizan, entre otras cosas, por “haber consagrado el recurso de la no violencia en sus reglamentos internos, al establecer la prohibición de portar o tener armas y de hacer parte del conflicto en forma directa o indirecta” (Mouly y Garrido 2018, 268), es decir, por asumir un principio de imparcialidad en el escenario de conflicto armado y consolidar su autonomía (Acosta y otros 2019).

De acuerdo con Landon Hancock y Christopher Mitchell, las experiencias acumuladas de los esfuerzos locales de paz pueden ser clave para influenciar la construcción de paz a nivel nacional. Por lo tanto, es menester dar relevancia a las iniciativas que, en el marco de sus dinámicas y recursos propios, fomentan o bien construyen la paz (Hancock y Mitchell 2012). Ahora bien, ya que estos esfuerzos locales pueden desarrollarse de manera independiente, se constituyen “una alternativa a la política nacional de confrontación armada” (Mouly y Garrido 2018, 270).

La iniciativa de paz del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), estudiada por Esperanza Hernández (2012) y Chaves, Aarts, van Bommel (2020), demuestra cómo es posible contribuir a nivel nacional desde las experiencias locales. En este caso, el poder de mediación del CRIC con diversos actores armados y estatales permitió garantizar el derecho a la vida, la autonomía y la cultura de las comunidades. Esta iniciativa ha sido un referente de construcción de paz desde abajo, según académicos, como Esperanza Hernández, quien plantea que experiencias desde la sociedad civil como éstas “representan una tercera vía en el proceso de construcción de la paz en

Colombia y son patrimonio de paz de este país” (Hernández 2012, 111). La experiencia de mediación del consejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del Atrato (Cocomacia) también es un caso que permite entender la forma en que se tejen procesos locales en el marco de iniciativas no violentas que, a partir de prácticas y dinámicas culturales propias, permiten generar escenarios de construcción de paz, a través de la mediación en este caso (cf. Hernández 2012).

Dicho esto, las comunidades de paz, a partir de las múltiples estrategias de resistencia no violenta que desarrollan en contextos de conflictos armados, logran proteger y salvaguardar la vida de civiles. Esto significa que aportan a que haya una reducción de la violencia directa. Además, aportan también a mitigar la violencia estructural y cultural a nivel local. Cuando las comunidades de paz construyen y protegen el territorio, desarrollan formas alternativas de educación y de participación a partir de instituciones propias. Cuando despliegan procesos de fortalecimiento comunitario a partir del empoderamiento y hacen incidencia para alcanzar mayor apoyo de aliados externos, abordan y mitigan formas de violencia estructural. Y cuando las comunidades promueven la no violencia y la tolerancia, construyen una cultura de paz coadyuva a dirimir la violencia cultural (Mouly 2021). Todos estos aportes son elementos importantes en el marco de la construcción de paz.

Las comunidades de paz o territorios de paz son estrategias de resistencia no violenta desarrolladas por distintas comunidades a nivel local que se constituyen un elemento importante para pensar la paz territorial en Colombia, como veremos en el siguiente apartado.

3. Entre la perspectiva comunitaria y el giro local: la paz territorial

El concepto de paz territorial es fundamental para el desarrollo de la presente investigación por cuanto permite hacer una lectura contextualizada de los fenómenos locales y, a partir de ahí, un análisis con pertinencia social y cultural que permite entender la forma en que se construyen, se tejen y se desarrollan procesos desde abajo. Desde esta perspectiva, se cuestiona los otrora procesos de construcción de paz pensados desde arriba, los cuales dejan de lado el rol activo de los sujetos comunitarios, quienes, durante mucho tiempo, en medio del abandono estatal, la

presencia de grupos armados y la zozobra, usaron estrategias propias que les permitieron resistir y re-existir.

El término “paz territorial” es un concepto que surgió en el marco del “acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado en el año 2016 entre la entonces guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano (cf. Jaramillo 2014). Dado que este acuerdo tuvo como uno de los ejes centrales el reconocimiento y la reparación a las millones de víctimas del conflicto armado interno, considera la necesidad de reconocer los esfuerzos de las comunidades locales por construir escenarios de paz en el territorio. No obstante, pese a que el concepto surgió en el marco del acuerdo de paz en Colombia, se encuentra directamente vinculado desde una perspectiva amplia a lo que autores como Leonardsson y Rudd (2015) y Mac Ginty y Richmond (2013) llaman ‘el giro local’ y tiene antecedentes en otros procesos de paz, como los de Guatemala o Sudáfrica, donde se desarrollaron mecanismos para descentralizar la implementación de la paz (ej. Mouly 2016). Así, se desarrolla en este apartado lo concerniente a paz territorial, las críticas al concepto y posteriormente plantea la discusión sobre el giro local en relación con la perspectiva de paz comunitaria.

El discurso del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo denominado “paz territorial” que tuvo lugar en el año 2013 en la Universidad de Harvard ofrece elementos sobre la visión de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos esbozó para Colombia. En su conferencia, Jaramillo adujo que como centro de la paz existe una preocupación por el territorio y por los derechos humanos (Jaramillo 2014). Esta visión de paz se basa en una noción de derechos en tanto considera que es necesario “satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto” (Jaramillo 2014, 53). En ese sentido, y bajo la premisa de que “es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes”, se estimó necesario alinear incentivos y desarrollar una institucionalidad fuerte en los territorios a fin de lograr presencia del Estado y, con ello, a través del tiempo garantizar derechos para todos y todas (Jaramillo 2014).

En consecuencia, se evocó la necesidad de complementar el enfoque de derechos con uno territorial, primero porque se reconocía que el conflicto armado había afectado de manera

diferenciada a unos territorios más que otros y, segundo, porque para el Gobierno de Juan Manuel Santos era claro que no se podían generar cambios “si no se articularan los esfuerzos y se movilizaran a la población en esos territorios alrededor de la paz” (Jaramillo 2014, 54). En este escenario, se ubicó la idea de que era necesario terminar el conflicto armado, es decir, establecer un proceso no solo de desarme, desmovilización y reintegración, sino también “abrir una fase de construcción de la paz”. Jaramillo (2014, 54) reconoció que la dejación de armas de parte de las FARC era importante, pero no era lo fundamental del proceso de paz. En particular, abogó por el diálogo con las comunidades victimizadas. Este planteamiento cuyo foco principal se encuentra en garantizar los derechos de las víctimas se aleja de una visión negativa de la paz y se acerca a un tipo de paz más liberal a través de la “institucionalización del territorio”.

Así, la ‘paz territorial’ propuesta desde las autoridades nacionales en ese entonces reconoce la importancia de la institucionalidad y el ejercicio de la democracia en zonas históricamente marginadas y concibe la construcción de paz como un ejercicio donde se incluye a las comunidades en el proceso de ‘institucionalización’. Al respecto se sugiere una ‘gran campaña de participación’, con presencia de todas las regiones apuntándole a la construcción de paz, lo cual solo sería posible, en términos de Jaramillo (2014), a través de procesos de planeación participativa “de abajo hacia arriba”. La noción de paz territorial, por tanto, es una crítica al modelo centralista en el que la solución y las respuestas a los problemas de las comunidades vienen dadas desde y por el Estado central. Según Jaramillo, ese modelo “en el que unos funcionarios aterrizan como marcianos entre las comunidades para “traer el Estado” se quedó sin aire (...) así el Estado nunca va a “llegar” a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad” (Jaramillo 2014, 57). Pero también cuestionó lo que denomina “una lógica de fragmentación”, es decir, que las comunidades se organicen por su cuenta, de manera aislada (Jaramillo 2014). Lo que propone en su discurso fue:

(...) imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio.

“Institucionalidad” entendida no solo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar (Jaramillo 2014, 57).

Es así como, de manera integral, esta noción busca asegurar la presencia del Estado a través de sus instituciones en el territorio, pero también garantizar la participación de la gente desde lo local y las medidas de verdad, justicia y reparación en el marco de la justicia transicional a fin de asegurar el pleno goce de los derechos para las víctimas y evitar la impunidad. Se entiende que la paz es una construcción de todos y que no será posible sin la participación de quienes han sido los directos afectados.

Pero, esta noción de paz territorial ha sido criticada dada su visión de territorialidad en el sentido institucional. Autores como Bautista (2017) han criticado esta forma de entender lo territorial y argumentado que se trató simplemente de “vaciar los lugares de las construcciones sociales previas para “llenarlas” con institucionalidad estatal derivada de una suerte de lógica corporativa” (2017, 108). Sostiene que de fondo sigue existiendo una lógica netamente liberal de paz, un enfoque estado céntrico, con un interés especial en la dinámica económica, es decir,

(...) reivindica e intenta revitalizar el proyecto de un Estado configurador de condiciones para la recomposición del mercado a partir de una “nueva economía” y que en últimas se traduce en la oxigenación del neoliberalismo, evitando distorsiones a los mercados y procurando cerrar el desangre financiero para el Estado que hoy significa la guerra en Colombia (Bautista 2017, 103).

Esta crítica de Carolina Bautista se basa en la idea de que la noción aparente de ‘paz territorial’ se funda en una perspectiva neoliberal que reproduce intereses económicos. Es decir, para la autora, esta es una “paz para el capital” caracterizada por la implementación de un modelo de desarrollo condicionado y vinculado a intereses de capitales extranjeros, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, particularmente en el escenario de posacuerdo. Al respecto, un caso que evidencia esta relación, ha sido la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural (Zidres)⁸ que, contrario a lo que podría pensarse, prioriza una noción de paz territorial que “orienta la acción gubernamental, ajenos en primera instancia a los de pobladores y organizaciones sociales locales” (Bautista 2017). Bajo este tenor, la autora afirma que:

⁸ Son zonas especiales que promovió el gobierno de Juan Manuel Santos, por cuanto “apuntan al desarrollo del sector agropecuario, con un enfoque productivo”. Zonas que fueron creadas a fin de desarrollar planes rurales integrales que además permitan el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y el fomento socioeconómico de la población (Jaramillo 2014,5).

(...) la intencionalidad subyacente a la noción de paz territorial del gobierno no es llenar sino desplazar, desarticular o integrar las realidades sociales, políticas, económicas, culturales existentes hasta el momento en los lugares en los que la característica de Estado aparente ha sido más crítica (Bautista 2017, 105).

Así, Bautista (2017) se refiere a esta noción en términos de una perspectiva neoinstitucionalista, cuyo fin último es fertilizar territorios para el desarrollo capitalista. Para ella, “la insistencia por corregir fallas institucionales e incluir regiones y poblaciones que han estado por fuera de las lógicas imperantes” tiene una relación directa con la “apertura de nuevos espacios y escenarios para la ampliación de mercados” (Bautista 2017, 102). No obstante, varias organizaciones de la sociedad civil han planteado sus propias propuestas de paz territorial. Una de ellas es la propuesta de paz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC)⁹ que es una figura que contribuye a la “reorganización del territorio colombiano; reconoce a la población campesina y fortalece las economías locales y los mercados de bienes rurales de alimentos y materias primas; da un uso sustentable a los recursos ecosistémicos y construye democracia en los territorios” (Duran 2014, 27).

Sea la que sea la perspectiva sobre la paz territorial, ésta se encuentra vinculada a la lógica del llamado “giro local” en los estudios de paz y conflictos. Este enfoque considera que lo local juega un rol importante por cuanto se define no solo en términos territoriales sino sobre todo en las dinámicas micro que se tejen en ese escenario territorial. Durante la década de 1990 el énfasis en el rol de las comunidades de base, locales, civiles, en relación con la construcción de paz creció considerablemente, nutriendo la concepción de “paz desde abajo”. A partir de ahí, se destacó la importancia de entender ‘lo local’ como algo más que un espacio geográfico. Así, según Leonardsson y Rudd, éste,

se refiere a los actos cotidianos de una diversidad de individuos y comunidades que van más allá de las élites y la sociedad civil, normalmente asociadas con la construcción liberal de la paz. Esta

⁹ Véase: Salgado Carlos (2014) “Nueve razones de por qué las Zonas de Reserva Campesina son un aporte a la paz”. Prensa Rural. Disponible en: <http://prensarural.org/spip/spip.php?article15225>.

comprensión de lo local enfatiza que la construcción de la paz no es un proyecto unidireccional impuesto desde arriba, sino que cambia continuamente a través de encuentros con agencias locales (Leonardsson y Rudd 2015, 827).

Para ambos autores, los actores locales son “los principales arquitectos, propietarios y partes interesadas a largo plazo de la paz” (Leonardsson y Rudd 2015, 826), por lo que no es posible avanzar en la construcción de ella sin su participación como sujetos activos y no como pasivos receptores. Tal como lo afirman Mouly y Garrido (2018), el incluir iniciativas locales de paz dentro del marco amplio de procesos nacionales garantiza que haya una mayor apropiación de las bases comunitarias, y eso contribuye y fortalece los procesos de construcción de paz. Este giro local es visto como una alternativa al clásico modelo liberal de la construcción de paz y resulta importante para esta investigación porque se da especial relevancia a la idea de construir la paz desde lo local y desde las bases comunitarias, entendiendo que permite consolidar procesos de larga duración.

La paz comunitaria, desde la cual Timothy Donais plantea el principio de ‘apropiación local’, está relacionada con la noción de paz territorial y es útil para este ejercicio investigativo por cuanto contempla la participación de las comunidades locales. Desde la voz de Donais, la perspectiva comunitaria entiende la “apropiación local” como un proceso donde los sujetos locales se caracterizan por gestionar sus propios procesos, más allá de simplemente implementar aquellos que les son dados (Donais 2011). Desde el enfoque de paz territorial, se reconoce la materialización de la paz sobre la base del reconocimiento de realidades de exclusión social, marginalidad, falta de oportunidades y de institucionalidad, es decir con un enfoque de derechos con perspectiva territorial (Bautista 2017).

Conclusiones

En este capítulo que corresponde al marco teórico-conceptual, se plantearon una gama de herramientas analíticas que serán clave para analizar nuestro caso de estudio y así responder la pregunta que guía esta investigación. Es así que se ha desarrollado un marco teórico que define la construcción de paz como un proceso agenciado por distintos actores, incluyendo principalmente a las poblaciones locales en sociedades afectadas por un conflicto armado. También se esbozó las

principales perspectivas para entender la construcción de paz incluyendo la paz liberal, comunitaria e híbrida. Se resalta la importancia de la construcción de paz desde una perspectiva comunitaria a partir de autores como Lisa Schirch y John Paul Lederach, por cuanto es fundamental para entender los procesos que se tejen alrededor de las prácticas propias de las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, siendo el caso de estudio la comunidad de Yurumanguí ubicada en la zona rural del distrito de Buenaventura.

También se desarrolló una discusión sobre las nociones de ‘resistencia civil’ o ‘resistencia noviolenta’. En función de eso, se precisa que por respeto a la forma en que cada autor ha hecho uso del término, esta tesis no presenta una distinción tajante, y en cualquier caso hace referencia a los procesos o estrategias que de manera noviolenta han desarrollado comunidades frente a alguna forma de injusticia ya sea percibida o real, con particular énfasis en los procesos emprendidos por comunidades víctimas del conflicto armado, como el presente caso de estudio. La perspectiva de resistencia pacífica o resistencia civil que aquí se desarrolló es particularmente útil por cuanto ayuda a entender cómo la comunidad de Yurumanguí hizo frente al conflicto armado a partir del desarrollo de estrategias y campañas de resistencia noviolenta durante más de 20 años que permitieron a la población no solo mantenerse en el territorio y conservar su autonomía, sino mitigar distintas formas de violencia directa, estructural y cultural. En un tercer momento se presenta la noción de ‘paz territorial’ en relación con el llamado “giro local” en los estudios de paz y conflictos, desde donde será posible analizar estas formas de resistencia noviolenta que se han configurado en el territorio de Yurumanguí, y desde donde se hace un aporte a la construcción de paz en doble sentido, territorial y nacional. En particular, se discutió la noción de apropiación local. Así, este marco teórico condensa discusiones teóricas y conceptuales que permiten enmarcar el análisis del caso de la comunidad Yurumanguí, en cuanto las estrategias de resistencia noviolenta y sus aportes a la construcción de paz.

Capítulo 2

Estrategias de resistencia pacífica y su aporte a la construcción de paz en el territorio (1998-2015)

La vida no es posible sin el territorio.

Resistir no es aguantar

(Consejo Comunitario de la cuenca del Río Yurumanguí, 2021)

El conflicto armado interno en Colombia afectó de manera diferenciada a niños, niñas, mujeres, comunidades negras e indígenas. Un territorio como Buenaventura en el cual el 86% de la población se identifica como negra o afrodescendiente tiene que ser visto desde una perspectiva con enfoque diferencial. De acuerdo con el CNMH (2015), entre 1995 y 2013 en Buenaventura se perpetraron un total de 26 masacres. Según la Unidad de Víctimas, con relación al total de su población, Buenaventura es el distrito con mayor cantidad de personas víctimas del conflicto armado, con casi 200.000 víctimas registradas. Sin embargo, los bonaverense han asumido de manera activa esta realidad y han generado estrategias para transformar este escenario de conflicto en uno de oportunidades.

El conflicto armado interno afectó de manera diferenciada no solo a personas y grupos, sino también a los territorios en sí mismos. En el caso de Buenaventura, esto se evidenció a través del uso de las tierras para cultivos ilícitos, la explotación de recursos de manera indiscriminada o los cementerios clandestinos, las llamadas “acuafosas”¹⁰. Durante una época los ríos mismos se convirtieron en ‘ríos de sangre’ donde a menudo se encontraban cuerpos flotar. Así pues, para algunos el territorio ha sido la principal víctima del conflicto armado interno y hablar de territorio implica reconocer la rica biodiversidad y las prácticas culturales que se tejen en relación con la naturaleza.

El territorio no es un espacio geográfico únicamente, sino que se entiende como un todo y en ese sentido la vida no es posible sin él. Es así como Buenaventura se constituyó una cuna de resistencia. En este lugar se han configurado múltiples procesos y formas para afrontar los distintos tipos de violencia y construir escenarios de paz y dignidad donde vivir y preservar el

legado histórico de los pueblos negros. En retrospectiva, la historia ha brindado elementos de resistencia no violenta que vienen desde la época colonial, hasta algunos más recientes que siguen vigentes, como las dinámicas de territorios ganados al mar y la consolidación de zonas de paz, como la comunidad del Puente Nayero (Castillo, Garcés y Quintero 2018).

Este capítulo empírico analiza el proceso de resistencia no violenta de la comunidad de Yurumanguí frente a la situación de conflicto armado y sus aportes a la construcción de paz a nivel territorial, haciendo énfasis en el periodo 1998-2015, sin dejar de lado elementos de años anteriores que contribuyen a entender cómo surgieron y se configuraron los procesos organizativos. Toma en cuenta las afectaciones particulares de esta comunidad por ser comunidad negra y por ubicarse en la zona rural del distrito de Buenaventura. En primer lugar, se identifican y examinan las estrategias de resistencia no violenta desarrolladas en este escenario. En segundo lugar, se analiza la forma en que estas estrategias de resistencia no violenta contribuyeron a la paz territorial en este periodo de tiempo. Finalmente se desarrollan las conclusiones.

1. Dimensiones analíticas: Político organizativa y sociocultural

Los esfuerzos de resistencia no violenta que desarrollaron los yurumanguireños y yurumanguireñas contribuyeron a abordar distintas formas de violencia que tuvieron lugar en el escenario del conflicto armado interno, particularmente en el periodo 1998 – 2015. Sin embargo, es equívoco pensar desde una lógica causal que fue el conflicto armado interno en primer lugar que conllevó a desarrollar estrategias de resistencia no violenta, aunque estuvieran relacionadas. De manera histórica, las comunidades negras en el territorio - cuando no en el país - han sentido en mayor o menor medida los impactos del abandono estatal y, de manera cotidiana, a veces casi imperceptible, han desarrollado en su día a día una gama de estrategias que les han permitido no solo vivir en el territorio sino mantenerse en él a pesar de las amenazas. En la zona alta de la comunidad de Yurumanguí, por citar un ejemplo, existió un palenque¹¹ denominado “El desparramado”, del cual todavía quedan vestigios en la cabecera del río. Esto indica de alguna manera que Yurumanguí tiene todo un legado de resistencia, el cual ha ido mutando conforme las

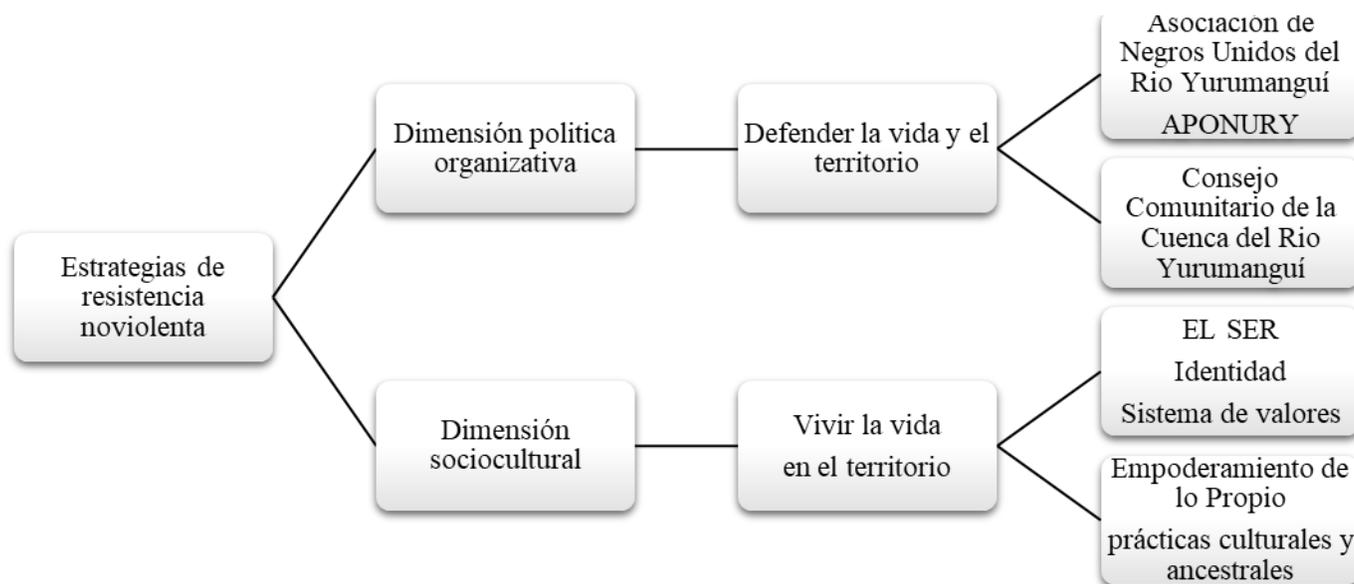
¹¹ ‘Palenque’ es el nombre con el que se conocen los asentamientos que construyeron los cimarrones, los esclavizados que en la época colonial lograron escapar de sus esclavizadores.

realidades que se viven, pero que en lo esencial persiste. Yurumanguí ha sido y es una comunidad resistente.

Resistir de manera no violenta es una decisión y una forma de vida que estas comunidades han desarrollado desde hace muchos años y, tal como lo plantea un líder del territorio, la comunidad se ha organizado históricamente de manera espontánea. No obstante, dadas algunas dinámicas externas como la llegada de foráneos a saquear los recursos naturales y el abandono del Estado que apenas comenzaba a reconocer a las comunidades afrodescendientes a través de la constituyente en 1991, un líder de la comunidad cuenta que tuvieron que organizarse “para contener y preservar la vida” (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021). Durante los años 80 y 90, la resistencia no violenta no era un tema especialmente relevante en la agenda de investigación de académicos colombianos. Comenzó a tener relevancia desde los estudios de paz a finales de los años 90 con mayores esfuerzos para teorizar esta práctica en el país en la última década (ej. Hernández 2002, 2009, 2015; Sanford 2003; Rojas 2004; Mouly y Garrido 2018; Hernández y Mouly 2019; Mouly 2021).

Bajo esta lógica, este capítulo se estructura en dos partes que permiten analizar en dos dimensiones, las formas y los tipos de resistencia no violenta que fueron desarrolladas en la comunidad de Yurumanguí en el periodo 1998-2015 (algunas persisten todavía). Es así que las estrategias de resistencia no violenta tienen una dimensión que se denominará “organizativa” y otra dimensión “sociocultural”, la dimensión refiere a entes territoriales que permitieron organizar el territorio tanto a nivel político cuanto administrativo, la segunda en cambio hace referencia a una dimensión que permitió ‘vivir la vida’ en el territorio, como lo ha denominado un líder comunitario (ver figura 2.1).

Figura 2.1 Dimensiones analíticas de resistencia no violenta en Yurumanguí



Fuente: Datos tomados a partir de información recolectada en el trabajo de campo en Yurumanguí 2021

La primera dimensión organizativa hace referencia específicamente a la construcción de entes jurídicos y autónomos como lo son el consejo comunitario y la organización étnico-territorial APONURY. Esta dimensión articula dos estructuras organizativas desde las cuales surgen acciones estratégicas de resistencia civil y acciones legales, que, en sinergia, han sido claves en el proceso de resistencia no violenta de esta comunidad. La segunda dimensión sociocultural se refiere a aquellas estrategias que toman vida desde las prácticas culturales y ancestrales que permite a los pobladores de manera cotidiana mantener el espíritu de la resistencia, de unidad, de vida y esperanza en el territorio. Estas prácticas han sido indispensables para el empoderamiento de la comunidad y el goce en el espacio de vida (su territorio). Cada dimensión cobija una gama de mecanismos y/o estrategias que surgen específicamente para defender el territorio y vivir la vida en él. El elemento territorial recobra suma importancia por cuanto “la vida no es posible sin el territorio (tanto mojado como seco)”¹². Por esa razón, se cuida, se vive y se defiende.

¹² Este término es usado por los lugareños para referirse al río, las quebradas, pero también a la tierra, al bosque.

1.1. Dimensión organizativa

Los primeros esfuerzos de resistencia no violenta relevantes para esta investigación, es decir, la creación de una organización étnico territorial propia, se comenzaron a gestar a finales de 1991, año en que se desarrollaba en el país un proceso constituyente que convocó la movilización de las comunidades negras en el territorio nacional a fin de poder participar y lograr que se les reconociera como sujetos de derecho, dado que hasta entonces las comunidades étnicas eran obligadas a renunciar a su identidad y, por tanto, eran inexistentes en la constitución política del país (Borja 2014). La estrategia de crear una entidad étnico territorial propia que dirigiera las dinámicas internas de la comunidad respondía en términos generales a la necesidad de organizarse, ya que, en alianza con los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes finalmente habían logrado incluir el artículo transitorio 55 en la constitución del 1991, mismo que permitió la creación de la Ley 70 de 1993, cuyo objeto es:

(...) reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, (...) establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana (Ley 70 de 1993).

De acuerdo con líderes de la comunidad, fue desde la iniciativa de un sacerdote santandereano llamado Joaquín Mayorga, quien en esa época ejercía como párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Merizalde y con la convicción de los líderes del territorio, que en diciembre de 1991 se dio paso a la creación de la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí, APONURY por su sigla¹³. Su primer presidente fue José Aramburo, más tarde conocido como Naka Mandinga. Esta asociación es de gran relevancia porque nació en el marco

¹³ La constitución de asociaciones en los territorios de comunidades negras no se dio únicamente en Yurumanguí. Otras comunidades negras y campesinas motivadas también por el sacerdote Mayorga crearon sus propias asociaciones. Tal es el caso de la organización por la defensa de los intereses de las comunidades negras del río Cajambre (ODERINCA), la asociación por la defensa de los derechos de las comunidades negras del Río Raposo (ACONUR), la organización de negros unidos del Río Anchicayá (ONUIRA), entre otras. Lo hicieron a fin de prepararse para la eventual reclamación de derechos de propiedad colectiva (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

de un ejercicio de autonomía territorial, mucho antes de que la ley reconociera el derecho de las comunidades negras, es decir que esta entidad responde a la convicción y la cosmovisión de sus gentes. El concepto de apropiación local resulta pertinente en este escenario por cuanto es posible ver que las comunidades han controlado hasta cierto punto “tanto el diseño como la implementación de los procesos políticos” (cf. Donais 2011, 48).

APONURY ayudó a construir la Ley 70 que daría paso a los consejos comunitarios, incluyendo la creación del consejo comunitario de Yurumanguí en 1998 (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Lo interesante es que, contrario a lo que sucedió en otras comunidades, APONURY siguió siendo una organización del territorio, no desapareció. Y pese a no tener un sustento jurídico, hoy es considerada por los yurumanguireños como “la organización madre, la columna vertebral del proceso” (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021). Según un líder de la comunidad,

APONURY es una organización no gubernamental, es la primera organización que tenemos en el territorio. Esa es la organización madre. Es como quien dice la mamá porque fue la organización que nos permitió organizarnos, a nivel digamos conjunto porque antes de que apareciera APONURY en el territorio existían, así como existen en las grandes ciudades juntas de acción comunal, pero nada colectivo-. APONURY nos organiza en lo que somos hoy: un solo territorio conformado por 13 comunidades (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021).

De hecho, la creación de esta organización y su importancia para la comunidad radica en que surgió como una iniciativa propia. Es importante en la medida en que los pobladores entienden que nada ni nadie, salvo ellos mismos la pueden destruir. Es así que la creación y la persistencia de esta organización a través del tiempo permite vislumbrar la capacidad organizativa de la comunidad desde la noviolencia para afrontar amenazas externas al territorio. Desde APONURY, los primeros lineamientos se enfocaron en la construcción de un plan de conservación de los recursos naturales, en vista de que el territorio estaba siendo saqueado por foráneos que solamente dejaban devastación ambiental y degradación cultural (Sentencia 2017; Morales 2018). Esto es, a la luz de lo que plantea Donais (2011), un proceso que, de manera temprana, aportó a la

construcción de paz desde la apropiación local ya que fueron los locales quienes gestionaron sus propios procesos y sobre todo los implementaron desde una convicción propia.

Una de las características de la resistencia civil es precisamente el grado de organización y coordinación del movimiento que la emplea. Es así que este hecho en un primer momento representó una estrategia de resistencia noviolenta para proteger los recursos naturales y preservar la integridad territorial. De acuerdo con Barter (2015), un factor clave para distinguir un acto de resistencia noviolenta es la intención con la que se desarrollan las acciones. Y en el ejercicio de la construcción de una asociación étnico-territorial, es claro que la intención de las comunidades fue proteger su vida y proteger su territorio, salvaguardar su derecho a la titulación del territorio y contrarrestar amenazas, incluyendo la devastación por parte de foráneos con el amparo del Estado (Sentencia 2017).

Bajo esta misma dimensión se ubica la acción legal que enmarca la creación del ente jurídico del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí (en adelante Consejo). Esta fue también una acción legal de carácter político administrativa porque permitió la organización de la comunidad a través de un mecanismo reconocido por la ley en Colombia. La ley 70 de 1993 señala que los consejos comunitarios son una forma interna de administración de los territorios. Los yurumanguireños entendían la importancia de esta organización pese a que ellos tenían ya una figura de autoridad. Entendían que era necesario avanzar en términos legales hacia el reconocimiento de su autonomía, por lo que combinaron este tipo de acciones convencionales con el ejercicio de la resistencia civil.

Otras experiencias de resistencia civil como es el caso de los yaquis en México (Hernández y Mouly 2019) dan luces para entender la importancia de articular acciones de tipo legal con resistencia civil, en tanto que visibiliza y fortalece no solo las campañas sino los procesos de resistencias. Los logros alcanzados desde las acciones legales contribuyen a que se legitime su lucha y a su vez a que se avance en la reivindicación de los derechos tanto individuales cuanto colectivos. La dimensión política/administrativa que aquí se desarrolla, en principio, se relaciona con lo que académicos del campo de la resistencia civil llamarían el escenario de confrontación con el Estado o las luchas por la reivindicación de derechos colectivos, ya que la necesidad de

organizarse primero a través de APONURY y posteriormente del Consejo Comunitario respondió en un primer momento a poder exigir que se reconocieran las comunidades como sujetos colectivos y se brindara las garantías del derecho al territorio. Siguiendo a Gandhi, la resistencia civil se utiliza para combatir las injusticias y desigualdades sistémicas, es decir, en términos de Galtung (2010) la violencia estructural que impide a las comunidades satisfacer sus necesidades básicas.

Cuando se desarrollaron estas estrategias, Yurumanguí no conocía todavía el horror de la guerra. Así lo expresa un líder comunitario: “Antes nosotros no conocíamos la guerra. Por allá a finales de los 80 y de los 90 es que uno iba dándose cuenta que eso que pasaban por la televisión se nos estaba acercando” (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Frente a la nueva realidad de finales de los 90, los miembros de la comunidad tuvieron que desarrollar nuevas estrategias para defender su territorio, estrategias que no hubiesen sido posibles en parte sin la existencia de esta dimensión organizativa de las autoridades territoriales.

Un elemento interesante para precisar es que, en el caso del Consejo Comunitario, a pesar de ser una estructura organizativa con fundamentos de ley, es decir, que viene desde el Estado, se ubica desde la dimensión organizativa como un ente clave para el proceso de resistencia no violenta de las comunidades. En primer lugar, la norma que permitió la creación de este ente jurídico emergió en respuesta al proceso de lucha comunitaria que tuvo lugar en el marco de la constituyente en año 1991 (Obregón y Córdoba 1992). En segundo lugar, este ente que representa autoridad territorial ha sido una plataforma desde la cual las comunidades han logrado dinamizar diversas formas de resistencia no violenta para sobrevivir al conflicto armado y preservar su espacio vital, su territorio.

De este modo, para pensar el proceso de resistencia no violenta que desarrolla la comunidad de Yurumanguí, es indispensable pensar estas dos grandes dimensiones que, pese a tener distintas funciones y representar distintas formas de autoridad (véase la tabla 1), convergen en un todo que permite el desarrollo de aquellas estrategias y tácticas para resistir al escenario de conflicto armado interno, a los múltiples actores armados, a los grandes intereses del capital, a las lógicas de extractivismo, a la minería a gran escala y a toda clase de amenaza que ha llegado al territorio.

Tabla 1. Funciones de la Junta de Consejo y APONURY

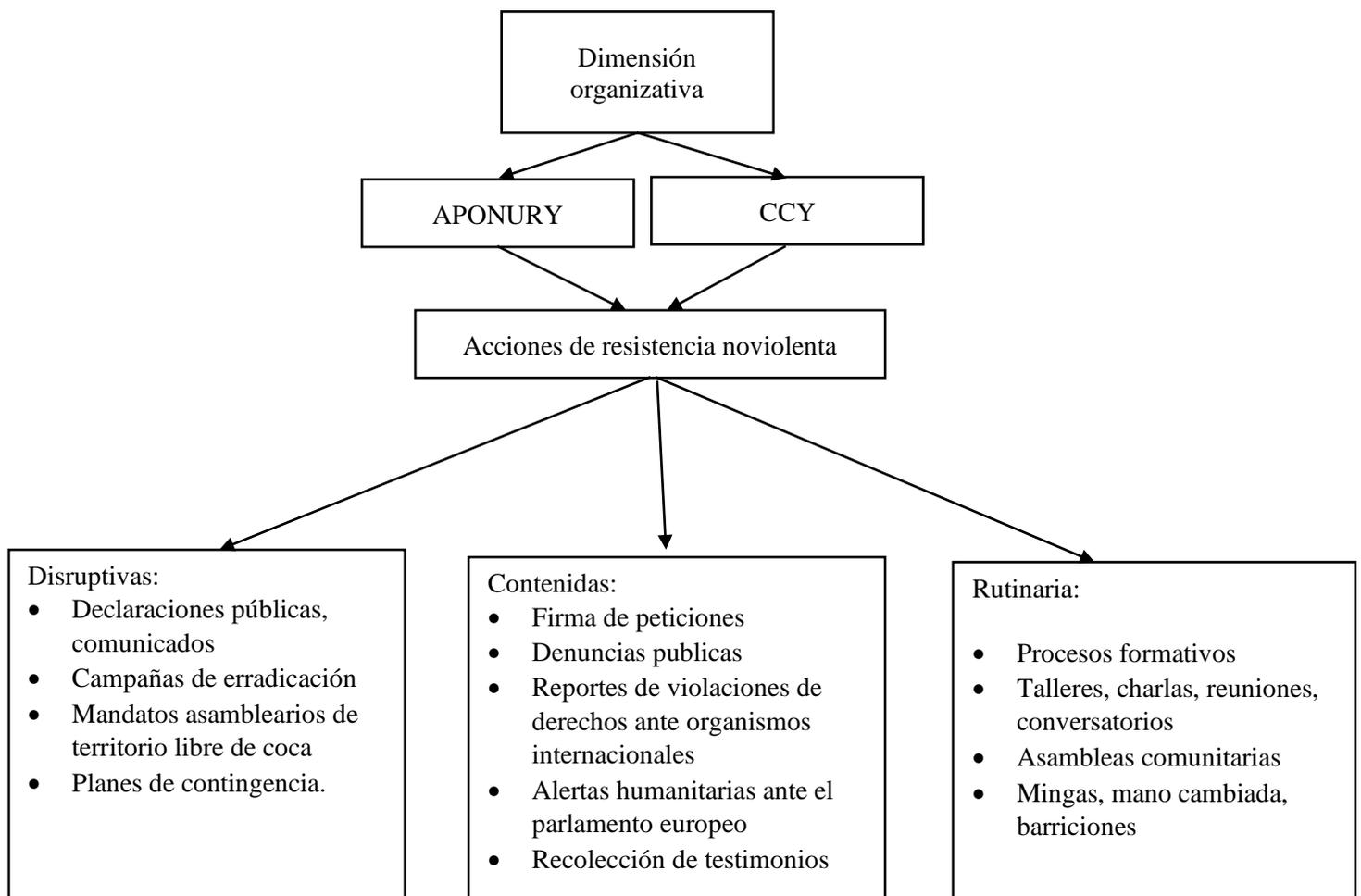
JUNTA DE CONSEJO COMUNITARIO	APONURY
<p>Definición: Máxima autoridad administrativa del territorio. La conforman seis miembros más el representante legal.</p> <p>Funciones:</p> <p>velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva.</p> <p>Ejercer el gobierno económico de las tierras de las comunidades negras según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente.</p> <p>Delimitar y asignar áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente (con base al reglamento que expida la Asamblea General del CC)</p> <p>Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la asamblea general.</p> <p>crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen.</p> <p>Presentar a la Asamblea General para su consideración y aprobación el reglamento de administración territorial y manejo de recursos naturales, y velar por su cumplimiento.</p> <p>Administrar, con base en el reglamento y normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y concertar la investigación en las tierras.</p>	<p>Definición: Organización étnica territorial autónoma de carácter político que orienta las acciones de la junta de consejo comunitario. Se conforma por todos los habitantes de la cuenca del río Yurumanguí. La integra un miembro de cada comunidad.</p> <p>Funciones:</p> <p>Defensa del territorio (interno y externo)</p> <p>velar por el buen uso de los recursos naturales</p> <p>Establecer directrices por las cuales se debe regir la Junta.</p> <p>Orientar lineamientos del reglamento interno y planes de manejo.</p> <p>Realizar actividades para el fortalecimiento y fomento organizativo.</p> <p>Hacer veeduría al funcionamiento de instituciones y organizaciones que operan en el río.</p> <p>Establecer criterios para la elección de servidores públicos en el territorio en conjunto con el CC.</p> <p>Canalizar recursos para el beneficio colectivo.</p> <p>Velar por la capacitación de sus miembros.</p>

Fuente: Manual de convivencia de la comunidad de Yurumanguí 2021

Para la comunidad de Yurumanguí, APONURY es la organización madre y, aunque para muchos en términos jerárquicos estaría por encima del consejo comunitario, viendo este último incluso “como un hijo”, otros señalan que ambos tienen distintas funciones y se complementan. Lo relevante del caso es que este proceso organizativo se ha mantenido en el tiempo. Inició en 1991 y ha sido fuente para nutrir y construir conciencia colectiva. De acuerdo con Hernández y Posada (1999), ambos elementos son fundamentalmente característicos de la resistencia civil. Han sido

múltiples las estrategias de resistencia no violenta que surgen desde la dimensión organizativa como mecanismo para defender la vida y el territorio. En su estudio sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CPSJA), Masullo (2015) identificó acciones no violentas de tipo disruptivas, contenidas y rutinarias. La figura 2.2 ofrece un panorama de las mismas en el caso de Yurumanguí. Estas serán desarrolladas con mayor precisión más adelante a fin de articular cada una al escenario de conflicto al cual corresponde.

Figura 2.2 Estrategias de resistencia no violenta desde la dimensión organizativa¹⁴



Fuente: Datos tomados del trabajo campo y elaborada a partir de Masullo (2015).

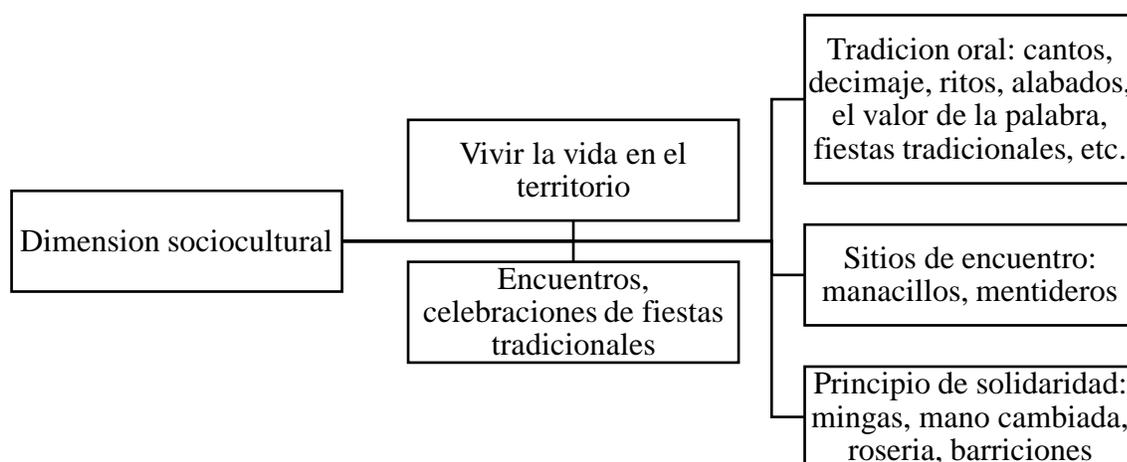
¹⁴ Los planes de contingencia son ubicados en esta figura como parte de acciones disruptivas ya que, en un país cuyo conflicto armado ha dejado más de 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, la creación de estrategias para mantenerse en el territorio ha sido una demostración pública de autonomía y poder (en el sentido no tradicional).

1.2. Dimensión sociocultural (Vivir la vida)

A diferencia de la dimensión política-organizativa que cubre de manera histórica la creación de organizaciones propias y autónomas en el territorio colectivo de la comunidad de Yurumanguí, esta dimensión sociocultural posee elementos distintos pero indispensables para comprender la forma en la que surgieron ciertas estrategias que, desde la práctica cultural, el desarrollo de actividades tradicionales y ancestrales revitalizaron el proceso de resistencia no violenta, contribuyeron a mantener el sentido de unidad y, más que defender la vida, permitieron vivirla y permitieron el goce y disfrute del territorio.

Los estudios sobre resistencia civil y construcción de paz territorial recalcan el elemento cultural como factor clave para construir procesos acordes a la realidad de los grupos concernidos. Pero lo cultural es entendido en esta investigación no como un elemento en sí mismo, sino como un proyecto comunitario que además es político. La dimensión sociocultural que aquí se desarrolla expresa el ‘vivir la vida’ y recoge estrategias de resistencia no violenta que toman lugar a través del desarrollo de prácticas culturales y ancestrales (ver figura 2.3). Vivir la vida en el territorio es reafirmar que son las comunidades las que tienen autoridad sobre él, y mantenerse en él no tendría sentido si no es para recrear su dinámica propia de vida.

Figura 2.3 Estrategias de resistencia no violenta desde la dimensión sociocultural en Yurumanguí



Fuente: Resultado de la aplicación de entrevistas realizadas en Yurumanguí, 2021.

Lo que se ve en la figura 2.3 son prácticas propias de las comunidades negras que cobran especial relevancia en el escenario del conflicto armado. Si bien las estrategias para defender el territorio les permitieron mantenerse en él, desde una noción de apropiación local estos elementos no son otra cosa más que formas propias de organización cultural (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021). Éstas permitieron empoderar a las comunidades, llenarlas de esperanza y convicción para seguir luchando y defendiendo ese proyecto político propio, ya que, tal como lo expresó una lideresa, “lo cultural es en el fondo político” (LC07, lideresa, en entrevista con la autora, febrero 2021). En palabras de otra líderesa,

(...) nosotros a partir de la alegría, de las prácticas de relacionamiento que hemos tenido, a partir de los elementos culturales, de esa interacción de respeto con la naturaleza, ese reconocimiento por el otro, esa hermandad, ese modelo de familia extensa que nosotros tenemos que va más allá de lo consanguíneo, esa manera de expresarnos, de vivir la vida, desde ahí estamos resistiendo (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

Los manacillos¹⁵ y los mentideros¹⁶, por ejemplo, son espacios de encuentro desde donde se recrea la tradición, donde además “se construyen y divulgan las verdades públicas y se discute la opinión, sobre todo en el ámbito de las decisiones más álgidas de la comunidad o del ámbito político general” (Arboleda 2011, 331). Es en últimas un espacio autónomo, donde se expresa desde la tradición oral el elemento de identidad a través del cual se manifiesta el ser, el vivir. El conflicto armado interno fracturó las dinámicas y prácticas comunitarias. Las afectaciones tuvieron dimensiones profundas: “la guerra redujo las posibilidades de disfrutar la vida comunitaria y de realizar actividades cotidianas que son importantes por su significado ancestral y además por su contribución al sostenimiento de las familias y de la comunidad” (CNMH 2018, 65). Es así que la resistencia no violenta se ha desarrollado desde una dimensión sociocultural desde hace mucho tiempo, pero cobra suma importancia en esta investigación porque es también una plataforma que permite orientar el cauce del río, permite desarrollar acciones estratégicas

¹⁵ Los manacillos (o matachindé) “son festividades religiosas celebradas en Juntas y otras veredas de Yurumanguí durante Semana Santa”, que incluyen tres momentos: “el tiempo de pasión y el tiempo de juego y la fiesta” (Valencia 2018).

¹⁶ Los mentideros son lugares donde la comunidad se reúne a hacer tertulias, a conversar, compartir, contar historias, entre otros.

noviolentas que dan cuenta del proceso de resistencia y además de la importancia de la identidad comunitaria en el mismo.

Del mismo modo como Zapata Olivella encontró en las religiones y filosofías africanas una resistencia activamente reflexiva frente al proyecto de muerte al que han sido arrastradas las comunidades negras, y desde donde promulgó la defensa de la vida tanto humana como natural (Arboleda 2011), así también las comunidades negras de Yurumanguí encontraron en su práctica cultural y su saber ancestral una forma de resistir a la que llaman “pacífica” Esta da cuenta de la defensa y especialmente del goce en el territorio que, de acuerdo con algunos testimonios “ es nuestro y hemos cuidado de generación en generación a partir de nuestros saberes” (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

De esta manera, la cosmovisión de los pobladores, que se traduce en prácticas diarias que les permite vivir la vida, ha permeado los esfuerzos para mantenerse en el territorio y ha permitido mantener viva la práctica de la resistencia a través de los valores culturales que se revitalizan de manera constante en los espacios de vida que son a menudo espacios donde se desarrollan prácticas de cocina, religiosas, de siembra. Estos son “el fogón, el velorio, el chigualo, mentideros, entre otros”, pero también los espacios donde se fortalece la narrativa comunitaria, la sabiduría ancestral, la pedagogía participativa (Rivera, Castillo y Otálvaro 2019).

A este punto, es importante mencionar que la comunidad de Yurumanguí se rige por cinco principios fundamentales que se asumen desde la dirección del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Estos principios son: territorio, identidad, autonomía, solidaridad y opción propia de futuro. Eso significa que para la comunidad es vital mantener el derecho al espacio para ser (el territorio), el derecho a ser (la identidad), el derecho a pensar de dónde vienen y para dónde van, es decir el proyecto político (opción propia y autonomía) y estar en sintonía con el otro y apoyarlo en toda circunstancia, el otro que en lo comunitario es siempre un hermano. Estos principios se ubican desde esta dimensión sociocultural porque de fondo plantean la necesidad de reconocer la cosmovisión de la comunidad, y esa cosmovisión influye en el desarrollo de estrategias que fortalecen el espíritu de resistencia desde la práctica tradicional.

Tres tipos de acciones se destacan en este sentido. Primero, la minga es una forma tradicional de trabajo comunitario en que se articulan diversos actores en la búsqueda de un objetivo en común. En Yurumanguí esta es una práctica común para mantener el territorio limpio y propicia espacios de recreación. Este es un trabajo que se hace por convicción, generalmente porque busca el bien de todos y todas. La minga posibilita el compartir con el otro, genera unidad y fortalece valores culturales. Segundo, la mano cambiada es una práctica ancestral que usan las comunidades. Es una especie de “trueque de trabajo”, es decir, yo te ayudo y, a cambio, tú me ayudas. Esta estrategia se fundamenta en el principio de solidaridad, la cual, según Masullo (2015), puede ser disruptiva por cuanto rompe las lógicas del capital y deja de lado el factor económico.

Tercero, la barrición es una forma de integración comunitaria que se hace a través de un proceso de pesca colectiva. En días en que el río esté seco, se pone una red en un punto estratégico. Cada persona cumple una función. Algunos se ubican en la red para trancar, es decir evitar que los peces pasen, mientras otros nadan de arriba hacia abajo llevando los peces hacia la red. La idea es pescar la mayor cantidad de peces posible durante la época en que el río esté seco. Esta actividad es de compartir. En efecto, consigue que se repartan de manera equitativa los pescados entre toda la comunidad y durante el día de barrición se hace olla comunitaria.

Esta resistencia desde la dimensión sociocultural es además una respuesta al racismo estructural que históricamente ha afectado a las comunidades negras en el país, misma que demoniza la cosmovisión, el arte y cultura de la gente negra. Las prácticas que se ubican en la dimensión sociocultural rescatan, reafirman y celebran lo ancestral y cultural como fuente de paz, de sabiduría moral y de no violencia. Es decir, es en sí un acto de resistencia pacífica que a su vez nutre la dimensión política-organizativa de la resistencia.

Es a partir de estas dos dimensiones generales que se desprenden todas las estrategias de resistencia no violenta que tuvieron lugar en la comunidad de Yurumanguí, de manera particular en el escenario de conflicto armado interno. La primera no es otra cosa que un mecanismo para defender la vida y con ella el territorio. La segunda en cambio es para vivir la vida plena, feliz, en paz. Ambas están interconectadas, pero cada una tiene matices analíticos particulares y es relevante en la medida en que es a partir de estas dos dimensiones que se pueden desarrollar

estrategias de resistencia no violenta que contienen la violencia e incluso la amenaza de violencia contra las comunidades. Estas dos dimensiones son clave para comprender la capacidad de la comunidad de desarrollar estrategias de resistencia no violenta que contribuyen no solo a abordar diferentes tipos de violencia (como veremos a continuación) sino también transformarlas a partir de lo que llaman un proyecto político autónomo. Así, a partir de la siguiente sección se comienzan a examinar distintos momentos que corresponden a diversos tipos de violencia tanto cultural como física y estructural que vivió esta comunidad. Se identifican las diferentes estrategias que, a partir de las dimensiones tanto organizativa como sociocultural, se desarrollaron en el territorio y permitieron contener nuevas expresiones de violencia y resistir en el escenario de conflicto armado como parte de la estrategia para mantenerse en el territorio.

2. Un territorio en conflicto, un río de resistencia

Esta sección hace una descripción detallada de la realidad que vivió la comunidad de Yurumanguí entre los años 1998 y 2015. A su vez, identifica las distintas formas de violencia tanto directa como estructural y cultural que padeció esta comunidad y examina las formas de resistencia no violenta que empleó para afrontar estas formas de violencia y así construir paz en el territorio.

2.1. Masacre, desplazamiento y despojo: diálogo, solidaridad y unidad

Entre los años 2000 y 2005 se vivió el terror de la guerra en Yurumanguí. Por un lado, había presencia del bloque 30 de la guerrilla de las FARC en el territorio. Por el otro, había incursiones de paramilitares que, si bien no hacían presencia permanente, entraban y salían esporádicamente del territorio, buscando entre otras cosas debilitar al enemigo atacando a la población civil a la que consideraban base de apoyo de los insurgentes. Era latente un tipo de violencia cultural, la estigmatización de los miembros de la comunidad. Un poblador explicó así que en aquel momento “nos acusaban de que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla, que éramos guerrilleros” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Durante esta época Buenaventura en general y Yurumanguí en particular vivían en carne propia no solo la violencia directa (violaciones, masacres, desplazamiento, etc.) sino también una violencia cultural que a muchos les costó incluso la vida al ser tildados de pertenecer a un bando u a otro, como lo narró otro poblador: “en Buenaventura llegamos en un periodo donde se señala que los urbanos eran

paramilitares y los rurales eran de las guerrillas de las FARC, vivimos un periodo donde hay muchos señalamiento contra miembros de la zona rural” (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

Era el 29 de abril del 2001 cuando las autodefensas del bloque Calima incursionaron por el alto Naya y luego de haber masacrado varias poblaciones en Puerto Merizalde atravesaron el territorio de Yurumanguí (verdadAbierta 2012). Dieciséis paramilitares del bloque Calima habrían masacrado a siete pescadores de la vereda El Firme en Yurumanguí. Luego de obligar a la población a salir de sus casas, seleccionaron a ocho personas y los hicieron tender en el piso para posteriormente decapitarlos y descuartizarlos (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021; Quintero 2020). Los paramilitares tomaron posesión de los bienes de algunos pobladores, esto es: motores, gasolina, remesas. Además, una mujer fue violada por varios paramilitares. Los sobrevivientes de esta masacre se desplazaron de manera masiva a veredas cercanas como El Barranco, Veneral y San Antonio; otros se fueron a la zona urbana (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Esta masacre se dio pese a las alertas tempranas y las advertencias de entidades como Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.

En la comunidad de El Firme no quedaron sino restos de una masacre que no se olvida y letreros que decían “bajamos del Naya y nos vamos a quedar; vamos a regresar; todos los sapos colaboradores de la guerrilla son objetivo militar”. Este hecho sin duda quedó marcado en la historia del país y de los yurumanguireños. Con eso, la comunidad de El Firme desapareció. No quedaron habitantes en la vereda y hoy por hoy sigue siendo un pueblo fantasma. Frente a estos hechos se generaron múltiples respuestas noviolentas por parte de la comunidad (ver tabla 2), los cuales se discuten a continuación.

2.2. Planes de contingencia

En el escenario de amenazas constantes, señalamientos y estigmatizaciones a los líderes del territorio, se desarrollaron varias acciones estratégicas noviolentas dirigidas a reducir y mitigar los riesgos de muerte. En primer lugar, se consideraba que los hombres estaban más expuestos al conflicto armado, ya que se decía que “eran guerrillos, estaban marcados” (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Por ello, desde el Proceso de Comunidades Negras

(PCN) se tomó la decisión de promover el relevo en los liderazgos como estrategia de resistencia noviolenta. Esto significó que las mujeres comenzaron a asumir los liderazgos en espacios como el consejo comunitario, siendo representantes legales. Es así que desde el año 2002 se vio un cambio en las estructuras organizativas de la comunidad.

Por otro lado, ante el escenario de masacres y desplazamiento forzado, la comunidad mandató desde su autonomía y bajo el liderazgo de las organizaciones territoriales que abandonar el territorio sería la última opción para los yurumanguireños. Eso significaba que se harían desplazamientos dentro de la comunidad a fin de evitar salir del territorio. Para lograrlo los pobladores construyeron planes de contingencias que les permitieron saber qué hacer bajo determinada circunstancia. Estos planes de contingencia posteriormente fueron sistematizados gracias al apoyo de organizaciones como la ONG Solidaridad Internacional.

Los planes contienen cuatro líneas fundamentales: dotación, albergue, salud y comunicación. En cada vereda había un coordinador encargado de dinamizar cada línea. De ese modo, ante cualquier eventual situación de riesgo, las comunidades tenían identificado sitios de refugio que estaban complementemente dotados. Habían señalado lugares seguros de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Estos eran las escuelas, las iglesias, los puestos de salud, la casa comunitaria, entre otros. Estos eran lugares en los que la población podía refugiarse y que los actores armados debían respetar según las normas del derecho internacional humanitario. Un poblador explicó cómo funcionaban estos planes:

Estos planes cuando estaba cómo toda la agudización del conflicto, como su nombre lo dice, es como darle frente a esas situaciones de conflicto armado que vivíamos en aquella época. Los planes de contingencia nos permitieron demarcar algunas zonas de refugio comunitario, los equipos de comunicación, de salud. Nos permitió contar con algunos insumos como cosas de cocina, sábanas, botiquines para cuando se movieran las otras comunidades tener como atenderlas. Entonces, las veces que pasó fue así. Podíamos atender y recibir a las comunidades que se movían (LC08, lideresa, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Esta estrategia fue fundamental para mantenerse en el territorio. En el caso particular de veredas como Juntas de Yurumanguí y San Antoñito, se construyeron casas de refugio en sitios seguros

como las quebradas. Según algunos autores como Masullo (2015), el desplazamiento a veces constituye una estrategia de nocooperación con los grupos armados que buscan controlar el territorio. Para este caso en particular, desplazarse de una vereda a otra a fin de evitar salir del territorio y mantener la autoridad (es decir, no ceder ante la presión de los armados) se constituyó un elemento importante y disruptivo (cf. Masullo 2015) en el marco de la campaña de resistencia noviolenta de la comunidad de Yurumanguí frente a la situación de conflicto armado.

La decisión de quedarse en medio de ataques, amenazas e incursiones de grupos armados significaba arriesgarse a morir, pero irse significaba perderlo todo, incluso la comunidad. La decisión de quedarse fue fundamental, y esto se entiende desde la dimensión sociocultural porque el territorio es la vida y vivir significaba mantenerse en él. Sin esta estrategia, el proceso de resistencia noviolenta no hubiese sido posible porque “no hubiera quedado nadie en Yurumanguí” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). La estrategia fortaleció el proceso organizativo en sus dos dimensiones.

Detrás de estas acciones estratégicas subyacía un elemento clave que es producto de la dinámica ancestral de estas comunidades. Es lo que ellos mismos llaman “el principio de la solidaridad y la unidad” que permitió mantener viva la estrategia de resistir de manera noviolenta, porque la resistencia es colectiva. Así lo dejó saber un miembro de la comunidad: “el momento en que alguna familia, alguna comunidad llegara por algún evento, la gente se iba moviendo de casa en casa aportando lo que tuviera para sostener esa gente mientras se pudiera conseguir una ayuda externa” (LC08, lideresa, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Esta idea de que “la última opción es irse del territorio” fue una estrategia de resistencia noviolenta que permitió fortalecer las relaciones de hermandad, los principios de unidad y solidaridad, pero también fue una forma de enviar un mensaje a los grupos armados y decirles que “nosotros somos los dueños del territorio, y de aquí no nos vamos” (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021). Como se puede ver en otras experiencias de resistencia civil, como la de San José de Apartadó en Antioquia en Colombia (Masullo 2015), esta estrategia de ‘reubicación’ sirve para reacomodar “el campo de batalla para evitar el desplazamiento y

mantener la neutralidad” (Masullo 2015, 24). No así, como ya se ha mencionado, los yurumanguireños buscaron con ello mantener su autonomía en el territorio.

Los testimonios recogidos en Yurumanguí sugieren que en muchos casos las políticas estatales para acoger a los desplazados fueron un elemento que “promovió” el desplazamiento. En cambio, no hubo apoyo de las entidades gubernamentales para atender a aquellos que se quedaron a resistir en su territorio.

2.3. El diálogo

Otro elemento importante que acompañó la estrategia de resistencia noviolenta de la comunidad fue el diálogo, una combinación denominada “nocooperación pactada” por Juan Masullo (cf. Masullo, Mouly y Garrido 2019). Pese a las directrices de la organización del PCN (de la cual hace parte el CCY) de evitar cualquier contacto con los actores armados, la comunidad decidió que era necesario dialogar con ellos sobre la base del respeto, puesto que estaban en el territorio (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Las comunidades lograron conversar en varias ocasiones con los grupos armados para garantizar el respeto de la población civil. Para los yurumanguireños, esto representaba un riesgo porque, por un lado, se exponían a ser asesinados por los grupos ilegales y, por el otro, podían ser judicializados por presuntamente colaborar con estos grupos. No obstante, era necesario ya que les permitía plantear su autonomía frente a los actores armados y exigir el respeto de su proyecto político desde la fortaleza organizativa que les caracterizaba.

Durante los años 2000 – 2008, fue constante la necesidad de acercarse al comandante del frente 30 de las FARC alias ‘Mincho’ y discutir con él temas como el respeto a la población civil, a la autoridad y a la autonomía de las organizaciones étnico-territoriales, lo cual implicaba no tomar decisiones sobre los recursos naturales ni sobre los conflictos comunitarios. De acuerdo con algunos testimonios, los guerrilleros querían asumir la autoridad del territorio, ser ‘garantes de derecho’, proteger a la comunidad y hacer de instancia para resolver conflictos internos y comunitarios. Este ejercicio le permitió a la comunidad fortalecerse organizativamente en tanto que sus integrantes aprendieron a mantener “un mismo discurso [...] a hablar un mismo idioma porque cualquier anomalía significaba un riesgo porque no nos verían como una unidad” (LC08,

lideresa, en entrevista con la autora, febrero 2021). Tal como lo demuestran varios estudios (ej. Mouly y Garrido 2018; Mouly, Hernández y Garrido 2019), la cohesión es fundamental para el éxito de un proceso de resistencia no violenta. Además, otras experiencias de resistencia civil como el caso del CRIC en el Cauca, de Samaniego en Nariño y Las Mercedes en Norte de Santander demuestran cómo el diálogo es una herramienta pacífica que complementa la resistencia no violenta y contribuye a su éxito (Díaz 2015; Mouly y Garrido 2018; Masullo, Mouly y Garrido 2019).

Varios testimonios de los entrevistados señalan que en principio y de manera aparente la guerrilla de las FARC respetaba la autoridad en esta comunidad, aunque en muchas ocasiones hubo discusiones ya que este grupo armado amedrantaba a la población aduciendo que sus integrantes colaboraban con otros grupos armados, o simplemente porque querían ejercer su propia autoridad en el territorio. Varios líderes fueron declarados “objetivo militar” luego de hacer pronunciamientos que no gustaron a la guerrilla. Tal es el caso de Dalia Mina, quien habría dicho que la comunidad de Yurumanguí se había declarado “un actor neutral en el conflicto” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Para los yurumanguireños, si bien eran una comunidad ‘neutral frente al conflicto’, eso significaba que eran sobre todo autónomos, es decir, no apoyaban a ningún grupo armado, legal o ilegal y tenían un proyecto político propio, una forma de relacionamiento con la naturaleza desde el cual hacían respetar su territorio, su vida, sus prácticas y forma de concebir el mundo (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Ahora bien, estas estrategias aportaron a la paz territorial en la medida en que le permitió a la comunidad generar confianza, fortalecer su autonomía y su proyecto político propio. Esto se vio reflejado años más tarde, después de la firma del proceso de paz, cuando la comunidad volvió a enfrentar la violencia armada. En el año 2019, los líderes del territorio tuvieron que convocar una mesa de diálogo entre la columna Jaime Martínez (grupo disidente de las FARC) y las autodenominadas “Fuerzas Urbanas del Pacífico”, un grupo armado nuevo que comenzaba a hacer presencia en el territorio. Dos diálogos fueron posibles en el 2019. El primero permitió generar un acercamiento y persuadir a los grupos armados de sentarse a la mesa. Así, permitió que de manera separada los grupos armados aceptaran participar en un diálogo con la comunidad.

El segundo fue específicamente para exigir el respeto a la autonomía del territorio por parte de ambos grupos. Un líder comunitario narró esta experiencia:

Había enfrentamiento entre ellos y los hacían en medio de la comunidad. Entonces les dijimos dos cosas: “si usted dice que son subversivos, que están combatiendo la misma injusticia del Estado, ustedes ¿por qué tienen que pelear entre ustedes?, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Nosotros podemos prestarnos como facilitadores para que ustedes se sienten a dialogar” y eso lo hicimos. Fuimos donde el uno, con todo y su temor, y así fue [...] ambos llegaron y cada uno dejó sus armas a un lado para dialogar (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

En el análisis del caso que aquí se desarrolla, se puede observar cómo este proceso de resistencia se ha mantenido no violento desde 1991. A pesar de la escalada del conflicto armado y los momentos álgidos y de crisis en el territorio, esta resistencia ha seguido siendo ‘pacífica’. Esto ha sido posible, entre otros factores, por la convicción de la comunidad de que deben actuar de forma no violenta. En palabras de un líder comunitario, “Nosotros nunca pensamos o dijimos que para esta lucha hay que tener armas, NO, nosotros tenemos argumentos, palabras”¹⁷. La comunidad ha estado consciente de que las luchas de los grupos guerrilleros han tenido objetivos similares a las de la comunidad, pero los métodos han sido y siempre serán distintos. Así, desde la perspectiva de la comunidad, “nuestra arma es la palabra, es el diálogo, es la organización”.

2.4. Hacia una soberanía alimentaria, desde la economía solidaria

También fue necesario que las comunidades desarrollaran estrategias para resistir al confinamiento al que se vieron obligadas a raíz del conflicto armado. Cuando no se les permitía salir del territorio, o cuando hacerlo implicaba un riesgo inminente, tenían que producir sus propios alimentos en un sentido de soberanía alimentaria. Esto podría ser visto como una táctica de intervención no violenta (Masullo 2015). La comunidad entendía que resistir implicaba producir para su subsistencia. Pero, ir a hacer sus labores agrícolas, de pesca, etc. significaba arriesgarse a encontrarse con cualquier grupo armado. Durante algún tiempo hubo temor y estas prácticas que eran constantes poco a poco se complejizaron. Frente a eso, algunas familias decidieron conformar grupos para sembrar y cultivar de manera colectiva.

¹⁷ Mi río Yurumanguí. Película completa (2019) véase en: <https://www.youtube.com/watch?v=OI3ARXQrywk&t=2431s>

El carácter colectivo de la labor brindaba seguridad, ya que tomaba sentido la idea de que “la unión hace la fuerza”, y a través de esta estrategia, se vitalizó el principio de solidaridad en el marco de lo que se conoce como ‘la mano cambiada’. Ambas estrategias visibilizan la forma en que se articularon las dimensiones político-organizativa y sociocultural del proceso de resistencia noviolenta. No obstante, se reconoce que esta estrategia no fue lo suficientemente fuerte, e incluso en la actualidad las comunidades a través de sus líderes son conscientes de la necesidad de desarrollarse en términos de soberanía alimentaria. Convencidos de esta necesidad, avanzaron en la construcción de proyectos que les permitieran desarrollarse. Sin embargo, recibieron un acompañamiento por parte de entidades gubernamentales que les brindara los recursos necesarios para aportar a este proceso de construcción de paz en el territorio.

Siendo Yurumanguí un territorio rural, su población ha vivido en condiciones de exclusión y marginación social. Esto significa que pese a los derechos que reconoce la constitución política del país, los pobladores no han podido satisfacer plenamente sus necesidades básicas tanto individuales como colectivas. Así, se han visto llamados a desarrollar estrategias no solo en busca de reducir la violencia directa y cultural que en el marco del conflicto armado se da en sus territorios, sino también la violencia estructural. Los yurumanguireños han tenido que generar alternativas para reducir la violencia estructural a partir de la creación de instituciones autónomas y formas propias de subsistencia, avanzando así en el fortalecimiento de su autonomía. Han fomentado una paz positiva promoviendo el cambio, la justicia y el desarrollo social y comunitario (cf. Mouly 2021).

2.5. Estrategias de divulgación: De lo individual a lo colectivo

En el complejo río de hostilidades en que se encontraba la comunidad de Yurumanguí durante la primera década del siglo XXI, como se ha visto hasta el momento, se llevaron a cabo distintos tipos de estrategias noviolenta para resistir al escenario de conflicto armado. A menudo las realidades que vivieron las comunidades en el marco del conflicto armado exigieron que se transformasen y se reinventasen diversas formas con sus prácticas de la vida cotidiana. Estas situaciones complejas se convirtieron en oportunidades.

Dado el riesgo inminente de los líderes del territorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó algunas medidas cautelares. Uno de los recipientes de este tipo de medidas fue Naka Mandinga (desde el 2004 al 2013), a quien se le asignó una lancha con motor fuera de borda, un chaleco antibalas y un teléfono satelital. Este último fue utilizado como una herramienta de comunicación desde la cual se informaba sobre la realidad que se vivía en el territorio. De acuerdo con un integrante de la comunidad,

Se utilizaba ese teléfono para llamar al ministerio del Interior cuando había riesgos inminentes contra la comunidad, también en su momento para llamar a la comandancia de las fuerzas militares cuando había actos de la fuerza pública que también lesionaban nuestros derechos como, por ejemplo, la fuerza pública instalaba su barco en la desembocadura del río Yurumanguí, y cualquier persona que fuera entrando con una remesa, por decir algo de más de dos o cuatro arrobas de arroz, se la decomisaban porque supuestamente era para llevarla a la guerrilla (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Es posible ver como elementos de protección individual que fueron asignados a líderes del territorio se convirtieron en herramientas colectivas para denunciar la realidad de la comunidad, para activar alertas tempranas y movilizar recursos externos a fin de convocar el apoyo de las instituciones estatales, pero también de medios de comunicación y otras organizaciones. Por otro lado, también se desarrollaron estrategias ‘externas’, denominadas así por su carácter vinculante de otras organizaciones y particularmente porque fueron fuente de divulgación (hacia fuera) más que de protección hacia adentro. Entre ellas se encuentra la emisión de alertas tempranas por parte de la oficina del Proceso de Comunidades Negras tanto a nivel local como nacional. El desarrollo de alertas tempranas fue una práctica estratégica que tomó fuerza por cuanto permitió visibilizar la realidad de la comunidad de Yurumanguí ‘hacia afuera’. Al respecto es importante mencionar que, para este caso, los miembros de la organización del PCN hacían parte o tenían vínculos directos con la comunidad de Yurumanguí, lo que significa que de alguna manera era (en parte) la misma comunidad quien desarrolló la estrategia que permitió la movilización de medios de comunicación, activistas, académicos entre otros, que se sumaban a la

causa haciendo llamados de atención al Gobierno nacional y las organizaciones internacionales para que miraran y tomaran acciones frente a lo que estaba ocurriendo en la comunidad.¹⁸

Por otro lado, el líder Naka Mandinga participó en múltiples escenarios académicos en países como los Países Bajos y España, entre otros, donde dictó conferencias y charlas en las que hablaba de la situación que vivía Buenaventura y particularmente Yurumanguí. En principio, las amenazas de muerte hicieron que este líder saliera del territorio, es decir, se desplazara fuera de Yurumanguí, pero permitieron divulgar la situación de la comunidad. Su rol en el extranjero fue fundamental para ganar el apoyo de organizaciones internacionales y académicos. Sus acciones permitieron que se volcara la mirada de la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos hacia Yurumanguí, lo cual fortaleció el proceso que se seguía desarrollando en el territorio (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Estas acciones estratégicas permitieron que Yurumanguí contara con más aliados. Dicho apoyo es clave porque, tal como lo plantean Mouly y Garrido (2018) en su investigación. Los actores externos (en este caso las organizaciones, los académicos y demás que apoyaron el proceso de resistencia no violenta de la comunidad) pueden contribuir al éxito de un proceso de resistencia no violenta. Algunos aliados del proceso fueron clave como red de apoyo a través de la publicación de artículos, libros y producciones audiovisuales que tienen el aval de la comunidad. Estas formas de difusión permiten lo que Gene Sharp denomina el “rechazo a la autoridad” a través de “literatura que promueve la resistencia” (Masullo 2015).

Los esfuerzos de esta comunidad fueron importantes no solo porque marcaron un precedente en la forma en que se desarrollaban los procesos de resistencia no violenta a nivel local y nacional, sino particularmente porque les permitió fortalecerse desde la dimensión político-administrativa y sociocultural. Es decir, bien podría entender este proceso como un espiral, por cuanto constantemente se fue nutriendo, fue creciendo y evolucionando, sin dejar de girar sobre su eje o

¹⁸ En el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a varias comunidades de Colombia, incluyendo Yurumanguí. Véase: <http://www.cidh.org/medidas/2002.sp.htm> (última consulta: 3 de julio de 2021).

Solicitud de apoyo para Yurumanguí: <https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/colombia-harassment-and-fear-of-massacre> (última consulta: 10 de octubre de 2021).

punto de referencia. No ha sido un proceso lineal, ni mucho menos acabado. Este proceso de resistencia civil que se ha consolidado a través de los años desde múltiples acciones estratégicas es un referente para Colombia porque en el marco del posacuerdo esta comunidad ha seguido resistiendo a nuevos actores armados.

3. Proyecto “comunidad escuela”

En el análisis sobre el proceso de resistencia no violenta que ha tenido lugar en Yurumanguí, se destaca un último factor importante: el fortalecimiento de las bases. Para la comunidad, ha sido fundamental que exista un proceso desde el cual se fortalezcan las bases o se configuren nuevos liderazgos, en sinergia con las acciones estratégicas que se han analizado. Es así que encontraron en el proyecto ‘comunidad escuela’ un camino idóneo no solo para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del proceso sino sobre todo para empoderarla. Esto es importante porque a menudo la escuela es vista como un espacio físico cuyo objeto es la enseñanza, la alfabetización. Pero para los yurumanguireños, la escuela es un entorno comunitario y la comunidad es en sí misma una escuela. El enfoque de etnoeducación, a partir de la ley general de educación de 1994, permitió que las comunidades desarrollasen una educación con pertinencia cultural, es decir, teniendo en cuenta elementos de la cosmovisión y la tradición local. Cuando se abrió la institución educativa Esther Etelvina Aramburo, siendo Berarno Caicedo el rector, se comenzó a tejer un proceso sobre cómo resolver conflictos desde lo comunitario y eso fue clave para comenzar a pensar la relación comunidad-escuela. Lo que plantea esta estrategia es que, en esencia, la escuela no son cuatro paredes, sino que es todo el territorio. Así lo deja ver un líder:

La escuela es todo el río porque los procesos de aprendizaje se dan en todo el río, en la playa, en el monte, en la casa del vecino, en la comunidad. Papá y mamá son educadores, es decir los muchachos aprenden en todos los escenarios. Y entendimos que el proceso de aprendizaje se da en toda la cuenca y que no sólo se aprende en la escuela, sino que aprenden también de los mayores. Por decir algo, de ellos se aprende cómo hacer una canoa, cómo hacer cacería o cómo hacer una batea, y esos son elementos de identidad nuestra, y eso no lo enseñamos en el colegio propiamente (LC11, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Esta concepción de comunidad escuela ha permitido que desde el escenario educativo formal se logren articular estrategias para fortalecer las bases, el proceso organizativo y de resistencia

noviolenta. A la luz de esta reflexión, se ha incluido en el pensum académico de la institución una materia optativa denominada “Desarrollo comunitario” que tiene dos líneas centrales. La primera es lo que denominan el tema organizativo y la segunda es el tema productivo (o de emprendimiento). Lo que se hace a través de esta estrategia es llevar el conocimiento ancestral y los saberes al aula de clase. Se enseña de manera constante a los jóvenes del territorio la historia de sus organizaciones (qué son, cómo surgieron, por qué son importantes, cuáles son los espacios de representación, cuál es el proyecto político, etc.), preparándolos para que sean los futuros líderes. A la par, desde una lógica práctica, se les enseña a hacer katanga¹⁹, canoas, a conocer las plantas con propiedades medicinales, etc. (LC11, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).²⁰

En concordancia con esta estrategia, se crearon los comités de sabedores y conocedores del río Yurumanguí. En 2021 existía un comité en cada comunidad-escuela y estaba conformado generalmente por siete personas con trascendencia en la comunidad, que poseen conocimientos empíricos, culturales y ancestrales. De la mano con docentes y administrativos de la institución, el comité se encarga de dinamizar un proceso de enseñanza desde el conocimiento ancestral, llevando a sabedores al salón de clase, pero también evaluando a jóvenes desde aquello que se entiende por desarrollo comunitario. Esta evaluación representa un 10% del total de la asignatura y se hace a partir de criterios que los mismos sabedores han desarrollado (ver anexo 1). Toda esta estrategia nació a partir de un proceso de reflexión y concertación entre autoridades étnico-territoriales, la escuela y la comunidad en general, y generó inspiración en los jóvenes, como lo cuenta un poblador:

Tenemos muchos jóvenes que queremos emprender en el proceso organizativo del territorio. Como quien dice, queremos ser los que vamos a relevar a los líderes que hoy están y para poder lograr eso, nos formamos desde la escuela. Participamos en talleres y poco a poco vamos pidiendo participación a la junta del consejo comunitario y APONURY (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021).

¹⁹ La katanga es un instrumento tradicional que sirve para pescar.

²⁰ Durante el trabajo de campo fue posible constatar cómo los niños, niñas y jóvenes desarrollaban distintos tipos de habilidades en relación con su entorno de vida. Algunos de ellos construyeron ‘guasaperos’, los cuales son herramientas para ‘atrapar’ guasapos, una especie de camarón. Para mayor referencia sobre esta práctica, véase: <https://www.youtube.com/watch?v=ZFNho-PpVQI> (última consulta: 10 de Octubre 2021).

Con estas acciones que son estratégicas, la comunidad de Yurumanguí impulsó un proceso educativo que inspira a los jóvenes. Es un proceso que los pobladores conciben como ‘integral’ porque articula múltiples elementos identitarios y porque, en articulación con otras acciones como talleres, conversatorios, charlas, encuentros deportivos y reuniones, se fortalecen las bases, lo cual es fundamental para sostener un proceso de resistencia no violenta. Además, las iniciativas educativas alternativas son una forma de programa constructivo que permite reforzar la autonomía de la comunidad y combatir la violencia cultural (Giménez 2017; Koefoed 2017; Mouly 2021). Estas acciones cotidianas de resistencia no violenta es lo que los académicos definen como acción no violenta rutinaria (Masullo 2015; Hallward, Masullo y Mouly 2019) Ahora bien, dentro de la escuela se han construido grupos que son estratégicos porque involucran tanto a estudiantes como egresados de la institución. El grupo ecológico por ejemplo es un espacio donde los jóvenes pueden participar y que fortalece valores comunitarios, desarrollan más el sentido de pertenencia por el territorio (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Estas estrategias van de la mano con la implementación de escuelas de formación de liderazgos en el territorio. A nivel regional se construyó desde el año 2011 la “Escuela de formación política étnico popular del pueblo negro Naka Mandinga” que albergaba participantes de distintos lugares del país. De manera intermitente desde la dimensión político-organizativa se construyeron escuelas de formación local. Sin embargo, no ha sido posible implementarlas de manera permanente. La escuela de formación local sigue estando en proceso de construcción (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021).

El rol de la escuela ha sido fundamental para el proceso de resistencia no violenta, en principio porque no está desligada de la dinámica territorial, sino que articula elementos de la identidad, del contexto y la realidad propia que permite fortalecer las bases. Esto se explica en principio porque existe un proyecto claro sobre qué quiere la comunidad. Los docentes no son propiamente actores externos del proceso. En parte, muchos de ellos son hijos e hijas del territorio que también tienen una conciencia colectiva. Ante que todo, son líderes, lo que explica que existan estrategias de este tipo, pensadas por la comunidad y para la comunidad.

4. Estrategias de resistencia no violenta: “Soy yurumanguireño de respeto, no siembro ni cultivo coca”

“El cultivador de la coca no sale de la miseria”

Naka Mandinga, 2007

A finales de los 90, ya había presencia de grupos armados en el territorio, particularmente en la zona del Naya que colinda con la última comunidad de Yurumanguí, la comunidad de Juntas. Es así que los yurumanguireños, teniendo como referencia las experiencias de otras comunidades que se habían visto inundadas por los cultivos de coca y se habían fracturado en términos organizativos y comunitarios, decidieron por primera vez en asamblea general declararse un territorio “libre de cultivos ilícitos, libre de minería pesada y libre de monocultivos” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Lo hicieron aun sin haber recibido un título colectivo que reconociera ‘legalmente’ su derecho a la propiedad de la tierra.

Esto es interesante porque en el caso de la minería, por ejemplo, quienes querían explotar este recurso se apoyaban en grupos armados no estatales para presionar a los líderes comunitarios de forma a que permitieran la entrada de maquinaria pesada para la extracción de oro. Un poblador así explicó:

Los mineros, los de la retroexcavadora, ellos primero se apoyaron en la subversión. La guerrilla de las FARC que hacía presencia fue la que me llamó y dijeron vea es que tenemos unos amigos que quieren traer una retroexcavadora para acá y sacar todo ese oro que está aquí en Yurumanguí y darle vida a este territorio. Con ese oro se van a construir escuelas, puestos de salud, todos los servicios que ustedes necesiten (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Claramente la negativa de los líderes generó un malestar en este grupo armado por cuanto sus intereses se veían afectados. Para los grupos armados no estatales, el cobro de impuestos a este tipo de actividades e incluso la extracción propia al servicio de la causa a través de terceros ha permitido obtener recursos económicos para sostener su lucha. Esto significó que varios líderes del territorio fueran acusados de no querer ayudar a la comunidad porque no permitían que llegaran las oportunidades y ‘el desarrollo’. Además, se les tildó de traidores por no apoyar la causa e inclusive de colaboradores de otros actores armados.

En el año 2007 un actor armado decidió, por encima de la decisión de la comunidad, plantar en el territorio de Yurumanguí un total de 25 hectáreas de cultivo de coca. Esto significó una amenaza a la autoridad de la comunidad y al territorio en sí mismo. Conscientes de lo que significaría permitir el cultivo de coca en el territorio, los yurumanguireños desarrollaron una estrategia de resistencia no violenta que marcó no solo el rumbo de la comunidad, sino que generó un precedente importante para el país. El 9 de noviembre del 2007, alrededor de 300 yurumanguireños se organizaron para hacer jornadas de erradicación manual del cultivo de coca. Un poblador recuerda: “hemos decidido que dentro de la cuenca del río Yurumanguí no vamos a dejar sembrar coca [...] no para los usos ilícitos, no para el clorhidrato de cocaína porque esto daña todo el tejido social” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). De la misma forma, en el documental “Río Yurumanguí, un líder dijo: “Como esta es nuestra casa, teníamos que limpiarla”.²¹

Esta acción estratégica no violenta de erradicación manual impulsada desde las autoridades locales duró alrededor de tres días. Pese a los múltiples llamados solicitando apoyo a los gobiernos nacional, regional y local, la comunidad no recibió ninguna respuesta positiva, por lo que asumió todos los recursos económicos, humanos, logísticos, de alimentación, hidratación, transporte, etc. Lo hizo por dos razones primordiales. Primero, existe una conciencia colectiva del daño que causan a corto, mediano y largo plazo los cultivos de uso ilícito en el territorio. Segundo, entienden que las estrategias de erradicación forzada a través de las fumigaciones de glifosato que impulsa el Gobierno colombiano afectan a sus cultivos de pan coger y también a su salud. Por tanto, no son idóneas porque constituyen una amenaza para el territorio. Un líder comunitario narró esta experiencia en sus palabras:

Miramos cómo iba creciendo la amenaza de poder implementar cultivos de uso ilícito y Yurumanguí era el único territorio para ese entonces de Buenaventura que no tenía cultivos. Pero entonces la amenaza fue creciendo, foráneos utilizando gente nuestra como que era la alternativa económica, como que era la solución a todo el problema a resolver las necesidades básicas insatisfechas. [...] Logramos identificar que se habían establecido unas hectáreas. Entonces, la comunidad, por dirección de su junta de gobierno que es APONURY y la junta de Consejo

²¹ Mi Río Yurumanguí, película completa 2019, min 42,20.

comunitario, define hacer una erradicación autónoma, manual (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

Otro poblador, igualmente, explicó la perspectiva de la comunidad sobre el tema de los cultivos ilícitos:

De nuestras prioridades es mostrarle al Gobierno colombiano que las comunidades pueden erradicar los cultivos ilícitos del territorio sin necesidad del glifosato. El glifosato es perjudicial. No lo necesitamos. No necesitamos ejército que venga a erradicar. Mire toda esta población que está aquí. El gobierno comunitario orientó que debíamos erradicar esto para el beneficio de nuestras comunidades, de las futuras generaciones y de la humanidad en general.²²

En la actualidad, el río Yurumanguí es uno de los pocos del Pacífico que no tiene rastros de mercurio ni cianuro y en el cual no se ha permitido la entrada de maquinaria pesada. Esto ha sido posible gracias al mandato de la asamblea comunitaria que declaró el territorio libre de cultivos ilícitos, de palma de aceite y de maquinaria pesada. El “soy yurumanguireño de respeto” paso de ser una campaña contra los cultivos de uso ilícito y se convirtió en un símbolo de unidad, de lo comunitario. A la fecha de hoy, hace parte de la identidad de la comunidad y persiste en el sentir y el vivir de cada niño, joven o adulto que habita en el territorio.

²² Mi río Yurumanguí, película completa 2019, min 3,15.

Tabla 2. Acciones de resistencia no violenta

Año	Acciones de resistencia no violenta.
1991	Se sanciona el artículo transitorio 55 que brinda un carácter diferencial étnico.
1992	Se crea APONURY el 21 de enero.
1993	Ley 70 por la cual se reconoce derechos territoriales a las comunidades negras.
1995	Decreto 1745 por el cual se reglamenta el cap. III de la ley 70 del 1993
2000	El 23 de mayo se oficializa el título colectivo del CCY.
2001	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de estrategia de nuevo cimarronaje para proteger la vida de los actores armados en el territorio. - El CCY realizó alerta humanitaria ante el parlamento europeo solicitando medidas de protección para su comunidad.
2002	<p>La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades negras de los ríos Naya y Yurumanguí por la presencia de las AUC en el territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandato asambleario rechaza cultivos de coca, monocultivos y minería ilegal en Yurumanguí. - 2002-2005: Nombramiento de mujeres como representantes legales del CCY.
2003	La Comisión Europea otorga medidas cautelares a Naka Mandinga
2004	Creación del transporte fluvial “APONURY” como forma de tener autonomía de desplazamiento por el río
2005	<ul style="list-style-type: none"> - Rescate y conservación de la medicina tradicional y uso de plantas ancestrales. - Programa de etnoeducación promovido por APONURY. - CCY dialoga con las FARC para negociar su salida de las zonas comunitarias. - Movilización CCY por la paz y defensa del territorio.
2007	<ul style="list-style-type: none"> - El PCN lidera activación de la ruta étnica como estrategia de protección de sus derechos territoriales - Minga de erradicación manual de 27 ha de coca sembradas en el territorio.
2009	<ul style="list-style-type: none"> - Yurumanguí es declarado caso emblemático por la magnitud de sus hechos (auto 005 de 2009) - Intento de reconstruir la vereda El Firme.
2010	<p>Acompañamiento humanitario de organizaciones defensores de DDHH (solidaridad minga y ACNUR).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2010 – 2014 : Mucha organización colectiva, asambleas generales del CCY y capacitación a la comunidad en DDHH

2014	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilización a la comunidad sobre minería ilegal. - Se instaura demanda de restitución de tierras. - 2014-2015: Creación del documento de afectaciones del CCY en el marco del conflicto, realizado por la U. Javeriana.
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Asamblea del buen vivir: ratificación del mandato que rechaza los cultivos ilícitos, la minería a gran escala y la presencia de actores armados. - Fortalecimiento del liderazgo político y organizativo del CCY y APOURRY. - Reconocimientos como mejor organización del país por parte de la revista semana.
2017	<p>Promulgación de la sentencia 76-111-31-21-003-2015-00053-01 de restitución de tierras a favor del CCY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se promulga el documental “mi río yurumanguí” realizado por U. Javeriana.
2018	<p>Segunda jornada de erradicación de cultivos ilícitos llamada “Rondas por la vida”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posicionamiento del proyecto político del CCY.

Fuente: Datos tomados del trabajo de campo y del Baúl de la memoria histórica del río Yurumanguí, 2021.

4. Aportes a la paz en el territorio

Como se ha discutido en el capítulo anterior, el concepto de ‘paz territorial’ ha sido desarrollado desde varias dimensiones. Por un lado, se encuentra la idea de que es necesario llevar las instituciones estatales a los territorios, remediar la falta de atención de la que han padecido las comunidades marginadas en Colombia para garantizar el respeto de sus derechos (cf. Jaramillo 2014). Esta dimensión procura la participación de las comunidades en alianza con el Estado a fin de construir de manera conjunta la institucionalidad en el territorio. Por otro lado, los críticos consideran que esta perspectiva de llevar las instituciones estatales al territorio reproduce el modelo de paz liberal y, pese a que involucra a las comunidades bajo ciertas condiciones, de fondo no se priorizan las necesidades y realidades de la población local. Por tanto, según algunos académicos, es necesario replantear, dar relevancia a las dinámicas comunitarias propias, sus prácticas y sus formas de ver la paz (Donais 2011; Mac Ginty 2016; Zubiría 2016; Bautista 2017).

No obstante, esta discusión deja de lado algunos elementos importantes que devienen de recrear la práctica en las comunidades. En Yurumanguí, esta noción de paz territorial es vagamente asimilada, pero fuertemente desarrollada. El ejercicio de campo da cuenta que no existe una claridad en términos conceptuales porque para la comunidad, sus estrategias, sus prácticas y sus

procesos no contribuyen a una “paz territorial”, sino que les permite vivir en paz en el territorio (en mayor o menor medida). Es así que perciben que la ‘paz territorial’ es una categoría desde la cual se busca encajar la práctica comunitaria, por un lado, y justificar acciones institucionales, por el otro. Esto significa que, pese a los múltiples intentos por ‘territorializar’ el discurso, sigue existiendo una manta que cubre la dimensión de lo que implica tanto la paz, como el territorio para las comunidades.

Este caso, por tanto, muestra que no basta con replantear el discurso para intentar categorizar una práctica que existe en las comunidades. Es necesario construir sobre la base de lo comunitario, en lugar de justificar acciones institucionales en el territorio que muchas veces van en contra o ignoran las dinámicas propias de quienes habitan los territorios. Revela la importancia de promover escenarios que permitan reconocer estas prácticas comunitarias de construcción de paz y fortalecerlas. Esto es lo que las comunidades de Yurumanguí llaman “el reconocimiento de la autonomía territorial”. Es por esta razón que esta investigación se refiere al proceso de resistencia no violenta de la comunidad de Yurumanguí como un proceso que contribuyó (y sigue contribuyendo) a que haya ‘paz en el territorio’, una paz que de acuerdo con Muñoz (2010) es imperfecta, pero que a todas luces ha sido fundamental para que las comunidades persistan, se mantengan y disfruten su espacio de vida.

Así, las estrategias de resistencia civil impulsadas por la comunidad de Yurumanguí permitieron a los pobladores mitigar algunos tipos de violencia y en ciertos momentos vivir en paz. Pero ¿qué significa vivir en paz para estas comunidades? Los yurumanguireños entienden la paz desde varias dimensiones. Ésta implica la garantía de derechos tanto individuales como colectivos. Significa que los pobladores puedan vivir dignamente, que logren desarrollarse y tengan acceso a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda digna, etc. La paz es, en palabra de uno de ellos,

(...) poder disfrutar libremente del río, de las playas, de nuestro territorio, poder salir libremente a hacer nuestras labores de pesca, caza, a cualquier hora sin temor de encontrarnos algún grupo armado, pero también es tener la posibilidad al otro día de levantarme e ir a una universidad o ir a

una empresa a trabajar con condiciones dignas (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021).

Por otro lado, la paz procura todos los elementos de la naturaleza, no solo los seres humanos sino todos los seres que habitan el territorio. Para los yurumanguireños, es importante que los ecosistemas puedan auto regenerarse, ya que “si se acosa demasiado, no se permite su ciclo de regeneración autónoma y es una agresión contra la naturaleza” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Esto significa que la paz es también el respeto por la cosmovisión, por un modelo de desarrollo comunitario y por la autonomía. Ésta es la paz cotidiana que han buscado construir los yurumanguireños en función de su contexto y su cosmovisión.

Estos aportes a la construcción de vivir en paz en territorio se pueden entender desde las nociones de paz cotidiana y paz imperfecta entre 1998 y 2015. Las comunidades a través de su proceso de resistencia pudieron garantizar su permanencia en el territorio, el goce de lo comunitario y de las bondades de la naturaleza como parte de su cosmovisión. Pero siguieron abrumadas por la violencia estructural y, a la fecha de esta investigación, por la violencia directa generada por nuevos actores armados que incursionaron al territorio luego de la firma del acuerdo de paz de 2016. El trabajo de campo da cuenta de nuevas formas de estructuración y reorganización de grupos armados, lo que ha significado que se asienten en medio de la población y convivan entre la comunidad, a veces incluso de civiles. El 28 de noviembre de 2021, dos líderes fueron desaparecidos por un grupo armado, y al momento de esta investigación no se sabe sus condiciones ni ha habido un pronunciamiento oficial que dé razones de su desaparición. La comunidad llena de angustia se organizó; los pobladores hicieron marchas, pronunciamientos, vigiliyas y otras actividades pidiendo el retorno de sus líderes (Cortes 2021).

Los académicos que han abordado el tema de la resistencia civil y del giro local en la construcción de paz dan luces para entender que estos procesos de resistencia no violenta son en esencia “propuestas de construcción de paz, mecanismos de transformación de la realidad (...) y un espacio generador de paces imperfecta” (Hernández 2009, 143). Generalmente, las comunidades que desarrollan procesos de paz desde abajo son aquellas que se han visto inmersas en conflictos armados, por lo que, como es el caso de Yurumanguí, construyeron un proceso de

resistencia no violenta. Estas formas de resistencia civil desde las comunidades han permitido la apropiación local del proceso de construcción de paz, lo cual es fundamental para su éxito y sostenibilidad (cf. Donais 2011).

Las estrategias de resistencia no violenta desarrolladas por la comunidad de Yurumanguí contribuyeron desde varias aristas a que ésta pudiera construir paz en el territorio, particularmente en los momentos álgidos del conflicto armado interno. Crear organizaciones territoriales, dinamizar las prácticas culturales en medio del conflicto armado, mantenerse en el territorio, construir planes de contingencia, dialogar con los actores armados, erradicar cultivos de coca, declararse un territorio libre de minería pesada, coca y monocultivos, demarcar el territorio, fortalecer las bases, avanzar en la soberanía alimentaria y articular un proyecto de comunidad-escuela fueron indispensables para que los yurumanguireños siguieran existiendo como comunidad y pudieran preservar la vida, la identidad y el territorio, es decir, su autonomía. En palabras de uno de ellos,

Hemos sido una comunidad de paz. Hemos construido desde nuestras prácticas culturales y ancestrales. Hemos interactuado con el territorio de manera pacífica, lo hemos cuidado. Hemos fortalecido nuestros valores y principios de solidaridad. Cuando hemos tenido amenazas y conflictos, especialmente el conflicto armado, hemos tramitado todo eso a través de nuestras autoridades propias. Todo esto son insumos, son aportes para la construcción de esa paz territorial (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

Por otro lado, los escenarios de guerra se caracterizan por una disputa constante por ejercer autoridad en el territorio. En lugares donde el Estado no ejerce ningún tipo de autoridad, los grupos armados no estatales suelen asumir esa labor. Sin embargo, no ocurrió en el caso de la comunidad de Yurumanguí debido a que su capacidad organizativa le permitió posicionarse como máxima autoridad del territorio. Desde su proceso organizativo, logró ‘sustituir’ la falta de autoridad del Estado y contener el poder de los grupos armados no estatales que querían ejercer su control sobre la población.

Estos elementos contribuyeron a que la comunidad pudiera mantenerse y construir escenarios de paz, pero esto no de manera permanente. En efecto, se trata de una paz imperfecta, mientras siga

existiendo un interés de parte de ciertos actores por cultivar coca y hacer minería en el territorio. Mientras no se adopten medidas adecuadas por parte del Estado colombiano, “vivir en paz en el territorio” seguirá siendo una ilusión. Según un entrevistado, estas medidas de parte del Estado deben reconocer las dinámicas propias de las comunidades, en lugar de enjuiciar a sus líderes por desarrollar diálogos que les permiten mantener un entorno de protección (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Yurumanguí es una comunidad que está abierta a dialogar con el Estado. Los líderes comunitarios consideran que para alcanzar paz es necesario que se reconozcan y se apoyen las estrategias comunitarias que han sido útiles para sobrellevar el conflicto armado, preservar la vida y el territorio. Esto es que se dé un giro hacia lo local. Autores como Leonardsson y Rudd (2015) han recalcado la importancia del papel de los actores locales, sus prácticas y su cosmovisión en los procesos de construcción de paz. La agencia de los actores locales es una necesidad básica y es fundamental para el éxito de los procesos de resistencia no violenta y construcción de paz en el territorio (cf. Hancock 2016). Además, estas experiencias de construcción de paz a nivel local pueden aportar a los procesos de construcción de paz a nivel nacional (Mitchell y Hancock 2012; Mouly y Garrido 2018).

Conclusiones

En este capítulo empírico se ha dado respuesta a la pregunta “¿Cuáles fueron las estrategias de resistencia pacífica utilizadas por la comunidad de Yurumanguí entre 1998 y 2015 y cómo contribuyen a la paz territorial?” Se identificaron dos dimensiones clave del proceso de resistencia no violenta impulsado por la comunidad de Yurumanguí: la dimensión político-administrativa y la dimensión sociocultural. Ambas han subyacido las estrategias de resistencia no violenta de la comunidad.

Estas dimensiones han sido importantes para fortalecer la dinámica comunitaria y avanzar en el proyecto propio de defender y vivir la vida en el territorio. Las primeras expresiones propiamente de resistencia civil que se encontraron en esta investigación surgieron en el marco de la necesidad de luchar por derechos individuales y colectivos. Adquirieron relevancia por cuanto no nacieron en el marco del conflicto armado como tal, pero permitieron configurar un proceso para resistir

de manera no violenta a la violencia armada y la imposición de los grupos armados que hicieron presencia en el territorio y así preservar la vida, la autonomía y el territorio.

Por otro lado, se abordaron distintos tipos de estrategias en relación con diversos momentos de crisis en el marco del conflicto armado. Las masacres, particularmente la de la vereda El Firme en 2001, las amenazas a líderes, los señalamientos de los grupos armados, el hostigamiento por parte de la fuerza pública, el confinamiento, entre otras formas de violencia directa, hicieron que las comunidades desarrollaran acciones estratégicas, como construir planes de contingencia a fin de no desplazarse hacia fuera del territorio, hacer pronunciamientos, dialogar con los actores armados y mediar entre ellos. Además, la formación para el fortalecimiento comunitario fue clave para que las comunidades pudieran ‘vivir en paz’ en el territorio.

Finalmente, se plantearon algunas reflexiones en relación con aquello que se entiende como “paz territorial” ubicando la necesidad de comprender que los procesos desarrollados por la comunidad de Yurumanguí, primero, aportaron a la construcción de una paz imperfecta; es decir, las estrategias aportaron a ‘vivir en paz en el territorio’, pero este siguió siendo un proceso inacabado que se renovaba todos los días conforme fluctuaba la dinámica de conflicto armado. Segundo, esta experiencia reveló la necesidad de que el Estado articulara esfuerzos que fortalecieran estas estrategias comunitarias que han permitido a la población civil de muchos territorios marginados resistir y re-existir en medio del conflicto armado.

Capítulo 3

Las contribuciones de Yurumanguí al proceso de paz en Colombia (2015-2020)

La paz no es solo el silencio de los fusiles,
La paz no es solo un acuerdo firmado,
La construimos todos y todas;
Vivimos en paz y todos los días aportamos a la paz.
Líder de Yurumanguí 2021.

En el capítulo anterior se examinaron de manera detallada las estrategias y tácticas de resistencia noviolenta que tuvieron lugar en la comunidad de Yurumanguí entre los años 1998 y 2015, al tiempo se analizó la forma en que estas estrategias contribuyeron a consolidar un proceso comunitario que permitió a los pobladores vivir en paz en el territorio²³ y les permitió fortalecer la dinámica organizativa que fue indispensable para resistir y re-existir en el escenario de conflicto armado.

En este capítulo, se analiza la forma en que este proceso de resistencia noviolenta y de construcción de paz en el territorio ha nutrido y fortalecido el proceso de construcción de paz a nivel nacional a partir del año 2016, en el marco del acuerdo de paz con la antes guerrilla de las FARC. Se argumenta que las experiencias locales son importantes no solo porque contribuyen a mantener una dinámica organizativa y de paz en el territorio sino particularmente porque su quehacer es la base para pensar y repensar la forma en que se desarrollan estrategias en el espacio macro y lograr así la construcción de paz con pertinencia cultural, acorde a las realidades de las comunidades que viven la guerra. ¿Es posible construir paz sin las víctimas del conflicto armado? Este capítulo hace un llamado a repensar el rol de las comunidades y reconocer su capacidad de agencia.

²³ No significa esto que la comunidad pasó a una etapa de posconflicto o que dejó de vivir en el escenario de guerra. Con ello se hace referencia a la capacidad de los Yurumanguireños de mantenerse en el territorio, desarrollar y fortalecer procesos internos, de autonomía, en los que les fue posible seguir viviendo en comunidad y recrear sus prácticas culturales.

El proceso de paz en Colombia se ha convertido en un referente en el escenario internacional, tanto por el enfoque de las víctimas como centro del acuerdo, como por la creación de instituciones de innovación democrática como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz, la comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Los esfuerzos del Estado colombiano son ejemplo en la comunidad internacional. A más de cinco años después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los avances para garantizar que se generen escenarios donde se piensa, se vive y se construye paz en el país han sido significativos. No obstante, hay quienes cuestionan la falta de “voluntad política” del gobierno colombiano, señalando que es necesario un compromiso permanente para implementar los acuerdos de manera exitosa y promover una cultura de paz (Instituto Instituto Kroc 2021).

De acuerdo con informes del Instituto Kroc en los últimos cuatro años se ha avanzado de manera positiva. Durante el periodo de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, el punto 1 y 5 presentaron mayor porcentaje en términos de inicio de implementación de disposiciones. El punto 4 fue el que mayores disposiciones completó en el tercer año consecutivo y los mayores regazos se presentaron en el punto 2 (Instituto Instituto Kroc 2021). Al respecto, el informe Kroc señaló la necesidad de que los compromisos a largo plazo avanzaran con mayor premura para lograr paso a paso el cumplimiento de los mismos. (Instituto Instituto Kroc 2021).

Al igual que los diálogos de paz que iniciaron en el 2016, la implementación de los acuerdos de paz en Colombia avanza en medio de un escenario hostil y desafiante que está marcado por la violencia provocada por los actores armados en varios lugares del país, la constante puja de las economías ilícitas, la polarización política y la pandemia de Covid-19. El año 2020 fue particularmente desafiante en tanto presentó dos elementos relevantes. El primero, hubo una persistencia de la inseguridad en múltiples territorios del país, lo que se tradujo en ataques continuos hacia firmantes de la paz en proceso de reintegración y un incremento de amenazas y homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y ambientales (Instituto Kroc 2021). Segundo, el escenario de pandemia de Covid-19 produjo grandes restricciones a la movilidad, lo que evidenció por un lado la inequidad y la vulnerabilidad en los territorios y por el otro la capacidad de resiliencia de las comunidades (Instituto Kroc 2021).

No obstante, de acuerdo con el Instituto Kroc (2021) durante los dos primeros años de la implementación del acuerdo se logró consolidar gran parte de las responsabilidades asumidas a corto plazo. En el tercer y cuarto año avanzó en “promover la coordinación institucional para adelantar procesos participativos de planeación y garantizar la implementación a nivel territorial” (Instituto Kroc 2021, 9). La desmovilización de las FARC como grupo guerrillero y su posterior transformación en partido político, la creación de planes para la Reforma Rural Integral y la consolidación del sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición (SIVJRNR) fueron sin duda avances muy positivos para el país en la búsqueda incesante de la paz. (Instituto Kroc 2021).

La comunidad internacional ha sido clave en este proceso de implementación de la paz, y ha aportado a través de sus instituciones y los flujos de cooperación para el cumplimiento de las provisiones del acuerdo. Sin desmeritar eso, es importante señalar que el éxito de la implementación del acuerdo y la construcción de paz en el país es en términos de (Paladini 2018) eminentemente endógeno. Este autor plantea que en este escenario se requiere transitar de lo nacional a lo local, promoviendo el diálogo y facilitando la concertación entre instituciones y comunidades (Paladini 2018).

Lo que se quiere decir es que, si bien urge que se desarrollen estrategias que permitan una “mejor coordinación entre los niveles nacional y local”, esta investigación argumenta primero la necesidad de ver el proceso no ‘desde arriba hacia abajo’ como sugieren algunos teóricos de la teoría liberal, señalando una suerte de embasamiento e incluso a veces de imposición. Segundo, destaca la importancia de reconocer los aportes de comunidades como Yurumanguí antes, durante y después de la firma del acuerdo de paz, aportes sin los cuales no es posible pensar la construcción de paz y la transición a un nuevo país.

En ese orden de ideas este capítulo presenta algunos de los aportes que la comunidad de Yurumanguí ha hecho en el marco de la construcción de paz a partir de sus experiencias de resistencia no violenta y construcción de paz en el territorio. Este capítulo se subdivide en cuatro ejes que son: (i) planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), (ii) transformación pacífica de conflictos, (iii) solución al problema de cultivos ilícitos, y (iv) verdad, justicia y reconciliación.

En diferentes dimensiones, cada eje se articula de manera directa con un punto del acuerdo final, de modo que se analiza el aporte que ha hecho la comunidad de Yurumanguí en cada uno de ellos, a la luz de su experiencia de resistencia no violenta y construcción de paz territorial.²⁴

Cada eje se articula de manera directa con un punto del acuerdo final de modo que, se reconocen los aportes a la luz de la experiencia comunitaria en Yurumanguí. Finalmente, se señala la importancia de estos aportes y se desarrollan algunas lecciones derivadas del caso que aquí se desarrolla.

1. Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET)

Los PDET nacieron a partir del punto 1 del acuerdo de paz de 2016, que se refiere a la reforma rural integral. Estos instrumentos de planeación participativa se crearon en el marco del decreto 893 de 2017, y tienen como objeto la generación de cambios estructurales del campo colombiano a quince años, a fin de superar las brechas de desigualdad en la relación rural-urbano. Para alcanzarlo, se priorizaron 170 municipios de 16 subregiones del país²⁵, 1639 núcleos veredales, 306 consejos comunitarios y 452 resguardos indígenas. (Decreto 893 2017).

Las zonas que fueron priorizadas se caracterizan porque presentan una “incidencia de la pobreza multidimensional de 72,8%, mayor al nivel nacional que se ubica en 49,0% según datos del Censo 2005” (Decreto 893 2017, 6). Del mismo modo, de acuerdo con el índice de incidencia de conflicto armado del Departamento Nacional de Planeación “el 67% de los municipios presenta muy alta incidencia del conflicto armado” además, “concentraron el 94,2% de los cultivos de coca, según el censo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI) 2016” (Decreto 893 2017, 13). En la subregión denominada Pacífico medio, se priorizaron los territorios de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Buenaventura. Estos territorios comenzaron un proceso de concertación en octubre de 2017 con la Agencia de Renovación del Territorio, para definir tanto la ruta operativa como la metodológica que se implementaría en el marco de la formulación

²⁴ Esta investigación tiene en cuenta de manera particular los puntos 1, 4 y 5 que refieren a la reforma rural integral, la solución al problema de drogas ilícitas y el acuerdo sobre las víctimas del conflicto respectivamente. No obstante, los insumos encontrados hacen un aporte no solo en relación con el acuerdo de paz en Colombia, sino en términos generales a la forma de construir paz con pertinencia cultural o, como diría Lederach, “paz de arriba hacia abajo”.

²⁵ Cada subregión construye un PDET que se instrumentaliza a través de los planes de acción para la transformación regional (PATR).

del PDET y el plan de acción para la transformación regional (PATR), dando continuidad a lo establecido en el decreto 893 de 2017 y en el capítulo étnico del acuerdo de paz (ART 2017).

La comunidad de Yurumanguí al igual que otras comunidades de Buenaventura, participó activamente en la construcción del PDET de la subregión Pacífico medio. Esta participación fue un aporte importante por varias razones. Primero, porque se construyeron espacios socioestatales que son espacios donde se interrelacionan de manera intencional actores estatales y de la sociedad civil (cf. Isunza 2016) lo que permite un ejercicio de democratización de procesos en los que finalmente las comunidades pudieron tener voz directa y, especialmente, contribuyeron a partir de su experiencia a la construcción de los planes que serían el pilar para lograr la transformación del campo a quince años. Y segundo, ejercieron una incidencia integral mucho más allá de simplemente “decir” o señalar las necesidades que serían priorizadas para alcanzar el bienestar de las comunidades y terminar las brechas de desigualdad en la relación campo-ciudad (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021).

La construcción del PDET se dio de manera escalonada. De acuerdo con lo estipulado por la Agencia de Renovación del Territorio (en adelante ART), comenzaría en las veredas de cada municipio, posteriormente se abrirían espacios de diálogo y concertación a nivel municipal y finalmente tendría lugar un espacio de diálogo subregional entre representantes de todos los municipios PDET en la subregión (Decreto 893 2017). Las veredas de cada municipio fueron organizadas en “grupos veredales” para realizar un ejercicio de pre-asambleas, la conformación de grupos motores y asambleas que permitieron identificar tanto las potencialidades como las prioridades e iniciativas de cada territorio (ART 2017). A raíz de este proceso se construyó un “pacto comunitario para la transformación territorial”. En un segundo momento las comunidades de manera autónoma eligieron a sus representantes o sus delegados para conformar la comisión municipal de planeación participativa. Estos últimos fueron los encargados de definir quienes serían los delegados para conformar la comisión subregional de planeación participativa (ART 2017).

Yurumanguí fue pionera en el desarrollo de las primeras fases de diálogos entre comunidades del mismo territorio²⁶. A través de asambleas comunitarias, se hizo un ejercicio de diálogo con toda la población. La ART desconocía la importancia de las cuencas hidrográficas en esta zona y desconocía la realidad local, lo que dejaba como resultado la construcción de una ruta que sería compleja y sin pertinencia cultural. Esto se acerca a lo que (Baiocchi 2003, 89) denomina “una configuración socio geográfica que plantea obstáculos singulares a la tarea de diseñar una forma de representación popular”. Era desconocimiento institucional del contexto que podía coartar el proceso y, más aún, fracturar la confianza de las comunidades.

Entendiendo que esta propuesta no se ajustaba a las necesidades de las comunidades y por el contrario era concebida como un obstáculo para el pleno desarrollo del ejercicio participativo y representativo en las segundas fases, se generó una nueva propuesta a través de un espacio de deliberación autónomo. Así los pobladores de Yurumanguí construyeron una nueva ruta operativa en concertación con la Agencia de Renovación del Territorio. La ruta fue denominada “ruta operativa tras concertación entre la ART y las comunidades del convenio” (Cartilla Guía, Yurumanguí 2019). La experiencia organizativa de Yurumanguí permitió generar esta propuesta alterna. Esto sugiere que, desde una noción de apropiación local, las comunidades tienen la capacidad de agenciar sus propios procesos y que, por tanto, es necesario reconocer esa capacidad de agencia y generar espacios de construcción y participación colectiva que vayan más allá de aprobar o no propuestas “traídas de arriba hacia abajo”.

No es acertado como lo señala Juan Carlos Zambrano, director de la ART, en entrevista con el espectador, que el grado de incidencia de las comunidades se redujo a decir qué se necesitaba en los territorios (Forero 2019). No hubo una actitud pasiva, las comunidades jugaron un rol activo fundamental, no solo por su capacidad propositiva, sino especialmente porque su capacidad organizativa fruto de un proceso histórico (como se señaló en el capítulo anterior), les dio una ventaja comparativa y permitió posicionar su proyecto de autonomía, que rompe con la visión centralista desde la cual el Estado suele concebir los territorios.

²⁶ Yurumanguí es un territorio que consta de 13 veredas ubicadas a lo largo y ancho del río, por lo que, las reuniones, los encuentros y espacios colectivos requirieron de un tipo de organización, programación y logística distinta a la de otras comunidades en zonas urbanas.

El aporte no se redujo al hecho de construir guías para orientar el PDET. La comunidad de Yurumanguí también puso en discusión un tema estructural; el trato que en términos normativos se da a las comunidades negras en el país. Dos reflexiones interesantes surgieron en este escenario. Primero, se dio un ejercicio de autonomía desde las comunidades, que a partir de un proceso organizativo fuerte incidieron en la agenda estatal, transformando las formas de planificación centralista y, en ese sentido, rompiendo la estructura de poder desde la cual se asume un proceso de construcción “de arriba hacia abajo”. Así lograron establecer un diálogo con el Estado en un sentido de construcción que podría denominarse ‘híbrido’.

Yurumanguí puso en discusión otro tema estructural; la forma en que el Estado colombiano reconoce y se relaciona con las comunidades negras en un sentido normativo, político, social, y geográfico. El artículo 286 de la Constitución política de 1991 establece que “son entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, los cuales conforman los diferentes niveles de organización territorial de la república” (Constitución 1991, artículo 286). Esto significa que las comunidades negras y sus formas propias de organización no están incluidas. Esta ha sido una discusión histórica. En este ejercicio de construcción del PDET la comunidad de Yurumanguí demostró junto a otras comunidades una capacidad organizativa de grandes dimensiones. Entonces por un lado estaba una comunidad con autonomía y capacidad de incidencia desde su proceso organizativo. Y, por otro el Estado que no se reconocía propiamente el derecho de esta población a la igualdad.

El artículo 13 de la constitución política señala la igualdad dentro de la diferencia, lo que quiere decir que ninguna forma de cultura está por encima de otra: “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptara medidas para proteger a los grupos marginados” (Constitución 1991, 2). Colombia ratificó el convenio 169 de la OIT y plasmó su contenido a través de la ley 21 de 199. En razón de eso, este convenio tiene carácter vinculante para el país y tiene implicaciones para el derecho a la consulta de las comunidades negras. Dicho esto, persiste la necesidad de generar condiciones no solo para garantizar la aplicación del convenio sino también que se generen las transformaciones necesarias en la legislación para garantizar el derecho a la igualdad de los pueblos negros y se reconozcan de mejor manera su estatus y capacidad organizativa como se ha hecho con los pueblos indígenas.

Esta discusión es importante porque pone de manifiesto un tema de violencia estructural, en el marco de la implementación del acuerdo de paz de 2016. En efecto, una de las raíces del conflicto armado han sido las grandes desigualdades socioeconómicas, en particular la marginación socioeconómica de las comunidades negras, así como la exclusión política que ha afectado especialmente a los grupos étnicos. Para asegurar la no repetición de los hechos cometidos en el marco del conflicto armado, es menester atender estas raíces, lo cual devela la importancia del reconocimiento de las comunidades negras, una mayor equidad en términos sociales y económicos y una mayor participación política de estas comunidades.

En este escenario, la construcción del PDET fue un espacio que permitió avanzar en la “territorialización del proceso de paz colombiano” (Sánchez y Jiménez 2019) y no solo en términos de implementación de las disposiciones, sino porque, como se ha enunciado con anterioridad, se convirtió en un espacio de reflexión y diálogo en torno a elementos estructurales que son indispensable abordar si se quiere construir paz y promover la no repetición. Estos ejercicios de planeación local, municipal y regional también fueron significativos en la medida que lograron la articulación entre territorios rurales y urbanos. Permitieron a los pueblos negros del pacífico avanzar en un proyecto político regional. Es así que, en el marco del “convenio de fortalecimiento entre el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí y la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES)” que es una ONG de derechos humanos, los consejos comunitarios y organizaciones étnicas de Buenaventura hicieron un proceso de incidencia para concertar la ruta operativa para el desarrollo y seguimiento al proceso de construcción de unos PDET con pertinencia cultural²⁷. Vemos aquí un ejemplo de apropiación local.

El acuerdo de paz de 2016 contempla que los PDET sirvan para avanzar en la implementación del punto 1 del acuerdo. A través de los mismos se buscó generar procesos desde el territorio, para subsanar las causas estructurales del conflicto armado y se cerraron las brechas en términos de derechos y desigualdades latentes en la relación campo-ciudad. La construcción e

²⁷ El documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Participación y Reparación colectiva de las Víctimas ejecutado por CODHES en cooperación con USAID para el fortalecimiento de la participación de las comunidades afrodescendientes de los consejos comunitarios del Río Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Mayor Anchicayá y Bajo Calima de Buenaventura.

implementación de los PDET no son lineales. Pasan por garantizar el derecho a la igualdad, a que las comunidades sean realmente escuchadas y que se tenga en cuenta su experiencia, tal como se hizo con Yurumanguí y otros territorios del Pacífico medio en el periodo 2017 -2019 que se construyeron los PDET. Esto permitió a las instituciones estatales comprender mejor a las comunidades que habitan en la Buenaventura rural. Además, ofrece mayores posibilidades de satisfacer las aspiraciones de las comunidades de que el PDET “sea una oportunidad de reparar los daños generados por el conflicto en sus territorios, es decir, que considere un enfoque reparador en su formulación e implementación”.²⁸

En definitiva, Yurumanguí fue un agente en la construcción del PDET. Su capacidad organizativa y su forma de autogestión y construcción de elementos prácticos que sirvieron de guía para fortalecer el proceso de los PDET fueron grandes aportes, porque posicionaron, por un lado, el rol de agente de las comunidades dentro del proceso y, por el otro la necesidad de reflexionar en torno a temas estructurales, partiendo del derecho a la igualdad. Estos elementos son indispensables para la reparación de las comunidades negras, la construcción de paz con enfoque territorial y las garantías de no repetición. Sin la base organizativa sólida que caracteriza a la comunidad de Yurumanguí, el aporte no hubiese sido el mismo (LC14, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021). Y esta capacidad organizativa se consolidó mediante estrategias que desarrollaron los pobladores desde una lógica no violenta desde los años 90 (ver figura 3.1).

2. Transformación pacífica de conflictos

Con base en las discusiones teóricas sobre resistencia no violenta, transformación pacífica de los conflictos y construcción de paz (cf. Capítulo 1), esta sección argumenta que uno de los aportes de la comunidad de Yurumanguí ha sido su capacidad de generar espacios de diálogo con y entre grupos beligerantes con presencia en el territorio. Su fortaleza organizativa les ha permitido configurarse como facilitadores en procesos de transformación pacífica de conflictos a nivel local en un complejo escenario de actores armados. Igual que en otros casos (ej. Hernández 2012) esta experiencia de intermediación ha resultado significativa para la construcción de paz desde abajo.

²⁸ Cartilla pedagógica: aportes comunitarios para la construcción de iniciativas en la zona rural del distrito de Buenaventura (2019, 49).

Figura 3.1 Proceso organizativo



Fuente: Fotografía tomada en la casa cultural en San Antonio de Yurumanguí

Tal como señala Valencia (2004, 14), en Colombia la resistencia comunitaria procura el desarrollo de pactos de convivencia que logran transformar las relaciones con los actores armados. Los esfuerzos colectivos de los pobladores en Yurumanguí fueron útiles para generar escenarios de diálogo no solo entre la comunidad y diversos grupos armados sino también entre actores armados asentados en el territorio. En el 2019, tres años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Yurumanguí vivía una situación difícil. Según algunos líderes, ese año fue particularmente complejo dado que grupos armados ilegales se disputaban su ubicación en el territorio (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021). Tal como se señaló en el capítulo 2, desde su proyecto autónomo las comunidades han utilizado el diálogo como una

estrategia noviolenta y de construcción de paz. Sus esfuerzos conllevaron a la construcción de rutas locales para abordar los conflictos en el territorio (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

En ese sentido, el acuerdo de convivencia de la comunidad negra de Yurumanguí se configura un aporte importante. Esto devela la preocupación de la comunidad por construir formas y estrategias para contener y/o transformar las múltiples expresiones de conflicto violento que surgen en las relaciones entre vecinos principalmente, hasta aquellas que se dan en torno a los grupos armados. La creación de estas pautas para abordar los conflictos está inmersa en el manual de convivencia o reglamento interno de la comunidad. Tanto el reglamento como el manual recalcan el diálogo como un factor indispensable para la transformación pacífica de los conflictos. Así, en el mar de hostilidades que se vivía a finales del año 2019, la comunidad pudo entablar diálogos de manera separada con diferentes actores armados y promover mesas de diálogo conjunta, lo que permitió disminuir los enfrentamientos violentos (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

En este escenario, varios aspectos resultan relevantes. Hubo la construcción de una agenda no formal para el diálogo. Hubo esfuerzos por generar un escenario de confianza entre las partes. Se identificaron líderes como facilitadores y como mediadores del proceso. Claramente, desde la mirada de Lederach, esto fue un ejercicio de establecimiento de la paz de abajo hacia arriba que, en el marco de un contexto específico, buscó mitigar la violencia directa. Fue la comunidad quien asumió un rol preponderante y fungió de facilitadora. Este diálogo, se dio bajo el liderazgo de la comunidad y sus líderes y tuvo como resultado una tregua de 40 días aproximadamente (LC08, lideresa, en entrevista con la autora, febrero 2021). Permitted transformar la situación de conflicto “porque quien resiste traza una nueva trayectoria para sus relaciones” (Valencia 2014, 14).

Esta experiencia nuevamente fue el resultado de la capacidad organizativa, la fortaleza comunitaria y la autonomía que identifica a la comunidad de Yurumanguí. De acuerdo con Kaplan (2020), las comunidades con estas características desarrollan la habilidad de protegerse a sí mismas; y en eso concuerda con Donais (2011), en tanto que logran transformar escenarios de conflicto a través de sus propios métodos. De acuerdo con algunos testimonios, en Yurumanguí

se han desarrollado procesos que se denominan aquí “procesos de desarme, desmovilización y reintegración territorial” (DDRt) y se refieren a procesos en los que actores armados que pertenecen a la comunidad retornan al territorio y se reinsertan a la vida civil; es decir, dejan las armas, se desmovilizan y se reintegran a la comunidad. Sin embargo, aunque estos procesos pueden ser o no mediados por las autoridades en el territorio, su mayor característica es que se dan sin injerencia del Estado (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Las experiencias de DDRt a las que se hace referencia son un tema complejo incluso para los pobladores quienes han tenido que desarrollar formas de relacionamiento cotidianos con estos actores que otrora eran sus victimarios. Este sin duda no es un asunto menor. El rol de la comunidad toma relevancia porque, pese a que no ha existido públicamente procesos en los que los líderes sean quienes hagan mediación para esta transición, se reconoce que ha sido necesario hablar con los pobladores (en un sentido no tan formal o estratégico) del trato y el comportamiento con los actores que han decidido voluntariamente volver a la vida civil. Así, del mismo modo como se entiende que es menester entablar diálogos para llegar a mínimos con los actores armados, se reconoce que el diálogo es una herramienta que ha permitido que este tipo de procesos se den, aunque de manera poco reconocida (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021).

Yurumanguí ha entendido e interiorizado la importancia de transformar los conflictos y construir paz a través del diálogo. De acuerdo con su reglamento interno, cada comunidad tiene autoridades de resolución de conflictos (ARC) y un comité de resolución de conflicto ampliado (CRCA). Los principios rectores de estas instancias son: conciliación, prevención, educación desde lo propio, tolerancia, solidaridad, primacía del interés general, igualdad y dignidad humana (Acuerdo de convivencia s/f, 21). Además, los Yurumanguireños estipulan que la audiencia de aclaración de hechos, la asamblea veredal y la asamblea de justicia son los espacios pertinentes para tramitar los conflictos internos. En efecto, estos son espacios formales comunitarios distintos a los espacios de encuentro con los actores armados, pero que sirven para catalizar los conflictos internos.

Así, las habilidades de resistencia no violenta entraron en sinergia con del diálogo para avanzar no solo en la mitigación de distintas violencias, sino en la búsqueda de una sociedad más justa y de una paz sostenible tal y como lo plantea la matriz de Curle. En el capítulo de marco teórico vimos cómo las comunidades en escenarios de conflicto armado generalmente desarrollan estrategias de resistencia para cuidarse de los grupos armados y cómo el diálogo es una herramienta para blindar sus procesos organizativos y fortalecer su autonomía. Esto se ha dado independiente de que las políticas públicas y la legislación colombiana lo permitan o no y se ha dado también en otras regiones de Colombia (ej. Mouly, Hernández y Garrido 2019; Kaplan 2020).

Sin embargo, este caso presenta una novedad interesante puesto que, el diálogo no fue solamente entre comunidad y actores armados, sino que alcanzó espacios de interlocución entre actores armados ilegales, a fin de que se construyeran acuerdos que garantizaran el bienestar de la comunidad. Si bien esta no es una práctica reconocida, los yurumanguireños consideran que es momento de que se les garantice lo que han llamado “el derecho a la resistencia” que pasa por reconocer a las comunidades estas posibilidades de diálogo sin que eso represente un delito o una amenaza contra la libertad de quienes lo hagan (LC02, lideresa, en entrevista con la autora, enero 2021). Con ello, apelan a lo que Hernández (2012) denomina la aplicación del derecho y del deber constitucional de la paz.

Como ha evidenciado esta investigación, Yurumanguí ha logrado materializar el derecho constitucional de la paz haciendo uso de su experiencia organizativa, de sus prácticas culturales y ancestrales, que han apuntado desde la dimensión de autonomía, a cuidar y mantener el territorio; es decir, han podido permanecer en su entorno de vida y mitigar los impactos del conflicto armado. De este modo se suman a la lista de comunidades que han logrado intervenir como terceros en el conflicto armado a través de diálogos que tienen un poder transformador, lo que los posiciona, como diría Hernández (2012, 90) como “cualificados constructores de paz”.

Esta experiencia de transformación pacífica de conflictos se plasmó en la palabra, el diálogo y la ritualidad (cf. Hernández 2012, 113). Este tipo de intervención evidencian la capacidad de la comunidad de generar diálogos con poder transformador que, al igual que otras experiencias en el país en muchos casos han logrado impedir, neutralizar, disminuir o transformar situaciones de

conflicto violento en los territorios. La mediación, la intermediación o lo que algunos llaman la “diplomacia noviolenta de base social” (Hernández 2012) surge a partir de diálogos comunitarios y ha permitido avanzar y construir de manera creativa procesos que transforman y que, en términos de Lederach (2008) “hacen posible lo imposible” y “dan a luz lo que no existe”. Pensar el proceso de construcción de paz a nivel nacional en un sentido general pasa por diálogo, acuerdos e implementación bajo la responsabilidad de las partes, que generalmente involucran como actores principales al Estado y a grupos armados con estatus beligerantes. Pero, pensar la construcción de paz, el diálogo, la mediación, entre comunidad y actores armados y particularmente entre actores armados trae una serie de desafíos diferentes. Siguiendo la pirámide de Lederach (1998), los líderes de las comunidades son actores clave durante un proceso de construcción de paz, dado que, a diferencia de los líderes en niveles más altos, “conocen y son testigos día a día de la animosidad y el odio profundamente arraigado” (Lederach 1998, 71). Este factor les permite entender mejor el contexto y facilitar la transformación pacífica de los conflictos a nivel local.

Todo esto es importante porque según la literatura, los procesos de paz que priorizan la participación y los esfuerzos de las comunidades son más exitosos. Y a menudo, el desarrollo de estas iniciativas antecede procesos formales de construcción de paz. Además, este tipo de experiencia que viven las comunidades les permite, como en el caso de Yurumanguí, seguir fortaleciendo su proceso organizativo y de autonomía desde el cual pueden hacer incidencia en otros espacios o iniciativas. Este caso ilustra como dos enfoques distintos pero que convergen, la resistencia noviolenta y la transformación pacífica de los conflictos, (es mediante el diálogo) son necesarios para transformar los conflictos violentos y aumentar la probabilidad de que los grupos alcancen sus metas (cf. Dudouet 2017; Wanis-St y Rosen 2017; Bloch y Schirch 2018).

En este caso en particular, si bien fue posible una tregua, no fue por tiempo prologado, lo que podría entenderse como un ‘fracaso’ del proceso. No obstante, el diálogo y la tregua en sí mismos también pueden entenderse como un logro significativo. Ahora, posiblemente el ‘fracaso’ de estos intentos de transformación de conflicto se debe entre otras cosas a que no se trató de un acuerdo de paz, sino de llegar a acuerdos mínimos para evitar enfrentamientos armados, lo que Valencia (2004) denomina “acuerdos de convivencia”. Otros elementos como la falta de apoyo

institucional o de expertos, la falta de confianza entre grupos y de garantes externos también podrían explicar la falta de sostenibilidad del proceso. No obstante, este acercamiento fortaleció la autonomía comunitaria y fue un precedente para seguir pensando, en palabras de Hernández (2012), “formas de intervenir antes de que anochezca”. Estos esfuerzos son dados desde la informalidad, pero dan luces sobre la importancia y la capacidad que tiene la comunidad para transformar conflictos, tanto generando espacios de diálogos con y entre grupos armados ilegales, como haciendo uso de su saber ancestral y su conocimiento cultural para fortalecer los procesos internos y sanar las heridas de la guerra.

La transformación de un conflicto es un arte y, como tal “los pasos específicos dependen de una profunda comprensión del contexto particular” (Bloch y Schirch 2018, 33). Siguiendo a autores como Dudouet (2017), Schirch (2008) o Wanis-St y Rosen (2017) que recalcan la sinergia entre la transformación de conflictos, y la resistencia noviolenta para abordar las raíces de los conflictos y lograr una paz justa y sostenible encontramos que los pobladores de Yurumanguí es lo que podríamos llamar “activistas constructores de paz”. En efecto, a través de la combinación de estrategias convencionales y no convencionales, generaron diálogos y promovieron la paz y el respeto por los derechos humanos en el marco de la noviolencia.

Tal como lo ha señalado Hernández (2012, 88), estas iniciativas develan de muchas formas que quienes las impulsan se anida un poder de transformación, “facilitan el desarrollo de capacidades y potencialidades comunitarias y colectivas para el trabajo por la paz; generan procesos organizativos, construyen propuestas y políticas propias”. Aunque estas iniciativas son perfectibles, tienen alcance importante. La comunidad de Yurumanguí ha otorgado un valor fundamental a la palabra, los diálogos, la solidaridad, la tradición y la cosmovisión. Desde el despliegue creativo de acciones de resistencia noviolenta, han aportado a la construcción de paz porque han logrado, como diría Lederach, hacer posible lo imposible.

Varios autores (ej. Galtung 1998; González, Herbolzheimer y Montaña 2010; Hernández 2012) han dicho que las negociaciones de paz en contextos de conflictos armados internos “no responden por sí solos a los retos y demandas que implican la construcción de la paz” (Hernández 2012, 24). La forma en que los yurumanguireños han intervenido en los conflictos como agentes

transformadores ha permitido salvar vidas y proteger el territorio. Además, contribuyó a la construcción de paz y al fortalecimiento de la autonomía.

Estos esfuerzos de transformación de conflictos desde la construcción de paz y la no violencia plantea dos grandes reflexiones. Primero, la comunidad ha tenido la capacidad de identificar posibilidades de diálogos en medio de un conflicto latente entre grupos armados, persuadir y desarrollar una suerte de diplomacia preventiva. Esto es evidente en el testimonio de un líder de la comunidad cuando expresó: “entonces dijimos: ustedes están peleando por lo mismo, lleguen a un acuerdo” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Segundo, esta experiencia enseña y muestra otras formas y posibilidades de transformar conflictos armados desde los territorios que han sido directamente afectados. Vemos en esta experiencia una paz imperfecta, en construcción, inacabada, pero importante.

3. Sustitución de cultivos ilícitos

Esta sección examina el aporte de la comunidad de Yurumanguí en relación con el punto 4 del acuerdo de 2016 que plantea la solución al problema de las drogas ilícitas. En el ejercicio de su autonomía, esta comunidad se declaró un territorio libre de coca. Dicha declaración se dio en el marco de una asamblea general y fue catalogada como un mandato dentro de la comunidad. Los yurumanguireños usaron estrategias no solo para erradicar los cultivos, sino también para prevenir convertirse en un territorio cocalero. Estas estrategias dan luces para abordar el problema de las drogas ilícitas en el sentido de la prevención, más allá de erradicación.

3.1. “No vamos a dejar sembrar coca”

En general, en Colombia, el narcotráfico ha sido clave para el financiamiento de grupos ilegales, por lo que los cultivos ilícitos se han diseminado en muchos territorios del país. Este se ha configurado un problema de grandes dimensiones, lo que ha evocado la necesidad de construir alianzas para afrontarlo. Un aliado fundamental para Colombia ha sido Estados Unidos. El tema de lucha contra el narcotráfico ha ocupado la agenda del país y las relaciones bilaterales con Estados Unidos durante muchos años. El Estado colombiano ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y adoptó la Ley 67 de 1993 para su aplicación.

Desde 1978, bajo la administración de Julio Cesar Turbay se han dado fumigaciones aéreas con el uso del glifosato. La Corte Constitucional ha señalado que estas fumigaciones han sido una de las causas del desplazamiento en el país y que su uso ha generado daños a la salud y a los cultivos en los territorios. En razón de eso, el Estado, ha tenido la responsabilidad de indemnizar a los afectados (Delgado 2017). A la fecha, el debate sobre el uso del glifosato en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos sigue vigente. En el 2015, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional ordenó suspender el uso de este herbicida ya que estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adujeron que podía ser cancerígeno para el ser humano y afectaba el medio ambiente (El Espectador 2015). En 2017 la Corte Constitucional a través de la sentencia T-236 de 2017 concluyó que “existen elementos para afirmar, provisionalmente, que el glifosato es una sustancia tóxica que, dependiendo de nivel de exposición, puede causar cáncer u otras afectaciones a células humanas” (Sentencia T-236/17) señaló que, para lograr la reactivación de tal práctica, el Estado tenía la responsabilidad de comprobar a través de investigaciones científicas que el uso de este herbicida no ocasionaba daños en la salud humana o al menos no en grandes proporciones (Sentencia T-236/17). En 2021 se archivó la propuesta de ley 044 de 2021 que buscaba prohibir su uso en la política nacional de drogas y se firmó un decreto que establece reglas para dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional, es decir, regular y mitigar los riesgos a la salud y al medio ambiente.

En este contexto, la implementación del acuerdo de paz de 2016 en territorios como Buenaventura representa un reto dado que cambia el enfoque de fumigación y lo ubica como último recurso, mientras que prioriza la sustitución voluntaria y concertada de cultivos ilícitos. En palabras del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, “lo que se acordó con las FARC es algo supremamente importante y es crear un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo” (El Tiempo 2016).

El punto 4 del acuerdo que refiere la solución al problema de las drogas ilícitas, abre la posibilidad de transformar estructuralmente las dinámicas del campo a partir no solo de la eliminación de la aspersión aérea que ha generado daño a los territorios y las comunidades sino particularmente poniendo en marcha programas que contribuyen al bienestar de las poblaciones que han sido afectadas. Esta iniciativa se ha enfocado en la necesidad de implementar Planes

Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que se enmarcan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito. (Acuerdo final de paz 2016, 100).

Frente a esto, la comunidad de Yurumanguí ha generado un aporte valioso, no solo porque sus prácticas de cuidado y autoconservación contribuyen a proteger los ecosistemas y la naturaleza en general, sino porque su arraigo al territorio le ha permitido defenderlo, de los cultivos de uso ilícito (ver figura 3.2). Su negativa a sembrar o consumir coca y su capacidad de generar alternativas económicas es fundamental para comprender por qué, contrario a lo que sucedió en otros lugares como Naya, Anchicayá y Raposo, el fenómeno de cultivos de uso ilícito no logró desarrollarse en Yurumanguí. Y entenderlo abre una puerta que sirve de ruta para el éxito de la sustitución de cultivos ilícitos que se plantea en el marco del acuerdo de paz de 2016.

Figura 3.2. Erradicación de cultivos ilícitos



Fuente: Fotografía tomada en la casa cultural en San Antonio de Yurumanguí 2021

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), durante el 2019 se detectaron en el país siete enclaves productivos ²⁹ “que concentraban el 34 % de toda el área sembrada con coca; para el 2020 este porcentaje subió al 40,5 %” (ONUDD 2021, 14). El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor afectación por coca, siendo Naya el

²⁹ “Un enclave productivo espacialmente se define (puntos calientes) como aquel territorio que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente significativa (hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado) y la persistencia del fenómeno ha sido superior a cuatro años” (UNODC 2021, 41).

territorio con mayor prevalencia de cultivos, aunque en comparación con otros departamentos cercanos como Chocó y Cauca, el Valle del Cauca presenta en los últimos cinco años menores cifras de cultivos de uso ilícito (ONUDD 2021)³⁰. Las estrategias gubernamentales que se han desarrollado, aunque han sido importantes en aras de reducción de cultivos de coca en algunas zonas del país, no son efectivas a largo plazo como lo muestra el ejemplo del chocó (ONUDD 2021, 13y14) debido a que no se han abordado las raíces del problema. Esto llama la reflexión sobre la necesidad de generar alternativas y cambios estructurales que involucren, entre otras cosas, el senti-pensar de las comunidades afectadas, como lo ha hecho la comunidad de Yurumanguí.

Mucho se ha dicho sobre los efectos de las políticas de fumigación o erradicación forzada que generalmente generan un “efecto globo”, es decir que se erradica en una zona y se disminuyen los cultivos, pero rápidamente aparecen en otros lugares (Pabón 2018). Por ello, las políticas de erradicación o sustitución deben estar acompañadas de estrategias que garanticen el pleno goce de derechos fundamentales en los territorios de cultivo que brinden las condiciones para fortalecer ejercicios de desarrollo comunitario. En este escenario, la experiencia de Yurumanguí es fundamental ya que comunidad por más de 20 años ha mantenido una visión de autonomía territorial y ha avanzado en la soberanía alimentaria, elementos que le han permitido re-existir y resistir al fenómeno de la coca.

Según datos del DANE (2018), en el censo nacional de población y vivienda, Buenaventura se caracteriza por tener altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (16,65%); y alarmantes cifras de pobreza multidimensional (41,0%)³¹. A ello se suman la débil presencia del Estado, especialmente en zonas rurales y su ubicación cerca de territorios que son enclaves productivos, por lo que Buenaventura posee “alta probabilidad de contagio por adyacencia” (Lobo, Vélez y Arroyo 2020, 3). No así, pese a tener condiciones propicias, Buenaventura representa menos del 2% de cultivos ilícitos en la región (Lobo, Vélez y Arroyo 2020). Una

³⁰ La fundación paz y reconciliación presento un artículo en que cuestionan las cifras presentadas en términos de reducción de cultivos de uso, véase: <https://www.pares.com.co/post/las-mentiras-del-gobierno-con-las-cifras-de-erradicaci%C3%B3n>

³¹ El Valle del Cauca presenta un índice de pobreza multidimensional de 13,6%, lo que indica que Buenaventura se encuentra un 27% por encima del promedio departamental en términos de pobreza multidimensional.

posible razón es el ejemplo de Yurumanguí y los esfuerzos de comunidades aledañas que lo han seguido.

Hoy por hoy, Yurumanguí es reconocido por su incansable resistencia a los cultivos de uso ilícito. En el 2017 la revista *Semana* otorgó el premio a “mejores líderes de Colombia” a la comunidad de Yurumanguí y fueron llamados “cultivadores de esperanza” (Semana 2017). En este sentido, esto revela el trascendental de la comunidad a la resolución del problema de los activos ilícitos. Yurumanguí es la esperanza viva, la llama que sigue encendida en medio del torrencial, es la prueba fehaciente de que, es posible construir territorios libres de coca, pero también de la necesidad de que exista un compromiso por parte del Estado colombiano para apoyar el desarrollo comunitario. No se trata solo de reducir los cultivos sino de que haya un cambio en la producción y se migre a alternativas de economía lícitas.

3.2. Sanar y prevenir

Debido a su trayectoria, el caso de Yurumanguí brinda elementos útiles para otras comunidades y territorios afectados por cultivos ilícitos en contextos similares. Con base en la experiencia de esta comunidad, la solución al cultivo de uso ilícito requiere abrir dos grandes frentes: la erradicación y la prevención. La comunidad de Yurumanguí ha sido estratégica al desarrollar acciones de resistencia noviolenta en ambos frentes. Primero, se trató de comprender que en las comunidades y los territorios se estaba cultivando coca, y que era urgente atender el problema para evitar sus consecuencias negativas. Esto requirió un proceso de concientización.

Yurumanguí logró esta concientización y desarrolló jornadas de erradicación manual de cultivos las veces que fue necesario. Esto se dio bajo el liderazgo de la comunidad y fue posible por la capacidad organizativa y la conciencia de los pobladores que no querían este cultivo dentro de su territorio.

Segundo, Yurumanguí ha evidenciado la necesidad irrisoria de fortalecer la prevención. No basta solamente con eliminar lo que hay de cultivos (sea sustitución voluntaria o no). Es menester prevenir que nuevos territorios sean propicios para ello. Esto implica que, por un lado, el Estado debe hacer presencia en las comunidades, garantizar necesidades básicas en los territorios vulnerables a la vez que se fortalecen procesos organizativos y se genera conciencia colectiva.

Yurumanguí no solo se declaró un territorio libre de coca a través de sus mandatos de asamblea, sino que hizo un ejercicio permanente de formación en tónica de ‘cuidar el territorio’, es así que bajo lemas como “el territorio no se vende, se cuida y se defiende” o reflexiones como “no queremos que el Gobierno fumigue, contamine, bombardee y nos quite nuestro espacio de vida” generaron una conciencia colectiva en todas las comunidades. Las mingas, las pancartas, los carteles, los pronunciamientos a través de medios y los comunicados internos han sido estrategias de resistencia no violenta pensadas en clave de la campaña para ‘curar’ y ‘prevenir’ el mal de la coca en el territorio³². En efecto, toda esta dinámica de curar y prevenir nace desde la cosmovisión de la comunidad, para quienes la prevención juega un rol importante (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021). A esto se suma que la comunidad ha articulado estrategias con componentes importantes de orden institucional y a la vez cotidiano. Tal como analizo en el capítulo 2, la concepción de ‘comunidad-escuela’ como estrategia de resistencia no violenta permitió arraigar valores culturales de cuidado por el territorio, de reconocimiento de la ancestralidad y con ello hacer un ejercicio permanente de prevención no solo en relación con el tema de cultivos de uso ilícito sino también con la minería mecanizada y la vinculación de jóvenes a grupos armados ilegales (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021).

Un aporte valioso de Yurumanguí es que revela la importancia de que las comunidades entiendan, como lo señaló un líder comunitario “lo que es para nosotros sin nosotros está en nuestra contra” (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021), como se planteó en el primero capítulo entender la importancia de la comunidad va más allá de hablar de paz territorial. Pasa por el reconocimiento de las formas propias de organización de las comunidades y el fortalecimiento de las mismas. Siguiendo esta lógica es posible articular esfuerzos que conlleven al éxito en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto permite abordar las raíces del problema y brindar soluciones estructurales.

Este ejemplo muestra que la política de drogas, el PNIS y todas las demás estrategias que se construyan a fin de dar salida al tema de las drogas deben tener enfoque comunitario, acorde con

³² Es importante mencionar que la expresión ‘mal de la coca’ hace exclusiva referencia a la forma en que las comunidades ven los cultivos de uso ilícito en clave de producción de clorhidrato de cocaína, mismo que cuando llega a los territorios fractura el tejido social y rompe las dinámicas propias por su estrecha relación con los actores armados y el narcotráfico. No así, a la hoja de coca se le reconoce su poder medicinal y su importancia cultural.

las realidades de cada territorio, y las capacidades organizativas de las comunidades y su identidad étnica. Solo así es posible garantizar la pertinencia cultural y la efectividad de estas estrategias a largo plazo.

Yurumanguí también ha demostrado que ha podido resistir entre otras cosas gracias a su capital social (cf. Lobo, Vélez y Arroyo 2020), el empoderamiento y la confianza en las formas de gobierno propio (en la junta de consejo y APONURY) que a su vez garantizan un respaldo permanente a sus líderes. El capital social de esta comunidad se identifica en el empoderamiento, la autonomía, el desarrollo de formas alternativas de transformación pacífica de conflictos que no hubiesen sido posible sin los liderazgos comunitarios y sin la capacidad de cohesión que caracteriza a sus pobladores (LC01, líder, en entrevista con la autora, febrero 2021). Este caso por tanto muestra la importancia de fortalecer el capital social de las comunidades que se ven amenazadas por el fenómeno de cultivos ilícitos, a la vez que se brinden herramientas y alternativas para garantizar su subsistencia y autonomía.

Es importante señalar que, si bien las estrategias que ha desarrollado Yurumanguí han sido clave para resistir a actores armados, cultivos ilícitos, minería mecanizada, etc. y hoy por hoy se constituyen una experiencia relevante para la implementación del acuerdo de paz de 2016, no pueden ni deben ser un sustituto del Estado. Es decir, es importante que el Estado asuma también sus responsabilidades en los territorios afectados por estos fenómenos. De no ser así, difícilmente se puede abordar las raíces de estos problemas. De hecho, según testimonios de algunos líderes, actualmente la comunidad se ve inmersa en un momento de crisis, con la reestructuración y presencia de grupos armados organizados que se están disputando el territorio y con la falta de oportunidades que sigue siendo una constante y que se ha visto agudizada por la pandemia del Covid-19. Existe un temor generalizado de que estas presiones comiencen a generar fracturas (LC04, líder, en entrevista con la autora, 29 enero de 2021).

Por eso, a inicios de 2021 la comunidad de Yurumanguí hacía un llamado urgente al Estado colombiano para que fortalezca las capacidades que existen y haga presencia en el territorio no con militarización sino con oportunidades socioeconómicas concretas para esta población. En definitiva, los líderes de Yurumanguí han sido visionarios y enseñan la importancia de serlo. La

formación, el empoderamiento y el fortalecimiento organizativo son sin duda un elemento importante para sanar, es decir ‘curar’ el problema de los cultivos de uso ilícito, pero también para prevenir que otras comunidades caigan en esta ‘trampa del cultivo ilícito’. Algunas experiencias de otros países como Tailandia muestran que es posible transformar el campo a partir de procesos de sustitución voluntaria (Godoy y Salcedo 2017). Pero, Yurumanguí aporta un elemento adicional. Enseña que no basta con sustituir, hay que prevenir. Desde su cosmovisión, es mejor prevenir que curar. Por lo tanto, aunque se entiende la importancia de avanzar con la sustitución voluntaria de cultivos, es necesario llevar a cabo estrategias para prevenir el efecto globo, así como fortalecer el capital social, cultural y organizativo en territorios cuyas características los ubica como blanco fácil para ceder a este fenómeno.

Dicho esto, en relación con el punto 4 del acuerdo de paz de 2016, Yurumanguí ha hecho aportes importantes. Primero, es una comunidad que durante más de 20 años se ha opuesto a los cultivos de uso ilícito en su territorio pese a las amenazas y la violencia directa a las que sus integrantes han sido sometidos. Han asumido una posición disruptiva en ese sentido porque comprendieron desde muy temprano que los costos en términos de la ruptura comunitaria, el incremento de la violencia, la pérdida de autonomía, entre otros, son más altos para su territorio y su comunidad en relación con el beneficio económico de la actividad. Este caso cuestiona el supuesto desde el cual se construyen mayoritariamente las políticas de sustitución de cultivos ilícitos y es que las comunidades son impulsadas principalmente por incentivos económicos (Lobo y Vélez 2022). Contrario a eso, este caso plantea que los factores cuanto culturales como ideológicos influyen en las decisiones de las comunidades y es necesario que las políticas públicas los consideren. El liderazgo local y la organización comunitaria ayudan a explicar la diferencia en la penetración y expansión de cultivos de coca en el territorio de Buenaventura (Lobo y Vélez 2022). En este contexto, más allá de la dicotomía entre prohibicionismo y sustitución voluntaria, esta comunidad da luces para sanar y prevenir el fenómeno. Primero, este caso hace énfasis en la necesidad de promover la sustitución voluntaria en territorios con presencia de cultivos ilícitos. Segundo, muestra la necesidad de enfocar esfuerzos para fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades y generar condiciones dignas de vida para prevenir nuevos escenarios de cultivos ilícitos.

Así, orientando las discusiones que han aquejado al país por mucho tiempo, Yurumanguí es el ejemplo vivo de que la erradicación voluntaria es a largo plazo una mejor elección para el país que el prohibicionismo. Demuestra que, si las comunidades cuentan con el apoyo del Estado para fortalecer sus procesos organizativos, sus prácticas culturales y de vida y sus estrategias de resistencia no violenta; los procesos que surgen de manera endógena pueden ser lo suficientemente sólidos para evitar la reproducción de prácticas de cultivo en territorios que, como Yurumanguí son afectados por todos los tipos de violencia, directa, cultural y estructural.

4. Reconciliación

“Reconciliarse es sanar, y sanar no es olvidar lo que pasó sino hacer transición y no quedarse estancado en el dolor”

Linda Y. Posso Gómez 2021

El cuarto eje en el que Yurumanguí ha hecho un aporte significativo a partir de su labor por la paz en el territorio es la reconciliación. Ésta no solo contribuye a prevenir nuevas formas de violencias dentro del territorio y sanar, sino que contribuye a la no repetición, uno de los cuatro pilares del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que estipula el acuerdo de paz de 2016. La reconciliación se entiende no solo como un acto de transición de dolor, sino particularmente como un proceso que tiene la capacidad de transformar escenarios de conflictos en espacios de diálogos, de reflexión, perdón y de memoria. No es por tanto un acto per se, está atravesada por una gama de elementos tradicionales y culturales que se constituyen herramientas para promover cambios y “superar la parálisis que genera la violencia tanto en las víctimas y victimarios” (Fundación para la reconciliación 2020).

La reconciliación, tal y como se entiende en esta tesis, está estrechamente relacionada con la memoria como elemento indispensable para alcanzar y construir el legado que desde la comisión de la verdad se busca, esto es, verdad, sana convivencia pacífica y no repetición (Corredor y Fuertes 2021). Así, la reconciliación facilita y posibilita el desarrollo de procesos de justicia, reparación y especialmente potencia la no repetición. Genera nuevos paradigmas donde toma

sentido el escenario local, las relaciones vecinales y comunitarias. Esto se relaciona con lo que expresó Ricardo Santamaria, director de la corporación Reconciliación Colombia, en el 2016:

Las comunidades y la vida personal evidencian mucha más convivencia frente al nivel nacional. (...) la reconciliación en el país debe hacerse desde los territorios, desde las comunidades, porque en ellas hay más ánimos de reconciliación y paz y son fuente de inspiración y aprendizajes para todo el país.³³

En Yurumanguí, cuando los paramilitares cometieron la masacre en la vereda El Firme en el 2001, la comunidad vivió momentos de crisis, tanto individuales como colectivos. Esto generó una ruptura que solamente fue posible sobrellevar gracias al calor de lo comunitario. Arraigados a la idea de la importancia de mantenerse en el territorio y con la convicción de que para seguir avanzando y creciendo como comunidad debían sanar, los yurumanguireños hicieron uso de sus prácticas ancestrales para transitar el dolor. Pero, transitar el dolor no es olvidar. La memoria sirvió como una fuente de reconciliación por cuanto permitió mantener el sentido de la existencia, de la vida y las luchas.

De acuerdo con algunos testimonios, una constante luego de cada hecho de violencia era hacer actos de conmemoración a través de los cuales era posible recordar a las víctimas y hacer sentir que quienes perdieron sus familiares no estaban solos, que había una comunidad dispuesta a ser soporte. Este quehacer se volvió cotidiano. Los yurumanguireños instauraron una estrategia de cambio, promoviendo una cultura de paz y no una de venganza. Entendieron desde siempre que la venganza es una parálisis que contribuye directamente a la escalada de los conflictos hasta convertirlas en violencia, y la violencia no genera sino más violencia (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Estos actos no solo contribuyeron a mitigar deseos de venganza, sino que redujeron la desconfianza que permeo a los pobladores y fortalecieron el liderazgo de las instituciones autónomas (cf. Mouly 2021).

³³ Palabras de Ricardo Santamaria director de la corporación Reconciliación Colombia, citado en Cámara de Comercio de Bogotá (2016). Recuperado de: <https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2016/Julio-2016/Que-piensen-los-colombianos-de-su-rol-en-la-reconciliacion>, última consulta: 05 noviembre de 2021.

La reconciliación no es un proceso unidireccional. Por el contrario, es un proceso multidireccional. De hecho, una particularidad en Yurumanguí es que se piensa la reconciliación con el victimario, pero también con el entorno natural, con el territorio, el río, los bosques que han sido víctimas. El proceso implica reconocer las afectaciones no solo al individuo sino también al entorno de vida. Según testimonios, “nosotros hacíamos valsadas porque queríamos reconocer esas afectaciones en el río, nuestros muertos que encontramos en el río, son parte de nuestra memoria” (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021). Este es un elemento que atraviesa el valor de la convivencia. Para vivir y convivir hay que reconocer, sanar y mantener viva la memoria. A la fecha de esta investigación, y en el marco del cumplimiento a la sentencia de restitución que reconoció las afectaciones al territorio de Yurumanguí, la comunidad ha propuesto construir un espacio de la memoria. Si bien ha desarrollado actividades que promueven la reconciliación en clave de memoria, consideran necesario contar con un espacio indicado para ello. Estas realidades convierten a los yurumanguireños en líderes que promueven la reconciliación no solo por su importancia para la convivencia comunitaria, sino también como una habilidad ciudadana, la cual es un elemento crucial para construir paz.

Otro elemento que ha sido indispensable en este largo camino hacia la reconciliación es el arte. Las distintas expresiones artísticas han hecho posible que se recree la tradición y la cultura en función de generar espacios para sanar y reconciliarse. Existe una canción en Yurumanguí que relata la masacre de El Firme, y hace parte del legado comunitario. En el trabajo de campo, fue posible constatar cómo fluyen en medio de los encuentros y las juntanzas este tipo de expresiones que, más allá de provocar tristeza hoy genera un reconocimiento a aquellos que ya no están. A continuación, se citan fragmentos de la canción:

Voy a contarles señores lo que en El Firme paso (Bis)
Allá mataron siete hombres y la gente se desplazó.
Y la gente del Barranco todos arrancaban el toldo.
Los unos para el Papayo y otros pa' San Antonio. (Bis)

Cuando venían subiendo, se cayó una escalera.
La gente estaba asustada en la vereda de Primavera.
Decían los veneraleños “la cosa se ha puesto dura”

Esperemos el... y nos vamos pa' Buenaventura. (Bis)³⁴

El baile, los cantos, los alabados, la música, el sonido de los instrumentos, etc. Hacen parte de las formas de expresión cultural que los yurumanguireños y en general los bonaverenses usan para sanar, para mitigar los dolores, para contar vivencias (ej. Ver figura 3.3). Las mujeres por ejemplo son consideradas la fortaleza y quienes llevan la batuta en este sentido. Se presenta a continuación una canción que fue construida por un grupo de mujeres en Yurumanguí y que se canta a viva voz:

Colombia queremos paz, Colombia queremos paz (Bis)

Porque ya estamos cansados les venimos a suplicar, les venimos a suplicar (Bis)

Que dejemos la violencia, que dejemos la violencia por nuestra seguridad, por nuestra seguridad.

A todos los colombianos, a todos los colombianos

Pongan la mano en el pecho, pongan la mano en el pecho

Que la vida es lo más lindo y también es un derecho.

(Grupo de mujeres Yurumanguí – matronas 2021)³⁵

Las expresiones artísticas son mecanismos que permiten transformar dinámicas a nivel personal, comunitarias, nacional e incluso a escala global (Beller 2009). En este caso, el canto ha sido un mecanismo de afrontamiento. Ayudó a transmitir el mensaje de paz y reconciliación. Pero también ayudó a tramitar el dolor, a sanar. Este proceso no es un proceso lineal, y en muchas ocasiones la comunidad ha pensado que no logran reconciliarse porque la herida sigue latente. En el trabajo de campo se constató que todas las acciones que hoy se desarrollaban en ese territorio y que constituían un aporte a la construcción de paz en el país no serían posibles si no hubiese existido una transición, un reconocimiento de la afectación y una conciencia de la necesidad de seguir construyendo en medio de la complejidad de las circunstancias.

³⁴ La autoría de esta canción sigue siendo desconocida para mí como investigadora. Al explorar sobre el autor, varios nombres fueron referenciados. No así, esta canción nace en Juntas de Yurumanguí, y la escuché por primera vez en una noche de juntanza mientras compartía con la comunidad en San Antonio.

³⁵ Este fragmento de la canción fue recreado por una matrona de la comunidad en medio de una entrevista el día 7 de octubre del 2020, quien canta a viva voz lo que por años le han dicho al país, que quieren paz.

Figura 3.3 Mural de la música



Fuente: Registro fotográfico en el trabajo de campo 2021.

Dicho esto, algunos testimonios señalan que, en parte, la búsqueda de la reconciliación significó intentar repoblar nuevamente la comunidad de El Firme que fue destruida en el 2001. Esto fue complejo. Entre 2003 y 2005 se hicieron intentos de sanar la afectación retornando y dando vida a esa comunidad. Más de 200 personas se dirigieron al territorio, pero no fue posible repoblarlo porque los temores y dolores sobrepasaban las ganas de volver. No obstante, fue un propósito mantener simbólicamente el espacio geográfico de esa comunidad. Es así que, durante el posacuerdo se ha hecho pedagogía del lugar, de lo que sucedió y se tiene la esperanza de que

algún día los yurumanguireños quieran volver a repoblar esa vereda (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021). Lo importante de la reconciliación no es pretender que no hubo afectaciones, que nada pasó y seguir. La reconciliación, muy lejos de significar olvidar destaca la capacidad de recordar, de reconocer la afectación y seguir avanzando.

En el 2017 se realizó una conmemoración simbólica por las víctimas en varias veredas de Yurumanguí. De acuerdo con los testimonios, se escribieron los nombres de las víctimas. Se plasmaban en piedras que luego eran ubicadas estratégicamente en las comunidades. También se escribían en pendones. Se realizaban procesiones, caminatas. Todos estos fueron insumos de la comunidad para lo que hoy se quiere desarrollar: construir un espacio de memoria. Además, parte de este ejercicio es establecer un día (29 de junio posiblemente) como el día de conmemorar a las víctimas en el marco del proceso de reparación colectiva. Todos estos aportes de construcción de paz son hoy por hoy una estrategia de no repetición para los yurumanguireños (LC03, líder, en entrevista con la autora, 4 febrero de 2021).

A este punto, es menester reconocer que el dolor de las masacres y las violencias que ha vivido esta comunidad todavía persiste. Pero los pobladores han logrado transitar ese dolor, desde lo comunitario, y eso ha sido fundamental para prevenir nuevos ciclos de violencia y evitar la repetición. La comunidad está comprometida por transformar las narrativas de violencia en narrativas de paz a partir de la reconciliación como valor social y político que les permite ser partícipes del cambio que necesita el país, como lo expresó un líder comunitario:

Hemos escuchado al victimario. Le hemos dado la mano. Hemos hablado de lo que sucedió, pero entendimos que, más allá de eso la reconciliación es algo que nos merecemos, que necesitamos para seguir viviendo, porque nadie vive si su corazón sigue intranquilo (...) Por eso para nosotros es tan importante el calor de lo comunitario, porque sentimos el amor y el apoyo de todos. Nadie está solo (LC10, líder, en entrevista con la autora, marzo 2021).

Yurumanguí se ha declarado un territorio de paz, alegría y esperanza. Y ese cambio en la narrativa se expresa a través de murales, de identificación de lugares comunitarios de paz, de la

escuela y en el desarrollo de la practica cultural a través del arte, cantos, arrullos, etc. (ver figura 3.4).

Figura 3.4. Bienvenida al espacio comunitario en San Antonio de Yurumanguí



Fuente: Registro fotográfico en el trabajo de campo 2021.³⁶

Para algunos, estos aportes a la construcción de paz pueden generar dudas. Muchas veces se espera que las comunidades contribuyan en términos materiales, para que se reconozca su labor. Pero, estas formas de hacer política comunitaria, estas estrategias intangibles, son las que están transformando de fondo el país. La capacidad de reconocer el dolor y transitarlo, de cambiar narrativas de guerra por discursos de paz, formar nuevas generaciones en el marco del amor y la solidaridad comunitaria, promover el respeto hacia la vida, la autonomía y el territorio, son insumos que están haciendo la diferencia, y tal como diría Eduardo Galeano “Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la

³⁶ Este letrero fue hecho por Paola Arboleda (Artista), Linda Y. Posso Gómez (Investigadora) y Elizabeth (Joven del territorio) y hace parte de un gesto de gratitud que como investigadora quise hacer a la comunidad por abrir sus puertas a esta investigación, no así, el mensaje fue expresamente dado por los líderes del territorio.

realidad es transformable”³⁷. Por eso, esta investigación reconoce a los yurumanguireños como agentes de cambios y constructores de paz.

Conclusiones

Este capítulo empírico ha dado respuesta a la pregunta “¿De qué manera la comunidad de Yurumanguí aportó a la paz nacional desde su proceso de paz territorial?”. Las estrategias de resistencia desarrolladas por los yurumanguireños entre los años 1998 y 2015 aportaron a consolidar el proceso de autonomía comunitaria y fortalecieron la dinámica política organizativa que ha caracterizado a este territorio. Se concluye que el aporte se dio en cuatro ejes fundamentales. El acuerdo de paz de 2016 fue un hito para la historia de Colombia. Diversos actores en el escenario nacional e internacional han sido clave. La implementación del acuerdo y los avances que presentan las provisiones a más de cinco años del proceso de paz han sido gracias a la convergencia del esfuerzo de múltiples actores locales, nacionales e internacionales.

Este caso permite identificar cómo aportan las comunidades desde su experiencia y cómo ejercen su agencia a través de procesos locales. Los yurumanguireños contribuyeron a partir de su proceso de resistencia no violenta en la construcción del PDET y con ello pusieron en discusión varias formas de violencia estructural que deben ser abordadas para alcanzar una paz estable y duradera, esto es abordar las raíces del conflicto armado y reconocer mayor equidad a las comunidades negras en términos socioeconómicos y de participación política, para asegurar la no repetición de hechos victimizantes.

Un segundo aporte se dio en términos de transformación pacífica de conflictos. Esta comunidad logró articular la resistencia no violenta con el diálogo como estrategia para mitigar diversos tipos de violencia y buscar una paz justa y sostenible. Posicionó a partir de su reglamento interno la importancia de transformar conflictos de manera pacífica y construir paz a través del diálogo. Con ello promueve una cultura de paz y deja de manifiesto la necesidad de tener en cuenta las experiencias de los locales, esto es sus formas de vida, su cosmovisión, sus reglamentos y capacidad para transformar conflictos desde lo comunitario.

³⁷ La frase es un fragmento del Poema de Eduardo Galeano titulado “Son cosas chiquitas”

El tercer aporte se dio en el marco de la construcción de estrategias para mitigar los cultivos de uso ilícito y la minería mecanizada dentro del territorio. Yurumanguí da cuenta de la importancia de la erradicación voluntaria para abordar el problema a largo plazo. No obstante, deja de manifiesto la necesidad de que se garanticen los derechos de las comunidades como forma de prevenir que se esparza el fenómeno de los cultivos en lugares cuyas características facilitan que se conviertan en enclave productivo. Desde su cosmovisión, los yurumanguireños comprenden que en el contexto de solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito el Estado colombiano debe propender no solo a erradicar de manera voluntaria dejando de lado políticas prohibicionistas, sino también prevenir y generar condiciones para evitar el crecimiento de nuevos focos de cultivos.

Finalmente, se reconoce un aporte en términos de la reconciliación. Esta comunidad, pese a haber vivido el flagelo de la guerra y sufrir hechos victimizantes, ha aportado a la reconciliación promoviendo una cultura de paz y no violencia a partir de su proceso de resistencia pacífica. Yurumanguí ha aprendido a transitar el dolor a partir de sus recursos culturales y tradicionales. Los cantos, los arrullos, las expresiones artísticas y la memoria han sido indispensables para reconocer las afectaciones y sanar. Este elemento que es necesario para construir paz, contribuye a prevenir nuevas formas de violencia dentro de los territorios. Con ello, se resalta la importancia de la comunidad en relación con la capacidad de agencia que posee para promover cambios a nivel tanto local como nacional.

Conclusiones finales

Desde finales de los años 90, en el escenario académico han crecido las tendencias que suscitan discusiones y reflexiones en relación con cómo se construye paz. Las perspectivas de paz liberal, comunitaria e híbrida han sido clave para comprender estas discusiones. Este trabajo argumenta que los procesos de resistencia no violenta que desarrollan las comunidades en escenarios de conflicto armado aportan a la construcción de paz no solo a nivel territorial sino también a nivel nacional. Además, sostiene que, en el campo de los estudios internacionales, es fundamental entender la importancia de las iniciativas que, desde el escenario local, contribuyen a procesos de construcción de paz en los territorios y se constituyen referentes para procesos de paz a nivel macro.

Esta investigación aporta a los estudios de paz y conflictos al analizar las sinergias entre procesos de resistencia no violenta y construcción de paz a nivel local, tomando como caso de estudio el proceso de la comunidad negra de Yurumanguí en el periodo de 1998 a 2020. Además, muestra cómo se puede implementar la paz territorial en la práctica. En ese sentido, se plantean aportes tanto a nivel teórico como práctico. Entender la manera en que los procesos de resistencia no violenta que surgen de la población civil para hacer frente al conflicto armado aportan a la construcción de paz en los territorios, da luces para comprender su importancia para la construcción de paz a nivel nacional.

Al momento de finalizar esta tesis en 2021, Colombia se encuentra en un momento histórico. La firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua fue un hito. El país se ha convertido en referente internacional no solo por el logro del acuerdo sino también por la eficiencia en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y de justicia transicional. Esta tesis señala que no basta con construir paz desde arriba, sino que es menester tomar en cuenta los esfuerzos que comunidades durante años y de manera sostenida hicieron para construir una paz que pese a ser imperfecta ha permitido a la gente sobrevivir y resistir los intentos de involucrarse en la guerra.

Muchas comunidades víctimas del conflicto armado, como Yurumanguí, han buscado la paz desde décadas. Es así que los hallazgos de esta investigación se plantean en dos grandes dimensiones. En primer lugar, se examinaron las estrategias de resistencia no violenta que desarrolló la comunidad de Yurumanguí entre 1998 y 2015 para resistir al conflicto armado. Además, se señaló la forma en que estas estrategias contribuyeron a generar paz en el territorio. En segundo lugar, se reflexionó en torno a la forma en que estas estrategias, nutrieron los esfuerzos de construcción de paz en el marco de la implementación del acuerdo de paz de 2016, incluyendo (i) la elaboración del PDET, (ii) transformación pacífica de conflictos, (iii) solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4 del acuerdo de paz) y (iv) reconciliación en clave de no repetición.

En Yurumanguí, las estrategias de resistencia no violenta comenzaron a desarrollarse mucho antes de que el conflicto armado llegara al territorio. Otras fueron las realidades que promovieron la organización comunitaria y la creación de entes territoriales autónomos que son los primeros esfuerzos de resistencia civil que se mencionan en esta investigación. Se encuentra que todas las estrategias de resistencia no violenta que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado fueron posibles gracias a dos grandes dimensiones: (i) político-organizativa desde donde se ubica la creación de los entes territoriales APONURY y consejo comunitario; (ii) sociocultural que recoge los elementos de juntanza, de recreación de la práctica ancestral. Estas dimensiones plantean de fondo que la resistencia civil fue posible y exitosa a partir de distintos elementos “lógicos y lúdicos” que permitió a la comunidad conservar su autonomía, proteger el territorio, permanecer y vivir su vida en él.

Este trabajo además encuentra que cada una de las estrategias de resistencia civil que se desarrolló en el contexto de conflicto armado surgió como respuesta a distintos tipos de violencia que atravesó la comunidad. No obstante, las estrategias fueron consolidando una caja de herramientas que para finales del 2015 y a partir del 2016, se convirtieron en insumos para la implementación de la paz. Bajo el lema de “Resistir no es aguantar”, los yurumanguireños demostraron la fuerza de la resistencia no violenta como un elemento indispensable para la paz territorial, que otrora era vista como un concepto que no respondía a las necesidades de la comunidad, sino que simplemente territorializaba el discurso político.

Los hechos de violencia tanto directa como cultural como lo son las masacres, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, los hostigamientos, señalamiento, amenazas y otros hicieron que la comunidad desarrollara acciones estratégicas de resistencia no violenta. Es así que los pobladores crearon planes de contingencia que les permitieron afrontar esa realidad y mantenerse a salvo sin salir del territorio, es decir sin desplazarse fuera de él. Además, hicieron pronunciamientos para visibilizar lo que sucedía y plantear su propuesta de comunidad de paz, generaron espacios de diálogos con los actores armados ilegales e incluso lograron mediar entre ellos. Crearon estrategias para formar a la comunidad, fortalecer el tejido social en clave de lo cultural como mecanismo de defensa, pero también de autonomía.

Las amenazas de volver Yurumanguí un territorio de cultivo de coca al servicio de los grupos armados y el narcotráfico, y la amenaza de minería mecanizada al servicio del capital causando daños irreparables al entorno natural, hicieron que los yurumanguireños declararan su territorio una zona libre de cultivos de uso ilícitos y minería. Declararon en su reglamento interno y en asamblea general que son salvaguardas. Tal como ellos mismo lo plantean, como muestra de autonomía territorial, están convencidos que “el territorio no se vende, se ama, se salva y se defiende”.

Todas estas estrategias hicieron un aporte a la construcción de paz en Colombia. Contribuyeron insumos tanto prácticos como potenciales para la construcción de paz e implementación del acuerdo de paz de 2016. La comunidad rompió la dinámica impuesta y construyó un escenario de paz territorial en lugar de seguir inmersa en ciclos de violencia. La construcción de planes de desarrollo con enfoque territorial evidenció la agencia de las comunidades para construir sus propias estrategias de paz. Este aporte enseña que no se trata entonces de territorializar el discurso sino de reconocer la autonomía territorial.

Romper los ciclos de violencia y promover una cultura de paz a partir del fortalecimiento del tejido social, del empoderamiento de la comunidad y la recreación de las prácticas culturales y ancestrales en clave de reconciliación develan la importancia de las acciones locales para la no repetición. Esto no suplanta la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado en términos de garantías de derechos en zonas como Yurumanguí donde los grupos armados muchas veces se

convierten en autoridad a falta de presencia del Estado. Los yurumanguireños defendieron a través de sus estrategias la triada “vida, territorio y autonomía”. Y han pedido que el Estado llegue a sus territorios no a través de su aparato militar sino desde una visión holística. De lo contrario, las estrategias de las comunidades a largo plazo podrían fracturarse o ser insuficientes y eso generaría nuevos ciclos de violencia.

La negativa de la comunidad de convertirse en zona cocalera o enclave productivo brinda luces para abordar el problema de los cultivos de uso ilícito en el país. En primer lugar, los yurumanguireños han demostrado que es posible resistir al fenómeno a partir de la autonomía territorial que involucra también aspectos de soberanía alimentaria. Además, han dejado un precedente: la sustitución de cultivos debe ser pensada teniendo en cuenta dos elementos claves, un enfoque comunitario y garantías de derecho. La lucha es contra los cultivos y se debe garantizar la autonomía comunitaria. Por otro lado, si bien es importante la sustitución por cuanto es vista como una forma de sanación del problema, es fundamental la prevención sobre todo a partir de la concientización. Yurumanguí es ejemplo vivo de que, para solucionar el problema de las drogas ilícitas, en principio, no hay que dejar que comience. Esto implica que el Estado garantice derechos en materia de necesidades básicas (abordar la violencia estructural) y se generen espacios de concientización para prevenir, a la vez de erradicar el fenómeno.

Dos reflexiones quedan al respecto. Primero, a pesar de que el fenómeno de cultivos de uso ilícito es un problema global, la solución al mismo pasa por lo nacional pero también por local y lo comunitario. De ese modo, es necesario replantear políticas prohibicionistas que no brindan a las comunidades las garantías para sustituir voluntariamente y menos para prevenir nuevos efectos globo en el país. Segundo, no es posible pensar la solución al problema de las drogas si no se considera un nuevo enfoque que, más allá de sustituir, genere condiciones y herramientas a las comunidades para prevenir el fenómeno, y prevenir es a todas luces un camino menos áspero que seguir curando una enfermedad que se esparce con rapidez.

Este trabajo de investigación se hizo a partir de la observación in situ, a través de la participación en una asamblea comunitaria, encuentros culturales de tipo académicos y religiosos y una misión humanitaria. Además, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas, 14 de ellas a miembros de

la comunidad, líderes y lideresas, a docentes, entre otros. Y un desmovilizado de la guerrilla de la FARC que tuvo presencia en el territorio. En términos metodológicos hubiese sido valioso tener más entrevistas de otros actores relevantes, pero la contingencia de pandemia mundial a causa del Covid-19 y particularmente el contexto de violencia que se agudizó en este escenario en Buenaventura no permitió conseguir más entrevistas, como se había previsto. No así, esta investigación presenta insumos valiosos que dan cuenta de la labor que la comunidad de Yurumanguí ha venido realizando desde finales de los 90 hasta la actualidad.

La presente investigación abre una agenda de posibles investigaciones en términos de la relación resistencia noviolenta - construcción de paz - paz territorial, como nexos que permiten entender las dinámicas territoriales de paz en escenarios de conflicto armado interno como el colombiano, que aportan luces para otros escenarios similares. En este contexto, esta investigación deja sobre la mesa la existencia de procesos exitosos de “desarme, desmovilización y reinserción territorial” (DDRt) que se dan en los territorios sin injerencia del Estado. Revela que se encuentran casos donde miembros de grupos armados en condiciones complejas regresan a los territorios y se insertan nuevamente a la vida civil. Sin duda, este es un campo en que la academia está llamada a ahondar.

Finalmente, si bien fue posible entrevistar a un miembro de las antiguas guerrillas de las FARC que brindó elementos para entender el impacto que la organización y la fortaleza comunitaria generó en los guerrilleros y la forma en que estos últimos reaccionaron (en el caso específico de Yurumanguí), este sigue siendo un tema por indagar a profundidad. Resulta interesante también entender la forma en que los procesos de resistencia noviolenta que generan un fortalecimiento organizativo y construyen paz contribuyen a que se den otros tipos de procesos bien sea de reintegración de actores armados en sus comunidades o las formas en que se rompen ciclos de conflictos violentos a partir de nuevas estrategias de relacionamiento con el opresor, por ejemplo, a través del arte y/o la educación. En ese sentido, esta tesis ilumina y abre caminos para nuevas investigaciones en torno a resistencia civil y construcción de paz en contextos de conflicto armado.

Lista de acrónimos

ANZORC	Asociación Nacional de Zonas de Reserva
APONURY	Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí
ARC	Autoridades de Resolución de Conflictos
CCCN	Consejo Comunitario de Comunidades Negras
CCY	Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí
CNMH	Centro Nacional de Memoria Historica
CODHES	Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CPSJA	Comunidad de Paz de San José de Apartadó
CRCA	Comité de Resolución de Conflicto Ampliado
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
DDR	Desarme, desmovilización y reintegración
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
GAO	Grupos Armados Organizados
GDO	Grupos Delincuenciales Organizados
ONUDD	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
PATR	Plan de Acción para la Transformación Regional
PCN	Proceso de Comunidades Negras
PDET	Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
RUV	Registro Único de Víctimas
SIMC	Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
SIVJNR	Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición

Lista de referencias

- Acosta, Catalina, Cristhian Uribe, Johanna Amaya, Alexander Idrobo, Felipe Aliaga, y Diego Ballén. 2019. "Reconciliación y construcción de la paz territorial en Colombia: el caso de la comunidad nasa". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*: 91-112.
<https://raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/10.24241-rcai.2019.121.1.91/446095>
- Agencia de Renovacion del Territorio. 2017 "Plan Estratégico 2017-2018". Bogotá.
<https://portal.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=22918>
- Arboleda, Santiago. 2011. "*Le han florecido nuevas estrellas al cielo: suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano*". Tesis de doctorado, Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador.
<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2816/1/TD018-DECLA-Arboleda-Le%20han%20florecido.pdf>
- Arreaza, Catalina, y Ann Mason. 2012. *Los actores internacionales y la construcción de paz en Colombia*. Compilado por Angelika Rettberg. Universidad de los Andes. 463-492.
<https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt18d83gj>
- Baiocchi, Gianpaolo. 2003 "Participación, activismo y política: el experimento de Porto Alegre" *Democracia en Profundidad*, A. Fung y E.O Wright (editores): 89-138.
- Barter, Shane. 2015. "Zones of control and Civilian Strategy in the Aceh Conflict" *Civil Wars* (17): 340-356. <https://doi.org/10.1080/13698249.2015.1100351>
- Bautista, Carolina. 2017. "Contribuciones a la fundamentación conceptual de paz territorial". *Revista Ciudad Paz-ando*. 10.1: 100-110. <https://doi.org/10.14483/2422278X.11639>
- Bloch, Nadine, y Lisa Schirch. 2018. *Promover sinergias entre la acción no violenta y la construcción de la Paz*. SNAP. Washington: Institute of Peace- Making Peace Possible.
<https://www.usip.org/sites/default/files/2019-08/snap-synergizing-nonviolent-action-and-peacebuilding-action-guide-spanish.pdf>
- Borja, Miguel. 2014. "La constitución negada". *Análisis político* (81): 114-126.
<http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v27n81/v27n81a08.pdf>
- Castillo, Orlado, Gerardo Garcés, y Helio Quintero. 2018. "Puente nayero una experiencia urbana de construcción de paz, reconciliación y resistencia civil". Tesis de maestría. Pontificia

- Universidad Javeriana. <https://es.scribd.com/document/434048607/Puente-Nayero-Experiencia>
- CNMH. 2015. "Buenaventura un puerto sin comunidad". Bogota.
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/buenaventura/>
- . 2018. "DAÑOS: Análisis de los impactos del conflicto armado colombiano". Bogotá: Centro Nacional de Memoria Historica.
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/danos.pdf>
- Chaves, Paola, Noelle Aarts, y Severine van Bommel. 2020 "Self-organization for everyday peacebuilding: The Guardia Indígena from Northern Cauca, Colombia". *Security Dialogue* 54 (1): 39-59.
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0967010619889471>
- Chenoweth, Erica, y Kathleen Gallagher Cunningham. 2013."Understanding nonviolence resistance: An introduccion". *Journal of Peace Research*: 271-276.
https://www.researchgate.net/publication/258155480_Understanding_nonviolent_resistance_An_introduction
- Chenoweth, Erica, y Maria J. Stephan. 2011. "Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict". *International Security* 33 (1): 7-44.
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IS3301_pp007-044_Stephan_Chenoweth.pdf
- Corredor, Yeimmy Stephania, y Juliana Fuertes. 2021."La memoria transformadora como estrategia de intervención profesional en los procesos de reconciliación social: comprensión a partir de mujeres campesinas, excombatientes y jóvenes en Manizales, Colombia". *SciELO Analytics*. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i31.10546>
- Corte Constitucional. 2017. Sentencia T-236/17. *Corte Constitucional Republica de Colombia*, 21 de Abril de 2017: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-236-17.htm>.
- Cortes, Carolina Ávila. 2021. "Los dos líderes sociales desaparecidos que protegían a Yurumanguí de la coca". *El Espectador*, 10 de diciembre de 2021.
<https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/abencio-caicedo-y-edinson-valencia-lideres-sociales-desaparecidos-de-yurumanguí/>

- Cruz, Juan Daniel, y Victoria Fontan. 2014. "Una mirada subalterna y desde abajo de la cultural de paz" *Ra Ximhai* 10 (2): 135-152. <https://www.redalyc.org/pdf/461/46131266006.pdf>
- Decreto 893. 2017. "Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial". Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf>
- Delgado, Carlos Hernando Jaramillo. 2017. "Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Interno. Responsabilidad del Estado por Aspersiones de cultivos Lícitos con Glifosato". Documento del Magistrado del Tribunal Administrativo del Cauca, Popayan. <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2218210/13635582/Ponencia+Reparaci%C3%B3n+integral+%28Mag.+Jaramillo%29.pdf/aeb7a6f6-a3ed-4656-b45f-592f37aa21d3>.
- Díaz, María Paula. 2015. "Impacto de la resistencia no violenta en el tejido social. Caso del CRIC en el Cauca". Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19044>
- Donais, Timothy. 2011. "¿Empoderamiento o imposición? Dilemas sobre la apropiación local". *Relaciones internacionales, GERI – UAM*: 47 -71. <https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/download/5063/5521/10719>
- . 2012. "Peacebuilding and Local Ownership: Post conflict Consensus -building". 1. a ed. New York: Routledge
- Dudouet, Véronique. 2017. "Powering to Peace: Integrated Civil Resistance and Peacebuilding strategies" *International Centre on Nonviolent Conflict*. https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/04/powering_to_peace_veronique_dudouet_icnc_special_report_series_april2017.pdf
- Duran, Pablo. 2014. "Paz sí, pero ¿cómo? La propuesta de las zonas de reserva campesina". *Conflicto y paz-Cien días vistos por CINEP*: 26-31. https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20140901e.paz_territorial83.pdf
- El Espectador. 2015. "Santos ordena suspender fumigación de cultivos ilícitos con glifosato". *El Espectador*, 9 de Mayo de 2015. <https://www.elespectador.com/judicial/santos-ordena-suspender-fumigacion-de-cultivos-ilicitos-con-glifosato-article-559592/>.

- El Tiempo. 2016. "Aspersión aérea no está prohibida en los acuerdos: negociadores de paz". *El tiempo*, 05 de Septiembre de 2016:
<https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/fumigaciones-aereas-en-acuerdo-de-paz-38574>.
- . 2016. "Los expresidentes de Colombia que intentaron el diálogo". *El tiempo*, 26 de Septiembre de 2016. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16712054>
- Forero, Sebastián. 2019. "¿Cuál es la importancia de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?" *El Espectador*, 02 de Marzo de 2019.
<https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/cual-es-la-importancia-de-los-programas-de-desarrollo-con-enfoque-territorial-pdet-article/>
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence". *Journal of Peace Research*, 27(3): 291-305.
<https://www.jstor.org/stable/423472>
- . 2010. "Direct, structural, and cultural violence" *Young, Nigel (ed) The oxford International Encyclopedia of Peace. Oxford University Press. Vol.4:* 312-316.
- . 1976. "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding" *Impact of Science on society. PRIO Publication*, 25 (9): 282-462. https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf
- Garrido, Belen, Cecile Mouly, y Annette Idler. 2016. "Jiu-jitsu en el contexto de conflicto armado: El poder de la resistencia no violenta". *Ciudad Paz-ando:* 155-167.
<https://doi.org/10.14483/2422278X.11410>
- Giménez, Jaime. *Autonomía Indígena y construcción de Paz sin el Estado: La Paz Híbrida y subalterna en los territorios zapatistas de Chiapa*. Quito: Tesis de Maestría. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Ecuador, 2017.
- Godoy, Nicolás Salazar, y Claudia Paola Salcedo. 2017. "Intercambio de conocimientos sur-sur entre el reino de Tailandia y la República de Colombia sobre intervenciones de desarrollo en zonas afectas por cultivos ilícitos". Bogotá: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ (GmbH)*.
<http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170919-tailandia-ejemplo-exito/docs/reporte-tailandia-19-11-17.pdf>
- Hallward, Maia, Juan Masullo, y Cécile Mouly. 2017. "Civil Resistance in Armed Conflict: Leveraging Nonviolent Action to Navigate War, Oppose Violence and Confront

- Oppression". *Journal of peacebuilding and development*.
<https://doi.org/10.1080/15423166.2017.1376431>
- Hancock, Landon, y Christopher Mitchell. 2012. "Local Peacebuilding and national peace: interaction between grassroots and elite processes".
- Hernández, Esperanza. 2000. "Comunidades de paz: Expresiones de construcción de paz en medio de la guerra y la esperanza". *Reflexión Política*, 2(4): 1-12.
<https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/854>
- . 2012. "Intervenir antes que anochezca". *Experiencia De Mediación Del Consejo Regional Indígena Del Cauca (CRIC) en el Conflicto Armado Colombiano*, de Esperanza Hernández Delgado, 105-160. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Intervenir-antes-que-anochezca-Esperanza-Hern%C3%A1ndez-Delgado-2012.pdf>
- .2009. "Resistencias para la paz en Colombia: Significados, expresiones y alcances". *Reflexión política 11 (21)*: 140-151. <https://www.redalyc.org/pdf/110/11011851010.pdf>
- Hernández, Esperanza, y Cecile Mouly. 2019. "Resistencias noviolentas en América Latina". Quito: FLACSO-Ecuador y Universidad de la Salle, 2019.
<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58411.pdf>
- Hernández, Esperanza, y Marcela Posada. 1999. *Con la esperanza intacta. Experiencias comunitarias de resistencia civil noviolenta*. Bogotá: Editorial Arte y Folito.
- Instituto Kroc Estudios Internacionales de Paz. 2021. "Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia: Logros, desafíos, y oportunidades para aumentar los niveles de implementación". Matriz de Acuerdos de Paz/Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz/Escuela Keough de Asuntos Globales, Notre Dame, IN and Bogotá, Colombia. <https://curate.nd.edu/downloads/6108v982w96>
- Isunza, Ernesto. 2016. "Para analizar los procesos de democratización: interfaces socioestatales, proyectos políticos y rendición de cuentas.» *Mexico: CIESAS Universidad Veracruzana-Miguel Ángel Porrúa*,: 265-293.
https://www.researchgate.net/publication/284565990_Para_analizar_procesos_de_democratizacion_Interfaces_socioestatales_proyectos_politicos_y_rendicion_de_cuentas

- Jaramillo, Sergio. 2014. "Paz territorial". *Presentacion en la Universidad de Harvard, Cambridge*. Estados Unidos. 53-60. <https://interaktive-demokratie.org/files/downloads/La-Paz-Territorial.pdf>
- Kaplan, Oliver. 2013. "Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia". *Journal of Peace Research*: 351-367. <http://www.jstor.org/stable/23441241>
- . 2020. "Resistir la guerra: O cómo se protegen a si mismas las comunidades". Bogota. Traducido por Pedro Enrique Valenzuela, 2020.
- Koefoed, Mino. 2017. "Constructive Resistance in Northern Kurdistan: Exploring the Peace, Development and Resistance Nexus". *Journal of Peacebuilding & development*: 39-53. <https://www.jstor.org/stable/48603191>
- Lederach, John Paul. 1997. "Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies". *United States Institute of Peace Press, Washington, DC*. <https://pestuge.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/12/John-P.-Lederach-Building-Peace.-Sustainable-Reconciliation-in-Divided-Society.pdf>
- . 2015. "Colombian Peace Process: Bridging Research and Practice". *Peace Policy*. <https://peacepolicy.nd.edu/2015/01/28/colombian-peace-process-bridging-research-and-practice/>
- . 2007. "Construyendo la paz Reconciliación sostenible en sociedades divididas". Traducido por Marta Gonzáles y Lourdes Paños. *Colección Red Gernika*. <https://www.gernikagoratur.org/portfolio-item/construyendo-paz-reconciliacion-sostenible-ciudades-divididas-lederach/>
- . 2008. "*La imaginación Moral : El arte y alma de construir la paz*". Traducido por Teresa Toda. <https://www.gernikagoratur.org/wp-content/uploads/2020/04/RG09-la-imaginacion-moral.pdf>
- Leonardsson, Hanna, y Gustav Rudd. 2015. "The 'local turn' in peacebuilding: a literature review of effective and emancipatory local peacebuilding". *Third World Quarterly*, 36(5): 825-839. https://www.researchgate.net/publication/345070676_The_'local_turn'_in_peacebuilding_a_literature_review_of_effective_and_emancipatory_local_peacebuilding
- Ley 70 de 1993. "*Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política*". <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993.pdf>.

- Lobo, Ivan, Maria Alejandra Vélez, y Alvaro Arroyo. 2020. "Origen de la resistencia comunitaria a los cultivos de uso ilícito: evidencia de un consejo comunitario de comunidades negras al sur de Buenaventura". *Estudios socio-juridicos*, 22 (2): 1-41.
<https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73363708011/index.html>
- Mac Ginty, Roger. 2011. "Hybrid peace: How does hybrid peace come around." En *A liberal peace? The problems and practices of peacebuilding*, de Susana Campell et. al, 209-225. London: Zed books, 2011.
- Mac Ginty, Roger, y Oliver P Richmond. 2013. "The Local Turn in Peace Building: a critical agenda for peace". *Third World Quarterly*, 2013: 763-783.
https://www.researchgate.net/publication/263554035_The_Local_Turn_in_Peace_Building_a_critical_agenda_for_peace
- Masullo, Juan. 2015. "El poder de no desplazarse. Resistencia no violenta contra grupos armados en Colombia". Washintong: International Center on Nonviolent Conflict.
<https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2015/12/ColombiaMonographSpanishTranslationFinal-1.pdf>
- Morales, Lorenzo. 2018. "Custodios del Yurumanguí". *Revista Semana*.
<https://www.semana.com/nacion/articulo/yurumanguui-uno-de-los-rios-mejor-conservados-gracias-a-la-comunidad/592468/>. (último acceso: 01 de 05 de 2021).
- Mouly, Cecile. 2021. "Peace Communities". En *The Palgrave Handbook of Positive Peace*. Ed. Katerina Standish, Heather Devere, Adan E. Suazo y Rachel Raferty, 1169-1186. Palgrave Macmillan.
- Mouly, Cécile, y María Bélen Garrido. 2018. "*No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia*". *Desafíos* (30)1:245-277.
<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/5282>
- Muñoz, Francisco. 2010. "Imperfect peace" en Young, Nigel (ed). *The Oxford International Encyclopedia of peace: Oxford University Press. Vol 2: 391-393*.
- Naciones Unidas. 1995. "Suplemento de un programa de paz: Documento de Posición del Secretario-General Presentado con Ocasión del Cincuentenario de las Naciones Unidas". Documento A/450/60 – S/1995/1, 25 de enero.

- . 1992. "Un programa de Paz: Diplomacia preventiva, establecimiento de la Paz y mantenimiento de la Paz". Documento de la Asamblea General Consejo de Seguridad. A/47/277 – S/241111, 17 de junio, 1992.
- Obregón, Diego, y Libardo Cordoba. 1992. "El negro en Colombia: En busca de la visibilidad perdida". Documento de trabajo 09, Centro de Investigaciones y documentación socioeconómica, Universidad del Valle. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cidse-univalle/20121119043021/doc9.pdf>
- UNUDD, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2021. "Sistema integrado de monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020". Bogotá. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf
- Pabón, Juan Sebastián Moreno. 2018. "El Efecto Globo: identificación de regiones propensas a la producción de coca". Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Edición especial CESED. <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/41027>
- Paladini, Borja. 2018. "Sistemas complejos, resiliencia e infraestructuras de Paz: nuevos marcos conceptuales y analíticos para pensar la paz territorial y la seguridad humana en la Colombia del Posacuerdo". *En Los retos de gestión de las violencias directas no políticas y la construcción de la Paz. ICIP Research, 05: 353-383*. Barcelon: Institut Catalá Internacional Per la Pau.
- Quintero, Claudia Yolima. 2020. "Consejo Comunitario del Río Yurumanguí: caso nuevo movimiento social que practica la noviolencia frente a la violencia de los actores armados. 2000 – 2016". *Revista de paz y conflicto*. 13(2): 163-193. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8035634.pdf>
- Rivera, Marinella, Luz Aida Castillo, y Marly Otálvaro. 2019. "Psicología de la Re-existencia : violencias, resistencias y nuevas formas de existir de las comunidades étnicas en calí-Colombia". Universidad Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15680/PSICOLOG%C3%8DA%20REEXISTENCIA_DIGITAL%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Sánchez, Eduardo, y Vicente Sánchez Jiménez. 2019. "En el proceso y el Acuerdo de Paz colombiano". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*. 121: 67-90.
<https://raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/10.24241-rcai.2019.121.1.67>
- Schirch, Lisa. 2005. "Little Book of strategic Peacebuilding : A Vision And Framework For Peace With Justice". New York: Good Books.
- . 2008. "Strategic Peacebuilding: State of the Field". *Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding 1 (1)*, 2008: 1-17. <http://wiscomp.org/Publications/Peace%20Prints-Strategic%20Peacebuilding-State%20of%20the%20Field-2008.pdf>
- Schock, Kurt. 2013. "The practice and study of civil resistance". *Journal of Peace Research* , 2013: 277-290.
- Sentencia, Yuramanguí. 2017. "Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras". Sentencia Referencia : 76-111-31 -21-003-2015-00053-01, Cali, 2017.
- Sharp, Gene. 2005. "Waging Nonviolent Struggle". *Extending Horizons Books PORTER SARGENT PUBLISHERS, INC*: 1-38. <https://www.nonviolent-conflict.org/resource/waging-nonviolent-struggle-20th-century-practice-and-21st-century-potential-3/>
- Valencia, Solange Bonilla. 2018. "Viva Dios, muera Barrabás: La Fiesta de los Manacillos de Juntas de Yurumanguí, un territorio en disputa". Bogota: Universidad de los Andes.
<https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/35065>
- Wanis-St, John, y Noha Antony y Rosen. 2017. "Negotiating Civil Resistance". *United States Institute of Peace*. Washington D.C: 129 (1): 1-28..
<https://www.usip.org/publications/2017/07/negotiating-civil-resistance>
- Yurumanguí, Documental Erradicación de Coca. 2015. "Erradicación manual de coca Yurumanguí (Buenaventura, Colombia) nov2007". *Youtube*. 29 de Abril de 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=UZPsmIBsSQI&t=608s>.
- Yurumanguí. 2019. "Documental Mi Rio Yurumanguí. Película Completa HD". 06 de Noviembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=OI3ARXQrywk&t=2711s>.
- Zirion, Iker. 2017. "Construcción de la paz posconflicto: Una introducción crítica a la paz liberal". *Instituto Hegoa (UPV/EHU)*: 1-8.

https://boletin.hegoa.ehu.eus/assets/templates/47/Bolet%C3%ADn_n%C2%BA50.pdf?1498730387

Zubiría, Sergio. 2016. "La paz territorial". 12 de Marzo de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=11xQ_pi8bkE (último acceso: 10 de Diciembre de 2020).